

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

14º REUNION — 4º SESION ORDINARIA — JUNIO 11 Y 15 DE 1995

### PRIMERA PARTE

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,  
Carlos Alberto Romero y Francisco de Durañona y Vedia

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,  
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

#### DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas  
ABIHAGGLE, Carlos Enrique  
ACENOLAZA, Florencio Gilberto  
ADAME, Felipe Teófilo  
ALBAMONTE, Alberto Gustavo  
ALBERTI, Juan Carlos  
ALCALA, Néstor Ricardo  
ALENDE, Oscar Eduardo  
ALGADA, Ernesto Pedro Andrés  
ALSOGARAY, Alvaro Carlos  
ÁLVAREZ, Carlos Alberto  
ÁLVAREZ, Carlos Raúl  
ÁLVAREZ, ECHAGUE, Raúl Angel  
ÁLVAREZ GARCÍA, Normando M.  
ANTELO, José María  
ARANDA, Saturnino Dantli  
ARGUELLO, Jorge Martín Arturo  
ARIAS, César  
ARMENDARIZ, Alejandro  
ARRECHEA, José Salvador  
AYALA, Susana Beatriz  
AYETZ, Lilianna  
BALESTRA, René Helvecio  
BALESTRINI, Alberto Edgardo  
BALESTRINI, Miguel Alberto  
BALTER, Carlos Mario  
BARBERA, Eliseo  
BARRIONUEVO, Eduardo E.  
BAUM, Daniel  
BECERRA, Carlos Armando  
BECERRA, Nicolás Eduardo  
BENEDETTI, Jorge Enrique  
BENZI, María Cristina  
BERHONGARAY, Antonio Tomás  
BERMUDEZ, María del Pilar  
BIANCHI SILVESTRE, Marcela  
BISCHOF, Enrique Alberto  
BONOMI, Silvia Mónica  
BORDA, Osvaldo  
BRACCHI, Osvaldo Américo  
BRANDA, Carlos Ernesto  
BRAVO, Alfredo Pedro  
BRESER, Adalberto Edgardo  
BRUNELLI, Naldo Raúl A.  
BULLRICH, Patricia  
CABIRON, Juan Carlos  
CALLABA, Anibal  
CAMAÑO, Eduardo Oscar

CÁMARA, Mario Ángel  
CARCA, Elisa Beatriz  
CASARI de ALARCIA, Leonor  
CASTILLO, José Luis  
CASTRO, Carlos José  
CEBALLOS, Walter Alberto  
GLOSS, Ramón Alberto  
CROSTELLI, Juan Carlos  
D'ALESSANDRO, Miguel  
D'AMBROSIO, Angel Mario  
DAUD, Jorge Carlos  
DELLA, Roberto Antonio  
DEL FABRO, Lilián  
DELLEPIANE, Carlos Francisco  
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl  
DIGÓN, Roberto Secundino  
DI TULLIO, Héctor Horacio  
DONNI, Luisa Cristina  
DRISALDI, María Rita  
DUMÓN, José Gabriel  
DURAÑONA y VEDIA, Francisco de  
DURIÉU, Marcela Margarita  
ESTÉVEZ BOERO, Guillermo E.  
FABRISSIN, Carlos Alberto  
FAYAD, Víctor Manuel  
FELGUERAS, Ricardo Ernesto  
FERNÁNDEZ MELJIDE, Graciela  
FIGUEROA, Pedro Octavio  
FRAGOSO, Francisco Ulises  
FUNES, Carlos Delcio  
GALVÁN, Raúl Alfredo  
GALLO, Orlando Juan  
GARAY, Nicolás Alfredo  
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel  
GAUNA, Juan Octavio  
GAZIA, Rodolfo Mauricio  
GIMÉNEZ, Delfor Abel  
GIMÉNEZ, Ramón Francisco  
GIOJA, José Luis  
GOLPE, Carlos Horacio  
GOLPE, Néstor Lino  
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.  
GONZÁLEZ, Antonio Erman  
GONZÁLEZ CABAÑAS, Tomás W.  
GRANADOS, Dulce  
GUZMÁN, María Cristina  
HARDY, Aníbal Osvaldo  
IBARBIA, José María  
IBARRACHE, Julio César  
ITURRE, E. del Vallo

JAUNARENA, José Horacio  
KAHLER, Ernesto Rolando  
KAMMERATH, Germán Luis  
KELLY, Elsa Diana Rosa  
KESSLER, Ana Raquel  
KOTH, Carlos  
LAFALLA, Arturo Pedro  
LAHOZ, José Fernando  
LAMBERTO, Oscar Santiago  
LARRABURU, Dámaso  
LECONTE, Ricardo Guillermo  
LEGUIZAMÓN, María Laura  
LÓPEZ, Alcides Humberto  
LÓPEZ, José Augusto  
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.  
LOSADA, Luis Enrique  
LYNCH, Carlos Alberto  
MACEDO, Horacio Antonio  
MACHADO, Oscar Alfredo  
MAIDANA, Elsa Ignacia  
MAQUEDA, Juan Carlos  
MARCOS, Ricardo Ernesto  
MARTÍNEZ, Esteban  
MARTÍNEZ, Manuel Luis  
MARTÍNEZ, Silvia Virginia  
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.  
MATHOV, Enrique José  
MATZKIN, Jorge Rubén  
MENDOZA, Claudio Ramiro  
MENDOZA, Martín  
MENEGLINI, Javier Reynalda  
MENEM, Carlos Omar  
MERCADER, Martha Evelyn  
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón  
MICHITTE, Salomón Antonio  
MIGLIOZZI, Julio Alberto  
MIBALLES de ROMERO, Norma  
MOLARDO, Elvio Francisco  
MOLINAS, Ricardo Francisco  
MONTIEL, Sergio Alberto  
MOREAU, Leopoldo Raúl  
MORELLO, Emilio Pedro  
MÜLLER, Mabel Hilda  
MUNIAGURRIA, Marcelo Julio  
NACUL, Miguel Camel  
NATALE, Alberto Adolfo  
NEDER, Jorge Humberto  
NEGRI, Mario Raúl  
NIEVA, Alejandro Mario  
NIÑO, Jorge

NOVAU, Pedro José  
 OLIVERA, Enrique José  
 ORQUIN, Leopoldo Manuel  
 PARADA, Alberto  
 PASQUAL, Rafael Manuel  
 PELAEZ, Víctor  
 PELLIN, Osvaldo Francisco  
 PEPE, Lorenzo Antonio  
 PÉREZ, Jorge Telmo  
 PERNASETTI, Horacio F.  
 PERRINI, Gioconda Eulalia  
 PESCE, Félix  
 PICCININI, Ana Ida  
 PICHETTO, Miguel Ángel  
 PIERRE, Alberto Reinaldo  
 POLINO, Héctor Teodoro  
 RE, Ricardo Horacio  
 RICO, Aldo  
 RODRIGO, Esteban Joaquín  
 RODRIGUEZ, Jesús  
 RODRIGUEZ, Mabel E.  
 RODRIGUEZ SASUDO, Hugo B.  
 ROGGERO, Humberto Jesús  
 ROIG, Ángel  
 ROJO, Rubén Darío  
 ROMERO, Carlos Alberto  
 ROMERO, Humberto Antonio  
 RUBINI, Mirta Elsa  
 RUIZ PALACIOS, José David  
 SALINO, María Antonia  
 SANTIN, Eduardo  
 SEBASTIANI, Claudio A.  
 SMITH, Santos  
 SOBRINO, Margarita María  
 SOLANAS, Fernando E.  
 SORIA, Carlos Ernesto  
 SPINOSA, Augusto Juan  
 STORANI, Federico  
 SUCABIA, Nayer  
 SUERO, Carlos Adolfo  
 TENEV, Carlos

TEODOSIU, Jorge Nicolás  
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor  
 TOGNI de VELY, Adriana  
 TOTO, Francisco Patricio  
 TRETTEL MEYER, Raúl  
 USANDIZAGA, Horacio Daniel  
 VALCARCEL, Juan Manuel  
 VARELA CID, Eduardo  
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz  
 VENESIA, Gualberto Edgardo  
 VICCHI, Raúl Horacio  
 VIGLIONE, Attilio Oscar  
 ZAVALIA, José Luis  
 ZICARELLI, Orlando A.  
 ZUCCARDI, María Cristina

## AUSENTES, CON LICENCIA:

SÁNCHEZ GALDEANO, Roque  
 SCHIARETTI, Juan  
 TOPA, Raúl Roque

AUSENTES, CON SOLICITUD  
DE LICENCIA PENDIENTE  
DE APROBACION  
DE LA HONORABLE CAMARA:

ARAGONÉS de JUAREZ, Mercedes  
 BARBOTTI, Attilio Ector  
 FALLETTI, Julio César José  
 FERNÁNDEZ GILL, Guillermo  
 FLORES, Rafael Horacio  
 FOLLONI, Jorge Oscar  
 GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.  
 HERNÁNDEZ, Antonio María  
 HERRERA ARIAS, Manuel H.  
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo  
 ROY, Irma  
 SAADI, Ramón Eduardo

## AUSENTES, CON AVISO:

ACHEM, Antonio  
 BONINO, Miguel Ángel  
 BRUZZO, Omar Obdulio  
 BUSSI, Antonio Domingo  
 CAMPERO, Rodolfo Martín  
 CASTILLO, Oscar Aníbal  
 CERDERA, Rogelio Rafael  
 CORCHUELO BLASCO, José M.  
 GALANTE, Pedro Jorge  
 GREEN, Gustavo Adolfo  
 GUERRERO, Luis Serafín  
 HERRERA, Bernardo Eligio  
 HUMADA, Raúl  
 JUNCOSA, Rodolfo Aldo  
 LLOPIS, Enrique Raúl  
 MANFREDOTTI, Carlos  
 MARCOLLI, Juan Miguel A.  
 MICHELLI, Marco Aurelio  
 MURIEL, Néstor Jorge  
 ORCAZ, Carlos Alfredo  
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.  
 PARAJON, José María  
 PAROLA, José María  
 PATTERSON, Ricardo Ancell  
 PERALTA, Aníbal Pedro  
 PINTO, Guillermo  
 POLO, Luis Nicolás  
 PRAT, Alfredo Ernesto  
 RODRIGUEZ, José  
 SAMPIETRO, Darcí  
 SARQUIZ, José Alberto  
 SCELZI, Carlos José  
 TOLOMEO, Leonor Ester  
 TOMA, Miguel Ángel  
 TROYANO, Silvia Elena  
 VARILLA, Néstor Ángel  
 VÁZQUEZ, Roberto  
 VITAR, José Alberto

La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 1ª sesión ordinaria (anexo 4ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

## SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 1250.)
2. Diario de Sesiones. (Pág. 1250.)
3. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 1251.)
4. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 1252.)
5. Diferimiento del término reglamentario destinado a homenajes. (Pág. 1252.)
6. Plan de labor de la Honorable Cámara. (Pág. 1252.)
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Storani con motivo de declaraciones públicas efectuadas por el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, doctor Domingo Felipe Cavallo (2.238-D-95). Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Pág. 1254.)
8. Moción del señor diputado Novau de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número

19 de este sumario. Se difiere su consideración para la oportunidad reglamentaria correspondiente. (Página 1256.)

9. Moción del señor diputado Vicchi de reconsideración de la solicitud formulada por el señor diputado Storani para que se lo autorice a comparecer en una querrela que se le ha iniciado por ante el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 7, aprobada durante la consideración de los asuntos a los que se refiere el número 3 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1256.)
10. Reconsideración del asunto al que se refiere el número 9 de este sumario. Es rechazada la solicitud. (Pág. 1257.)
11. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de tratamiento sobre tablas:
  - I. Moción del señor diputado López Arias de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 13 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 1258.)
  - II. Mociones del señor diputado Abihaggla de preferencia para los proyectos de ley de

- LXXI. Dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de resolución del señor diputado Abihaggle y otros por el que se felicita a los deportistas de Mendoza por su participación en los XII Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Buenos Aires. Se sanciona como declaración (1.009-D.-95). (Pág. 1364.)
- LXXII. Dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de resolución del señor diputado Sarquiz por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una sede de la Fundación Export-Ar en la provincia de Santiago del Estero. Se sanciona como declaración (847-D.-95). (Pág. 1365.)
- LXXIII. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el proyecto de resolución de los señores diputados Domí y Abihaggle por el que se declara de interés de la Honorable Cámara la Coalición Argentina para Prevenir la Violencia (7-D.-95). (Pág. 1366.)
- LXXIV. Dictamen de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios en el proyecto de declaración del señor diputado Sánchez Galdeano por el que se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para apoyar y fortalecer el crecimiento de la industria pesquera nacional (800-D.-95). (Pág. 1368.)
- LXXV. Dictamen de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios en el proyecto de declaración del señor diputado Sánchez Galdeano por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga alentar el plan destinado a la vigilancia satelital de pesqueros implementado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (1.292-D.-95). (Pág. 1368.)
- LXXVI. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Sánchez Galdeano por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga las medidas tendientes a evitar los accidentes que se producen en la ruta nacional 14 (1.085-D.-95). (Página 1369.)
- LXXVII. Dictamen de las comisiones de Asuntos Municipales y de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Pepe por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga requerir a la concesionaria Autopista del Sol la colocación de un puente tubular transitorio en la desembocadura de la calle Mercedes, en la Capital Federal (519-D.-95). (Pág. 1369.)
- LXXVIII. Dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de resolución del señor diputado Migliozi por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la creación de una sede de la Fundación Export-Ar en la ciudad de General San Martín, provincia de Buenos Aires (1.298-D.-95). Se sanciona como declaración. (Pág. 1370.)
- LXXIX. Dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de declaración del señor diputado Gioja por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga que la Fundación Export-Ar establezca una sede en la ciudad capital de la provincia de San Juan (1.014-D.-95). (Pág. 1371.)
- LXXX. Dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de declaración del señor diputado Becerra (N. E.) por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga invitar a las provincias que aún no lo han hecho a adherir a la ley 24.240, de defensa del consumidor (1.039-D.-95). (Pág. 1372.)
- LXXXI. Dictamen de la Comisión de Comercio en el proyecto de declaración del señor diputado Becerra (N. E.) por el que se expresa beneplácito por el aumento de las exportaciones de carnes (1.037-D.-95). (Pág. 1373.)
- LXXXII. Dictamen de la Comisión de Transportes en el proyecto de declaración del señor diputado Sánchez Galdeano por el que se solicita al Poder Ejecutivo que disponga la adopción de medidas tendientes a intensificar las campañas de educación vial (1.289-D.-95). (Pág. 1373.)
- LXXXIII. Pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre los dictámenes a los que se refieren los números 18.I a 18.LXXXII de este sumario. Se sancionan. (Página 1374.)
19. Moción de orden formulada por el señor diputado Novau de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y moción de tratamiento sobre tablas de los proyectos de resolución del señor diputado Brunelli (1.709-D.-95) y de la señora diputada Carea y otros (2.192-D.-95) por los cuales se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la situación de la Central Térmica de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Se aprueban ambas proposiciones. (Pág. 1374.)
20. Consideración del proyecto de ley de los señores diputados Lamberto y D'Alessandro por el cual se excluye de la prohibición establecida en la ley 17.051 a las asociaciones cooperativas matriculadas en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa (2.030-D.-95). Se sanciona. (Pág. 1376.)

21. **Moción de orden** formulada por el señor diputado Novau de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento y mociones de tratamiento sobre tablas del proyecto de ley del señor diputado Martínez (M. L.) por el cual se transfiriere a título gratuito a la Municipalidad de Morón un inmueble ubicado en Castelar, provincia de Buenos Aires (1.688-D.-95), y del proyecto de resolución del señor diputado Fayad por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre la nube tóxica que afectó a la población del Gran Mendoza (1.980-D.-95). Se aprueban dichas proposiciones. (Pág. 1377.)
22. **Consideración del dictamen** de la Comisión de Juicio Político en el proyecto de resolución del señor diputado D'Ambrosio por el cual se acusa al señor juez de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctor Eduardo Perugini, por la causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones (256-D.-91). Se sanciona. (Página 1378.)
23. **Consideración del proyecto de declaración** de la señora diputada Drisaldi por el cual se solicita a las empresas prestadoras de servicios públicos en la provincia de Santa Cruz que no trasladen el incremento del IVA a las tarifas para consumo (1.166-D.-95). Se sanciona. (Pág. 1392.)
24. **Moción del señor diputado Lamberto** de que se autorice a la Presidencia a efectuar las comunicaciones de los proyectos que se aprueben en la sesión en el caso de que se pase a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 1392.)
25. **Consideración del dictamen** de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre riesgos del trabajo (59-P.E.-94). Se pasa a cuarto intermedio. (Pág. 1393.)
26. **Apéndice:**
  - A. Sanciones de la Honorable Cámara. (Pág. 1468.)
  - B. Asuntos entrados:
    - I. Mensaje del Poder Ejecutivo. (Pág. 1497.)
    - II. Comunicaciones del Honorable Senado. (Pág. 1498.)
    - III. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 1500.)
    - IV. Dictámenes de comisiones. (Pág. 1501.)
    - V. Dictámenes observados. (Pág. 1513.)
    - VI. Comunicaciones de comisiones. (Pág. 1513.)
    - VII. Comunicaciones de señores diputados. (Página 1514.)
    - VIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 1515.)
    - IX. Peticiones particulares. (Pág. 1539.)
    - X. Proyectos de ley. (Pág. 1546.)
    - XI. Proyectos de resolución. (Pág. 1561.)
    - XII. Proyectos de declaración. (Pág. 1591.)
    - XIII. Dictámenes. (Pág. 1621.)

C. **Inserción solicitada** por el señor diputado Solanas. (Pág. 623.)

D. **Asistencia de los señores diputados a las sesiones** (meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1994.) (Pág. 1625.)

—En Buenos Aires, a los catorce días del mes de junio de 1995, a la hora 16 y 51:

## 1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Pierri).** — Con la presencia de 130 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito a la señora diputada por el distrito electoral de Buenos Aires, doña Liliana Ayetz, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, la señora diputada doña Liliana Ayetz procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

## 2

## DIARIO DE SESIONES

**Sr. Presidente (Pierri).** — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 del reglamento, corresponde considerar, a fin de que los señores diputados indiquen los errores que pudieran contener, los Diarios de Sesiones de la Asamblea Legislativa realizada el 1º de mayo de 1994, y de las reuniones efectuadas entre el 16 de junio de 1994, correspondiente a la 5ª reunión, continuación de la 2ª sesión ordinaria, y el 19 de octubre de 1994, en que tuvo lugar la reunión 27ª, continuación de la 10ª sesión ordinaria.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital:

**Sr. Polino.** — Señor presidente: desearé hacer un comentario acerca de los Diarios de Sesiones.

Se hace un gran esfuerzo en la Cámara tomando la versión taquigráfica, corrigiéndola y mandándola a Imprenta, pero el atraso que tiene la publicación de los Diarios de Sesiones es realmente insólito, porque a nadie puede interesar —o a muy pocos— un Diario de Sesiones que sale nueve, diez o más meses después de la sesión correspondiente.

Yo reclamo de la Presidencia que arbitre las medidas que estén a su alcance para que los Diarios de Sesiones sean impresos y distribuidos en un tiempo prudencial, de modo tal que cuando lleguen a sus usuarios los temas tengan alguna actualidad. La confección de los Diarios

**Sr. Lamberto.** — Señor presidente: formulo moción para que la Honorable Cámara autorice a la Presidencia a efectuar las comunicaciones pertinentes de los proyectos que se aprueben en la presente sesión, independientemente de que la sesión pase a cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Santa Fe.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Queda aprobada la moción.

25

## RIESGOS DEL TRABAJO

(Orden del Día Nº 1.242)

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados. ...*

### CAPÍTULO I

#### *Objetivos y ámbito de aplicación de la ley*

Artículo 1º — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta LRT y sus normas reglamentarias.

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):

- Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
- Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
- Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;
- Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Art. 2º — Ámbito de aplicación.

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:

- Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;
- Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.

2. El Poder Ejecutivo podrá incluir en el ámbito de la LRT a:

- Los trabajadores domésticos;
- Los trabajadores autónomos;
- Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; y
- Los bomberos voluntarios.

Art. 3º — Seguro obligatorio y autoseguro.

1. Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la reglamentación:

- Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; y
- Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente ley.

3. Quiénes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)" de su libre elección.

4. El Estado nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán igualmente autoasegurarse.

### CAPÍTULO II

#### *De la prevención de los riesgos del trabajo*

Art. 4º — Obligaciones de las partes.

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las ART están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que el empleador deba adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, y fijarán los plazos para su ejecución.

El Poder Ejecutivo regulará las pautas y contenidos del plan de mejoramiento, así como el régimen de sanciones.

3. Mientras el empleado se encuentre ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

4. La ART controlará la ejecución del plan de mejoramiento, y está obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de mejoramiento serán resueltas por la SRT.

### Art. 59 — Recargo por incumplimientos.

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubieren producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil pesos (\$ 30.000).

2. La SRT es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad resultante.

## CAPÍTULO III

### Contingencias y situaciones cubiertas

#### Art. 60 — Contingencias.

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas causadas por las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales del trabajo y que se encuentren incluidas en el listado de enfermedades profesionales que confeccionará y revisará anualmente el Poder Ejecutivo nacional.

Las enfermedades no incluidas en dicho listado así como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas laborales.

3. Están excluidos de esta ley:

- a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo;
- b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

#### Art. 7º — Incapacidad Laboral Temporal.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporal (I.L.T.) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporal (I.L.T.) cesa por:

- a) Alta médica;
- b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.);
- c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; y
- d) Muerte del damnificado.

#### Art. 8º — Incapacidad Laboral Permanente.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) cuando el daño sufrido por el trabajador

le ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.

2. La Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial, cuando fuere inferior a este porcentaje.

3. El grado de Incapacidad Laboral Permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo y, ponderará entre otros factores, la edad del trabajador, el tipo de actividad y las posibilidades de reubicación laboral.

4. El Poder Ejecutivo garantizará, en los supuestos que correspondiese, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y, de la LRT.

#### Art. 9º — Carácter provisorio y definitivo de la I.L.P.

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) que diere derecho al damnificado a percibir una prestación de pago mensual, tendrá carácter provisorio durante los 33 meses siguientes a su declaración.

Este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

En los casos de incapacidad laboral permanente parcial el plazo de provisionalidad podrá ser reducido si existiera certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

Vencidos los plazos anteriores la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo.

2. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.) que diere derecho al damnificado a percibir una suma de pago único tendrá carácter definitivo a la fecha del cese del período de incapacidad temporal.

#### Art. 10. — Gran invalidez.

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.

## CAPÍTULO IV

### Prestaciones dinerarias

Art. 11. — Régimen legal de las prestaciones dinerarias.

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Sin, además, irrenunciabiles y no pueden ser cedidas ni enajenadas.

2. Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporal (I.L.T.) o permanente provisorio se ajustarán en función de la variación del AMPO definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma legislativa.

3. Las prestaciones dinerarias que correspondan en los supuestos de accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, serán abonadas por el sistema de seguridad social en la forma que prevea la reglamentación.

Art. 12. — Ingreso base.

1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante o al tiempo de prestación de servicio si fuera menor a un año, por el número de días corridos comprendidos en el período considerado.

2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior por 30.1.

Art. 13. — Prestaciones por Incapacidad Laboral Temporal.

1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros diez días estará a cargo del empleador. Las prestaciones diarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, abonará las prestaciones en especie.

2. El responsable del pago de la prestación dineraria efectuará los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, y abonará las asignaciones familiares.

3. Durante el período de Incapacidad Laboral Temporal originadas en accidentes de trabajo o en enfermedades profesionales el trabajador no devengará remuneraciones de su empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 1 del presente artículo.

Art. 14. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones:

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20 %, una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad;

b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % e inferior al 60 %, una renta periódica —contratada en los términos de esta ley—, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación

está sujeta a las retenciones por aportes provisionales y del sistema nacional del seguro de salud.

Art. 15. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual de ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes.

Durante este período, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado recibirá las prestaciones previstas en el primer apartado de este artículo que se acumularán a las establecidas en los artículos 48, 98 y concordantes de la ley 21.211. La suma de ambas prestaciones, en ningún caso podrá ser inferior al 100 % del ingreso base mensual.

3. Cuando al Incapacidad Permanente Total no deviniere, en definitiva, la ART se hará cargo del capital de reconposición correspondiente, definido en la ley 21.211 (artículo 91) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional a que estuviese afiliado el damnificado.

Art. 16. — Retorno al trabajo por parte del damnificado.

1. La percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

2. Si el damnificado retomara sus tareas, en igual o en distintos puestos de trabajo, podrá pactar un salario inferior al correspondiente al puesto o categoría desempeñada, aun cuando por normas legales o convencionales se impusiera el deber de no disminuir la remuneración.

El salario resultante de ese acuerdo no podrá ser inferior al que mediante escalas salariales especiales para damnificados que retornen al trabajo puedan fijarse por negociación colectiva.

En ningún caso la suma de la remuneración fijada individual o colectivamente más la renta a percibir, podrá ser inferior a la remuneración que correspondía a un trabajador no incapacitado en igual puesto de trabajo.

3. El Poder Ejecutivo podrá reducir los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con Incapacidad Laboral Permanente.

Art. 17. — Gran Invalidez.

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT).

2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a tres veces el valor del AMPO definido por la ley 21.211 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.

Art. 18. — Muerte del damnificado.

Los derechohabientes accederán a los beneficios establecidos en el artículo 15, inciso 2 de esta ley en la forma y condiciones establecidas en el SIJP.

Art. 19. — Contratación de la renta periódica.

1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y compañía de seguros de retiro de su elección. La percepción de la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente, y concluye en la fecha en que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación.

El derecho a la renta periódica se extingue con la muerte del damnificado.

2. A partir de la celebración del contrato de renta periódica la compañía de seguros de retiro es la única responsable del pago de la prestación dineraria.

3. El Poder Ejecutivo fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro.

#### CAPÍTULO V

##### *Prestaciones en especie*

Art. 20. —

1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie:

- a) Asistencia médica y farmacéutica;
- b) Prótesis y ortopedia;
- c) Rehabilitación;
- d) Recalificación profesional;
- e) Servicio funerario.

2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado a percibir las prestaciones en especie.

#### CAPÍTULO VI

##### *Determinación y revisión de las incapacidades*

Art. 21. — Comisiones médicas.

1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:

- a) La naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad;
- b) El carácter y grado de la incapacidad;
- c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.

2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias de su competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes.

3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas.

Art. 22. — Revisión de la incapacidad.

Hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad y a solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del damnificado, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.

#### CAPÍTULO VII

##### *Régimen financiero*

Art. 23. — Cotización.

1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de las ART, se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador.

2. Para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la ley 24.241 (artículo 99), incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del SIJP.

3. La cuota debe ser declarada y abonada juntamente con los aportes y contribuciones que integran la CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estará a cargo de la ART.

Art. 24. — Régimen de alícuotas.

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación en forma conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo establecerán los indicadores que las ART deberán tener en cuenta para diseñar el régimen de alícuotas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presunta, la siniestralidad efectiva, y la permanencia del empleador en una misma ART.

2. Cada ART deberá fijar su régimen de alícuotas en función del cual será determinable, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual.

3. El régimen de alícuotas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. Dentro del régimen de alícuotas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.

Art. 25. — Tratamiento impositivo.

1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias.

2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.

3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta vitalicia provisional.

4. Invítase a las provincias a adoptar idénticas exenciones que las previstas en el apartado anterior.

5. Las reservas obligatorias de las ART están exentas de impuestos.

#### CAPÍTULO VIII

##### *Gestión de las prestaciones*

Art. 26. — Aseguradoras de Riesgo del Trabajo.

1. Con la salvedad de los supuestos del régimen del autoseguro, la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la SRT, y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgo del Trabajo" (ART), que reúnan los requisitos de solvencia



financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091 y en sus reglamentos.

2. La autorización conferida a una ART será revocada:

- a) Por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos;
- b) Por emisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT;
- c) Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación.

3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que —de conformidad con la reglamentación— ellas mismas determinen.

4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados:

- a) El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidente y enfermedad inculpables; y
- b) La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo con fundamento en leyes anteriores.

Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la LRT.

Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros.

5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de un millón de pesos (\$ 1.000.000) que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos.

6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad.

En este último caso, los bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT.

7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie prevista en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.

Art. 27. — Afiliación.

1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.

2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.

3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido, y plazo de vigencia determinará la SRT.

4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alicuotas vigentes a la fecha de la renovación.

5. La rescisión del contrato de afiliación estará sujeta a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra ART o a su incorporación en el régimen de autoseguro.

Art. 28. — Responsabilidad por omisiones.

1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.

2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del fondo de garantía de la LRT.

4. Si el empleador omitiera —total o parcialmente— el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.

5. Si algunas de las contingencias previstas en el artículo 69 hubiera sido causada al trabajador por un tercero, la ART deberá cumplir con las prestaciones establecidas en esta ley y se subrogará en los derechos y acciones del damnificado en los términos del artículo 771 y concordantes del Código Civil.

Art. 29. — Insuficiencia patrimonial.

Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, o en su caso autoasegurado, para asumir las obligaciones a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo al Fondo de Garantía de la LRT.

Art. 30. — Autoseguro.

1. Quienes hubiesen optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación, el aporte al Fondo de Reserva de la LRT y toda otra obligación incompatible con dicho régimen.

## CAPÍTULO IX

### Derechos, deberes y prohibiciones

Art. 31. — Derechos, deberes y prohibiciones.

1. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo:

- a) Denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento;
- b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la LRT;
- c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas;

d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento;

e) A los efectos de informar a los interesados acerca de la solvencia económico-financiera de la entidad, cada ART deberá contar con dictamen emitido trimestralmente por una sociedad calificadora de riesgo, que será remitido a la SRT para su publicación en el Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) matutinos de mayor circulación en el país, en un plazo no mayor a los diez (10) días de realizada la calificación.

La SRT será responsable de publicar el ranking de calificaciones que surjan de este proceso, y de coordinar la periodicidad de la misma;

f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni destinar recursos a objetos distintos de los previstos por esta ley.

g) No podrán realizar exámenes psicofísicos a los trabajadores, con carácter previo a la celebración de un contrato de afiliación.

## 2. Los empleadores:

a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de cuotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos;

b) Información a los trabajadores acerca de la identidad de la ART a la que se encuentren afiliados;

c) Informarán a la ART de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos;

d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;

e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.

## 3. Los trabajadores:

a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas;

b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional;

c) Informarán al empleador los hechos que conllevan relaciones con los riesgos del trabajo;

d) Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación.

## Art. 32. — Sanciones.

1. El incumplimiento por parte de los empleadores y de las ART de las obligaciones a su cargo, será sancionado con la multa que fije la reglamentación.

2. Si el incumplimiento del empleador consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, será sancionado conforme lo prescrito por la ley 23.771, por el Código Penal, y por la ley 11.683.

3. El incumplimiento de las ART en el pago de las prestaciones a su cargo o en el pago de los aportes a los fondos creados por esta ley, será sancionado conforme lo prescrito por la ley 23.771, del Código Penal, y por la disposición adicional tercera de esta ley.

## CAPÍTULO X

### Fondo de Garantías de la LRT

#### Art. 33. — Creación y recursos.

1. Créase el Fondo de Garantía de la LRT con cuyos recursos se abastecerán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador judicialmente declarada.

2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o la ART en su caso, deberán realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial en los plazos que fije la reglamentación.

3. El Fondo de Garantía de la LRT será administrado por la SRT y contará con los siguientes recursos:

a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de higiene y seguridad;

b) Una contribución a cargo de los empleadores privados auto-segurados, a fijar por el Poder Ejecutivo, no inferior al aporte equivalente al previsto en el artículo 34.2;

c) Las cantidades recuperadas por la SRT de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;

d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de Garantía de la LRT, y las sumas que le transfiera la SRT;

e) Donaciones y legados.

4. Los excedentes del fondo, así como también las donaciones y legados al mismo, tendrán como destino único apoyar las investigaciones, actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que tengan como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores. Estos fondos serán administrados y utilizados en las condiciones que prevenga la reglamentación.

## CAPÍTULO XI

### Fondo de Reserva de la LRT

#### Art. 34. — Creación y recursos.

1. Créase el Fondo de Reserva de la LRT con cuyos recursos se abastecerán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART que éstas dejen de abonar como consecuencia de su liquidación.

2. Este fondo será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se formará con los recursos previstos en esta ley, y con un aporte a cargo de las ART cuyo monto será anualmente fijado por el Poder Ejecutivo.

## CAPÍTULO XII

### Entes de regulación y supervisión de la LRT

#### Art. 35. — Creación.

Créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autónoma en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.

#### Art. 36. — Funciones.

1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en especial, las siguientes:

- a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo pudiendo dictar las disposiciones complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios;
- b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;
- c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;
- d) Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;
- e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar el fondo de garantía, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;
- f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas y, además, deberá elaborar los índices de siniestralidad.

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las funciones que le confieren esta ley, la ley 20.091, y sus reglamentos.

#### Art. 37. — Financiamiento.

1. Los gastos de funcionamiento de los entes de supervisión se atenderán con la tasa prevista en la ley 20.091 (artículo 81), aplicada sobre las cuotas mensuales que el empleador paga a las ART.

2. Facúltase al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes con el fin de proveer a la SRT del equipamiento y presupuesto necesario para el presente ejercicio.

#### Art. 38. — Autoridades y régimen del personal.

1. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo previo proceso de selección, será la máxima autoridad de la SRT.

2. Las remuneraciones del superintendente y de los funcionarios superiores del organismo serán fijadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

3. Las relaciones del personal con la SRT se regirán por la legislación laboral.

## CAPÍTULO XIII

### Responsabilidad civil del empleador

#### Art. 39. — Responsabilidad civil.

1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil, frente a sus trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1.072 del Código Civil.

2. En este caso, el damnificado o sus derechohabientes podrán reclamar la reparación de los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil.

3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de esta ley a cargo de las ART o de los autosegurados, quienes podrán repetir su costo del responsable de los daños y perjuicios.

## CAPÍTULO XIV

### Órgano tripartito de participación

#### Art. 40. — Comité Consultivo Permanente.

1. Créase el Comité Consultivo Permanente de la LRT, integrado por tres representantes del gobierno, tres representantes de la CGT, tres representantes de las organizaciones de empleadores, y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

El Comité aprobará por consenso su reglamento interno, y podrá proponer modificaciones a la normativa sobre riesgos del trabajo y al régimen de higiene y seguridad en el trabajo.

2. Este comité tendrá funciones consultivas en las siguientes materias:

- a) Reglamentación de esta ley;
- b) Listado de enfermedades profesionales;
- c) Tablas de evaluación de incapacidad laborales;
- d) Determinación del alcance de las prestaciones en especie;
- e) Acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
- f) Indicadores determinantes de la solvencia económica financiera de las empresas que pretenden autoasegurarse;
- g) Definición del cronograma de tapas de las prestaciones dinerarias;
- h) Determinación de las pautas y contenidos del plan de mejoramiento.

3. En las materias indicadas, la autoridad de aplicación deberá consultar al comité con carácter previo a la adopción de las medidas correspondientes.

Los dictámenes del comité en relación con los ítems b), c), d) y f) del punto anterior, tendrá carácter vinculante.

El listado de enfermedades profesionales deberá confeccionarse teniendo en cuenta la causa directa de la enfermedad con las tareas cumplidas por el trabajador, por las condiciones medioambientales de trabajo.

## CAPÍTULO XV

*Normas generales y complementarias*

## Art. 41. — Normas aplicables.

1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.091.

2. No es aplicable al régimen de esta ley, el artículo 188 de la ley 21.241.

## Art. 42. — Negociación colectiva.

La negociación colectiva laboral podrá:

- a) Crear Aseguradoras de Riesgo del Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo;
- b) Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.

## Art. 43. — Denuncia.

1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causantes de daños derivados del trabajo.

2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia.

## Art. 44. — Prescripción.

1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.

2. Prescriben a los diez (10) años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de la regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias.

## Art. 45. — Situaciones especiales.

Encomiéndose al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:

- a) Pluriempleo;
- b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial;
- c) Sucesión de siniestros; y
- d) Trabajador jubilado o con jubilación postergada.

## Art. 46. — Competencia judicial.

1. Las resoluciones de la Comisión Médica Central serán recurribles por ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Estos recursos deberán ser interpuestos y fundados en sede administrativa dentro de los 30 días hábiles de notificada la resolución. Dentro de los 30 días contados desde la interposición del recurso la autoridad administrativa deberá elevar las actuaciones.

En la tramitación del recurso será de aplicación lo prescrito en los artículos 49.4 y 49.5 de la ley 21.241.

2. Para la acción del derecho civil derivada del artículo 1.072 del Código Civil en la Capital Federal será competencia la justicia civil.

Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia según el criterio establecido precedentemente.

3. El cobro de cuotas, recargos e intereses adelantados a las ART así como las multas, contribuciones y aportes de las ART, se harán efectivos por la vía del apremio regulado en los códigos procesales civiles y comerciales de cada jurisdicción, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la ART o por la SRT. En la Capital Federal se podrá optar por la justicia nacional con competencia en lo laboral o por los juzgados con competencia en lo civil y comercial.

En las provincias serán los tribunales con competencia en lo civil o comercial.

## Art. 47. — Concurrencia.

1. Las prestaciones serán abonadas, otorgadas o contratadas a favor del damnificado o sus derechohabientes, según el caso, por la ART a la que se hayan efectuado o debido efectuarse las cotizaciones a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Quando la contingencia se hubiera originado en un proceso desarrollado a través del tiempo y en circunstancias tales que se demostrara que hubo cotización o hubiera debido haber cotización a diferentes ART; la ART obligada al pago según el párrafo anterior podrá repetir de las restantes los costos de las prestaciones abonadas u otorgadas a los pagos efectuados, en la proporción en la que cada una de ellas sea responsable conforme al tiempo e intensidad de exposición al riesgo.

Las discrepancias que se originen en torno al origen de la contingencia y las que pudieran plantearse en la aplicación de los párrafos anteriores, deberán ser sometidas a las SRT.

2. Cuando la primera manifestación invalidante se produzca en circunstancia en que no exista ni deba existir cotización a una ART las prestaciones serán otorgadas, abonadas, o contratadas por la última ART a la que se haya efectuado o debido efectuarse las cotizaciones y en su caso serán de aplicación las reglas del apartado anterior.

## Art. 48. — Fondos de garantía y de reserva.

1. Los fondos de garantía y de reserva se financiarán exclusivamente con los recursos previstos por la presente ley. Dichos recursos son inembargables frente a beneficiarios y terceros.

2. Dichos fondos no formarán parte del presupuesto general de la administración nacional.

## Art. 49. — Disposiciones adicionales y finales.

*Disposiciones adicionales*

Primera: modificación de la ley 20.744.

Sustitúyese el artículo 75 de la ley 20.744 por el siguiente texto:

1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obliga-

ciones del apartado anterior, se registrarán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas.

Segunda: modificaciones a la ley 24.211.

1. Sustitúyese el artículo 69 de la ley 24.211 por el siguiente texto:

Las administradoras podrán introducir un esquema de bonificación a las comisiones establecidas en los incisos b) y d) del artículo 68, a condición de no discriminar a los afiliados o beneficiarios comprendidos dentro de una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados o beneficiarios sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes o retiros en la correspondiente administradora, y por hallarse incluido en el ámbito de Ley sobre Riesgos de Trabajo. Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

La bonificación deberá establecerse como un porcentaje sobre la comisión vigente, debiendo ser aplicada en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la cuenta de capitalización individual del afiliado o beneficiario, según corresponda.

2. Sustitúyese el artículo 177 de la ley 24.211 por el siguiente texto:

El seguro del artículo anterior sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión "seguros de retiro".

Tercera: delito por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que no diese cumplimiento a las prestaciones establecidas en esta ley, o que no aportara a los fondos que esta misma ley crea. El delito se configurará cuando el obligado no diese cumplimiento a los deberes aludidos, dentro de los quince días de intimado a ello en su domicilio legal.

Cuarta: modificaciones a la ley 24.028.

Reemplázase el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.028 por el siguiente:

El trabajador que sufra un daño psicofísico por el hecho o en ocasión del trabajo durante el tiempo que estuviese a disposición del empleador, deberá —previo al inicio de cualquier acción judicial— denunciarlo, a fin de iniciar el procedimiento ad-

ministrativo obligatorio de conciliación, ante la autoridad administrativa del trabajo. Los jueces no darán traslado de las demandas que no acrediten el cumplimiento de esta obligación.

Quinta: compañías de seguros.

1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de accidentes de trabajo podrán:

a) Gestionar las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT, siendo sujeto, exclusivamente en lo referente a los riesgos del trabajo, de idénticos derechos, obligaciones y tratamiento impositivo que las ART, a excepción de tener objeto único y la exigencia de capital mínimo. En este último caso, serán de aplicación las normas que rigen la actividad aseguradora general.

Los bienes que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta LRT, deberán ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades, y no podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos.

En caso de liquidación, estos bienes serán transferidos al Fondo de Reserva de la LRT y no podrán ser afectados por créditos o acciones originadas en otras operatorias;

b) Convenir con una ART la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes como consecuencia de esa operatoria, a la fecha que determine la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo en tal caso ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos.

Sexta: contingencias anteriores.

1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT, aun cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescrito el derecho conforme a las normas de esta ley.

2. En este supuesto el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la ART a la que el empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro o que la relación laboral con el damnificado se hubiere extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la ART.

#### Disposiciones finales

Primera: esta LRT entrará en vigencia una vez que el comité tripartito permanente apruebe por consenso el listado de enfermedades laborales y la tabla de evaluación de incapacidades.

Tal aprobación deberá producirse dentro de los 180 días desde la promulgación de esta ley.

Segunda:

1. El régimen de prestaciones dinerarias previsto en esta ley entrará en vigencia en forma progresiva. Para ello se definirá un cronograma integrado por varias et-

pas previendo alcanza el régimen definitivo de esta ley.

2. El paso de una etapa a la siguiente estará condicionado a que la cuota predefinida a cargo de los contribuyentes no exceda por debajo del 3 % de la nómina salarial. En caso que este supuesto no se verifique se suspenderá transitoriamente la aplicación del estatuto hasta tanto existan evidencias de que el tránsito entre una etapa a otra no implique superar dicha meta de costos.

3. Durante la primera etapa el régimen de prestación es dicrutaria permanente será el siguiente:

a) Incapacidad permanente parcial. Para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente fuera igual o superior al 50 % e inferior al 66 % mientras dure la situación de provisoriedad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual del ingreso base, con más las asignaciones familiares correspondientes.

Una vez finalizada la etapa de provisoriedad se abonará una renta periódica cuyo monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el 55 % del valor mensual de ingresos base, con más las asignaciones familiares correspondientes. En ningún caso el valor actual esperado de la renta periódica podrá ser superior a los \$110.000. En el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 % se abonará una indemnización de pago único cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar 55.000 por el porcentaje de incapacidad.

b) Incapacidad total, muerte y gran invalidez. En sustitución de la obligación impuesta en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15, la ART se hará cargo del 25 % del capital complementario definido en el artículo 92 de la ley 24.241 o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional al que estuviese afiliado el damnificado. Además abonará a éste o, en su caso, a sus derechohabientes, una suma de pago único equivalente a la diferencia entre el valor de 43 veces el valor mensual del ingreso base multiplicado por el coeficiente que surge de dividir el número 65 por la edad del damnificado, con el límite máximo de \$55.000 y el 25 % del capital complementario.

Tercera:

1. La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las disposiciones adicionales primera y cuarta entrarán en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

3. A partir de la vigencia de la presente ley, derógase la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 50. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 8 de marzo de 1993.

*Oswaldo Borda. — Francisco de Duranona y Vedia. — Oscar S. Lamberto. — Déjor A. Giménez. — Oswaldo A. Bracchi. — Carlos J. Scelzi. — Carlos F. Dellepiane. — Carlos E. Abihaggle. — César Arias. — Eduardo O. Camaña. — Alberto E. Balestrini. — Miguel A. Balestrini. — Carlos E. Branda. — José L. Castillo. — Rodolfo M. Cazia. — José L. Gioja. — Tomás W. González Cabezas. — Germán L. Kammerath. — Ana R. Kessler. — Marcelo E. López Arias. — Juan C. Maqueda. — Marcelo J. Muniagurria. — Lorenzo A. Pepe. — María A. Salino. — Carlos A. Suciro.*

## INFORME

*Honorable Cámara:*

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley para la regulación de la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo y por las razones enunciadas en el mensaje del Poder Ejecutivo y las que se exponían oportunamente en el recinto al momento de su tratamiento, aconsejan su sanción con las modificaciones introducidas al mismo.

*Oswaldo Borda.*

## Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1994.

*Al Honorable Congreso de la Nación.*

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley para la regulación de la prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo (LRT).

En la convicción de que la normativa actualmente en vigencia, y cuya estructura básica se apoya en la ley 24.028, resulta insatisfactoria tanto para los trabajadores como para los empleadores, los actores sociales, junto con el gobierno, a través del punto 9 del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, suscrito el 25 de julio de 1994, coincidieron en la necesidad de reforma del sistema.

En apretada síntesis, ya que son numerosas y variadas las críticas que pueden hacerse al sistema actual,

es posible afirmar que, por una verdadera concurrencia de causas, el fin protectorio que originó y dio justificación a su creación ha quedado desvirtuado, al extremo de que actualmente es el operari negativo-mente tres aspectos centrales:

— Su incapacidad para ofrecer incentivos en favor del mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y, consecuentemente, reducir la frecuencia y gravedad de los siniestros;

— Su fracaso para proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias del siniestro; y

— Su negativo impacto sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y, específicamente, en la capacidad de la estructura productiva para generar nuevos empleos.

El proyecto que se somete a esta consideración, así, cual verdadero producto de una negociación tripartita, con las obvias concesiones recíprocas que ella implica, es una síntesis equilibrada de las necesidades y posibilidades de todos los sectores involucrados a partir de una coincidencia plena en cuatro objetivos generales:

- a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
- b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
- c) Incentivar la recalcificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; y
- d) Promover la negociación colectiva para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

La satisfacción de estos objetivos y la puesta en práctica de la totalidad de los instrumentos para alcanzarlos, sin embargo, no se plantea como una meta inmediata sino, por el contrario, el proyecto contempla mecanismos de aplicación gradual y progresiva, para evitar su desnaturalización y el impacto negativo sobre el mercado de trabajo.

La LRT propone, así, una respuesta integral y variable frente a los elevados niveles de descomposición alcanzados por el viejo sistema.

## II

Desde el punto de vista de los objetivos e instrumentos, la LRT se inserta funcionalmente en el proceso de modernización que transita el país, lo que supone reorganizar y revalorizar el rol protectorio y utilizar un diseño plenamente compatible con el nuevo esquema de organización económica y social.

En ese marco aparece como objetivo primario de la LRT la prevención. Esto significa priorizar en el diseño del esquema protectorio la creación de estímulos que promuevan el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo y, como consecuencia, menores niveles de siniestralidad. Fomentar inversiones y actitudes en favor de reducir la frecuencia y gravedad de los siniestros laborales constituye la alternativa más eficaz desde el punto de vista social y más eficiente desde el punto de vista económico.

En un segundo orden de prioridades se ubica el resto de los objetivos. Entre ellos se incluye mejorar en cantidad y calidad las prestaciones, promover la reinscripción laboral de los trabajadores incapacitados, establecer condiciones para que el financiamiento importe a costos previsibles y razonables, evitar la segmentación del mercado de trabajo y llevar a la justicia y a los que a ella acuden, de trámites y procedimientos a los que actualmente son sometidos.

## III

La LRT sostiene como criterio general la universalidad de su cobertura, aunque respetando los límites que imponen cuestiones técnicas e institucionales. La tendencia a la universalidad responde tanto a razones de equidad (evitando bolsones de desprotección) como de eficiencia (alcanzar adecuados niveles en la escala y dispersión del riesgo). Con el objetivo de facilitar la transición y el diseño de los instrumentos operativos, la extensión hacia sectores actualmente desprotegidos (autónomos, domésticos, relaciones no laborales, etcétera), se delega al Poder Ejecutivo.

Siguiendo la tradicional distinción entre accidentes del trabajo y enfermedades laborales, la LRT precisa los dos conceptos. En ambos casos se aplican los criterios sugeridos por las normas internacionales y seguidos por la mayoría de los países; esto implica adoptar una definición genérica de los accidentes, y considerar a las enfermedades en un listado taxativo. En la LRT este listado es aprobado y actualizado periódicamente por el Poder Ejecutivo, previa consulta al comité consultivo permanente integrado por el gobierno, empresarios y trabajadores.

Se incorpora de este modo, a los efectos reparatorios, una definición objetiva de los presupuestos de hecho. La extensión guarda coherencia con la extinción de responsabilidad civil del empleador y responde al propósito protectorio integral que sustenta el nuevo sistema. Por otra parte, la utilización de una definición precisa pretende acotar las zonas grises donde brotan divergencias a través de interpretaciones subjetivas. Esto se relaciona con el objetivo de reservar el mecanismo judicial a casos excepcionales, coherente con la idea de asegurar la uniformidad de las prestaciones y reducir costos de gestión.

## IV

Las contingencias reparadas son las tradicionales: incapacidad laboral (temporaria o permanente, total o parcial) y muerte; al igual que las prestaciones para atenderlas: que serán en especie y en dinero.

Para estas pólizas, siguiendo la tendencia prevalente en el derecho comparado, y recuperando el criterio adoptado inicialmente por la ley 9.688, se da preferencia a las prestaciones diarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual. Por el contrario, las sumas globales o indemnizaciones tarifadas o a tanto alzado se reservan para los supuestos de incapacidades permanentes de menor grado. Respecto del esquema actualmente vigente, este cambio implica un movimiento importante en favor de aproximar las pres-

taciones a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados.

En igual sentido opera la aplicación del criterio de la automaticidad en el acceso a las prestaciones, lo que supone un avance muy significativo respecto a la situación actual en la que, generalmente, se impone como consecuencia del procedimiento judicial, un prolongado diferimiento.

En esta materia, por último, otra innovación muy relevante es la eliminación de la superposición de prestaciones, conforme fue también expresamente convenido en el acuerdo marco, que se hace evidente en el caso de las enfermedades y accidentes no laborales y, especialmente, en la relación de la LRT con el sistema provisional. La LRT asume así los costos de la reparación de los siniestros laborales, rompiendo la perversidad del esquema vigente que le supone al trabajador el financiamiento de una parte —generalmente la principal— de las prestaciones.

En cuanto a las prestaciones en especie, el objetivo es mejorar en cantidad y calidad la cobertura respecto a la situación vigente y, para ello se agrega a las tradicionales (médico-farmacéuticas) la rehabilitación y la recalificación del damnificado.

Estas prestaciones resultan complementadas con la alternativa de reducir los costos laborales de los empleadores que contraten a trabajadores con disminuciones de capacidad. En este último caso, la merma del costo puede provenir de un menor salario (compensado con la renta que financia el sistema, de modo de no disminuir los ingresos totales que percibe el trabajador) y/o la reducción de aportes y contribuciones a la seguridad social.

## V

Con relación al procedimiento para la determinación y revisión del tipo y grado de incapacidad, la experiencia argentina demuestra que se trata de un tema de vital importancia como factor determinante del funcionamiento del sistema. Por un lado, tiene influencia decisiva sobre los costos, tanto por los gastos administrativos y judiciales que demanda como por los desbordes que pueden generar evaluaciones que se apartan de criterios técnicos. Por otro lado, el mal diseño del procedimiento afecta negativamente la equidad, ya que puede conducir a tratamientos desiguales frente a personas en idéntica situación. Por último, criterios rígidos en la evaluación pueden desincentivar la inversión en rehabilitación.

La LRT regula un procedimiento novedoso que tiende a superar los problemas apuntados. Esto implica: reducir los costos administrativos a niveles razonables, disponer de dictámenes de aceptable nivel técnico elaborados en función de criterios homogéneos y flexibilizar los mecanismos con el objetivo de estimular la recuperación del trabajador. En función de estos objetivos y tomando como referencia los procedimientos previstos en el SIJP se contemplan tres instrumentos básicos: la tabla de evaluación de incapacidades, el procedimiento administrativo y la distinción de tres el pas en el proceso de incapacitación.

Para la tabla de evaluación de incapacidades, como ocurre en la mayoría de los países, se prevé la regulación de un baremo. Este tipo de instrumento persigue como objetivos apoyar los fundamentos de los dictámenes médicos y tender a la homogeneidad en la cuantificación del daño. A través de su compatibilización con el baremo previsto en el SIJP, la meta final es disponer, en el ámbito de la seguridad social, de un único conjunto de normas técnicas que racionalicen la evaluación de las incapacidades.

En orden al procedimiento, la LRT impone como vía obligatoria dictámenes de carácter administrativo, a través del sistema de comisiones médicas previsto en el SIJP, reservando la alternativa judicial sólo para casos de excepción. Con este mecanismo se procura: reducir costos (utilizando una infraestructura ya creada para este fin específico), mejorar la calidad técnica de los dictámenes, estandarizar criterios (para todo el ámbito de la seguridad social), agilizar la gestión (cuestión clave a los efectos de automaticidad) y liberar a la justicia de una tarea burocrática que obstaculiza su función y desjerarquiza su rol.

Finalmente, y con un tratamiento análogo al del SIJP, en la incapacitación del trabajador se distinguen tres etapas: la incapacidad temporaria, incapacidad permanente provisoria e incapacidad permanente definitiva. Con este esquema se introduce un período de espera antes del dictamen definitivo, lo que incentiva la inversión en rehabilitación y recalificación del trabajador, ya que permite ajustar la evaluación de la incapacidad en función de la maduración de los tratamientos que recibe el trabajador.

## VI

La LRT incorporará instrumentos que garanticen la respuesta ágil frente a las necesidades de un trabajador siniestrado, sin generar a sus empleadores situaciones traumáticas desde el punto de vista financiero. Por ello se contempla la posibilidad de autoseguro en el ámbito del Estado y de los empleadores privados que acrediten solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de la ley y la previa contratación de los servicios que garanticen las prestaciones por asistencia médica. Para aquellos empleadores que no están en condiciones de administrar sus riesgos se prevé considerar conveniente o no un esquema de seguro obligatorio.

Fuera de estos supuestos, la omisión de afiliación, además de ser sancionada, genera responsabilidad directa del empleador frente al trabajador o sus derechohabientes.

Respetando también lo pactado en el Acuerdo Marco la LRT se organiza en función de una gestión descentralizada. Para ello se regula la creación de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que son entidades de derecho privado —con o sin fines de lucro—, cuya finalidad exclusiva es proveer las prestaciones previstas en la LRT a cambio de percibir de sus afiliados una cuota. Las ART operan bajo los estímulos y las limitaciones que imponen la competencia y las normas que regulan el sistema.



Para aumentar la eficacia de los mecanismos regulatorios, se constituyó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que, con la colaboración de la Superintendencia de Seguros de la Nación en el control de los aspectos de solvencia financiera, fiscaliza el funcionamiento general del sistema. Las funciones de la SRT son muy amplias y coherentes con el objetivo de garantizar protección tomando como eje la prevención. Por ello, además de la supervisión de las ART, ella asume integralmente las responsabilidades en materia de generación de normas y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo. La creación de la SRT no implica la generación de nuevas estructuras en el ámbito del sector público, ya que reemplaza a la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Por otra parte, su financiamiento, al provenir de la tasa prevista en la Ley de Entidades de Seguro, tampoco genera mayores erogaciones, sino sólo la reasignación de los recursos que actualmente aportan las aseguradoras.

El financiamiento de las prestaciones a cargo de las ART proviene de una contribución patronal. La alícuota no es homogénea entre los empleadores sino que se fija en función de los riesgos generados. Tal como lo demuestra la experiencia comparada, la diferenciación de alícuotas introduce señales económicas muy poderosas en favor de mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, este esquema de financiamiento representa un componente central en la estrategia que motoriza la LRT para reducir la frecuencia y gravedad de los siniestros.

Para que los precios del seguro reflejen adecuadamente los costos de la siniestralidad (evitando la generación de beneficios extraordinarios), además de incentivar la competencia entre las ART, la ley contempla una serie de mecanismos que promueven transparencia en el mercado. En esa línea, se ubica la imposición de que las ART sean instituciones con una finalidad única que ofrezcan un producto estandarizado y un régimen de alícuotas que obliga a las ART a predeterminar los precios, reduciendo sus posibilidades de discriminar por causas exógenas a los riesgos del trabajo.

#### VII

Como instrumentos de tutela de los créditos de los damnificados, se crean un fondo de garantía y un fondo de reserva, con supervisión y control de la SRT, cuya finalidad es financiar las prestaciones en los supuestos de insuficiencia patrimonial de los empleadores clandestinos o de las ART, respectivamente. En el primer caso se prevén diversas fuentes de financiamiento mientras que el fondo de reserva se constituye con recursos aportados por las propias ART.

Este tipo de instrumentos, que reconoce pautas diferentes tanto en la legislación nacional como en el derecho comparado, permite apartar a los trabajadores damnificados del riesgo de insolvencia de las ART o de los empleadores. Si bien la LRT apunta a generar incentivos y resguardos que reducen los riesgos de insolvencia, es necesario contemplar un mecanismo que cubra estas situaciones excepcionales.

De esta manera, se garantiza, cualesquiera sean las circunstancias, la efectiva cobertura de los trabajadores que sufren las consecuencias de un siniestro laboral.

#### VIII

Según ya se ha anticipado, la LRT incorpora la prevención como el eje central en el tratamiento de los riesgos del trabajo. De allí que su principal objetivo sea el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Si bien todo el diseño de la LRT está orientado en este sentido, se puede identificar en la estrategia principal una doble vía: la erradicación de incentivos económicos y el perfeccionamiento del sistema de control.

En el primer caso, el punto básico es converger a una estructura de cotizaciones que refleje los reales costos de la siniestralidad. Con relación a los controles, la LRT apunta a rediseñar la normativa que regula las condiciones y el medio ambiente de trabajo, con un criterio que combine de la mejor manera posible el objetivo protectorio con las limitaciones que tienen las realidades geográficas y sectoriales que exteriorizan la estructura productiva del país. Además, en función de una normativa adaptada al contexto, adquiere cuenta no sólo con la infraestructura de la SRT (que eficacia fortalecer la fiscalización. Para ello, la LRT por su institucionalidad presenta una mayor flexibilidad que la administración pública central) sino con la activa participación de las ART. La incorporación de éstas en el rol fiscalizador representa un paso novedoso que potencia los controles sobre las empresas.

En función de las malas condiciones y medio ambiente de trabajo que se observa en una gran cantidad de empresas, la LRT incorpora también una estrategia gradual de mejoramiento. A partir de pautas fijadas en un plan de mejoramiento, con fiscalización de las ART y de la SRT, la idea es facilitar con plazos prudenciales y apoyo financiero la reconversión de las instalaciones de las empresas.

#### IX

Según surge de los lineamientos generales expuestos, la LRT se inserta como un subsistema de la seguridad social que se integra armónica y complementariamente con otros institutos —fundamentalmente la legislación de higiene y seguridad en el trabajo y el sistema de jubilaciones y pensiones— con el objeto de proveer al trabajador una protección integral frente a los riesgos del trabajo.

La LRT constituye así un sistema de prevención y reparación específico de los riesgos originados en el trabajo. Consecuente con este rasgo, en el diseño de sus instrumentos tutelares se toman como punto referencial básico las necesidades que enfrenta el damnificado. Dada la especificidad de éstas, se desechan criterios generales propios de la normativa civil y se introduce un conjunto de prestaciones cuidadosamente adaptadas a la problemática laboral.

El tratamiento del siniestro laboral en forma exclusiva a través de la LRT y la consecuente exclusión de su tutela en el ámbito civil se fundamentan en argumentos. Primero, la LRT supone la introducción en el

sistema jurídico argentino de una novedad en el campo de la tutela de la integridad psíquica de los trabajadores, que integra la prevención con la reparación y la rehabilitación y ésta, a su vez, con la reafirmación y la inserción laboral. En otras palabras, incorpora un diseño prestacional a las necesidades específicas del trabajador. Esto impide una comparación literal con las nociones tradicionales —e incompatibles con los objetivos de la LRT— de la mera reparación económica de los daños psicológicos. En segundo lugar, contemplar la posibilidad de opción para acceder a una reparación a través del derecho común introduciría un componente de alta incertidumbre que, no sólo no mejoraría la protección del trabajador, sino, además, perturbaría la gestión del sistema afectando su viabilidad operativa.

De todas formas, las notas diferenciadoras de la LRT no permiten sustentar un aval —ni menos aún un castigo— a conductas dolosas del empleador. En esta inteligencia, se admite que, cuando el evento dañoso es causado por dolo del empleador, el damnificado pueda reclamar una reparación al amparo de las normas civiles de las que, lógicamente, se reducirán las prestaciones que él haya recibido de acuerdo con la LRT, y a las que, para efectuar aquel reclamo, no deberá —ni podrá— renunciar.

## X

Otro de los instrumentos complementarios del sistema, y síntesis de su origen consensuado, es el comité consultivo permanente, integrado por representantes del gobierno y de los actores sociales, con funciones consultivas en las materias medulares de la LRT, en algunos de los cuales, con dictámenes de carácter vinculante.

La creación de este comité refleja, en lo profundo, el sentido último de esta ley: otorgar a los trabajadores una protección integral frente a los riesgos del trabajo, adecuada a las posibilidades concretas de las empresas argentinas y compatible con el programa de reformas estructurales y de modernización en curso de ejecución.

El proyecto de ley que se eleva a consideración del Honorable Congreso pretende responder así, con equidad, equilibrio y sentido de la realidad, a las necesidades que plantea la protección frente a los riesgos del trabajo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.  
Mensaje 1.952.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — José A. Caro Figueroa.

# ANTECEDENTE

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,

### CAPÍTULO I

#### Objetivos y ámbito de aplicación de la ley

Artículo 1º — Normativa aplicable y objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT).

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por esta Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) y sus normas reglamentarias.

2. Son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT):

- a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;
- b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
- c) Promover la reafirmación y la recolocación de los trabajadores damnificados;
- d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Art. 2º — Ámbito de aplicación.

1. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:

- a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado.

2. El Poder Ejecutivo podrá incluir en el ámbito de la LRT a:

- a) Los trabajadores domésticos;
- b) Los trabajadores autónomos;
- c) Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales; y
- d) Los funcionarios y empleados del sector público provincial, previa adhesión de la provincia respectiva.

Art. 3º — Seguro obligatorio y autoseguro.

1. Esta Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Los empleadores podrán autosegurar los riesgos del trabajo definido en esta ley, siempre y cuando acrediten:

- a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de esta ley; y
- b) Tener garantizados los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de asistencia médica.

3. Quiénes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una "Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART)" de su libre elección.

4. El Estado nacional y, en su caso, los estados provinciales, podrán igualmente autosegurar.

### CAPÍTULO II

#### De la prevención de los riesgos del trabajo

Art. 4º — Obligaciones de las partes.

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las Aseguradoras de

Riesgos del Trabajo están obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones, dichas partes deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse de forma unilateral, formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la ART y el empleador.

2. Los contratos entre la ART y los empleadores incorporarán un plan de mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene, que indicará las medidas y modificaciones que el empleador deba adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente y fijarán los plazos para su ejecución.

El Poder Ejecutivo regulará las pautas y contenidos mínimos del plan de mejoramiento, así como el régimen de sanciones.

3. Mientras el empleador se encuentre ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

4. La ART controlará la ejecución del plan de mejoramiento, y está obligada a denunciar los incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

5. Las discrepancias acerca de la ejecución del plan de mejoramiento serán resueltas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Art. 5º — Recurso por incumplimientos.

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubieren producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, éste deberá pagar al fondo de garantía, instituido por el artículo 33 de la presente ley, una cantidad equivalente al 50 % de lo que resulte de aplicar el mecanismo previsto en el artículo 14.2, inciso a).

En ambos casos el fondo retendrá la mitad de la cantidad resultante para atender a sus funciones, y entregará el saldo al damnificado o a sus derechohabientes.

2. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es el órgano encargado de constatar los incumplimientos y gestionar el pago de la cantidad resultante.

### CAPÍTULO III

#### Contingencias y situaciones cubiertas

Art. 6º — Contingencias.

1. Se considera accidente de trabajo a todo hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo.

2. Se consideran enfermedades laborales aquellas que, originadas por las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales de trabajo, figuren incluidas en el listado de enfermedades laborales

que confeccionará y revisará anualmente el Poder Ejecutivo.

Las enfermedades no incluidas en dicho listado así como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas laborales.

3. Están excluidos de esta ley los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales causados por culpa grave o dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo.

Art. 7º — Incapacidad Laboral Temporaria.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.

2. La situación de Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) cesa por:

- a) Alta médica;
- b) Declaración de Incapacidad Laboral Permanente (ILP);
- c) Transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante; y
- d) Muerte del damnificado.

Art. 8º — Incapacidad Laboral Permanente.

1. Existe situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) cuando el daño sufrido por el trabajador lo ocasione una disminución permanente de su capacidad laborativa.

2. La Incapacidad Laboral Permanente (ILP) será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %, y parcial cuando fuere inferior a este porcentaje.

3. El grado de Incapacidad Laboral Permanente será determinado por las comisiones médicas de esta ley, en base a la tabla de evaluación de las incapacidades laborales, que elaborará el Poder Ejecutivo, y ponderará la edad del trabajador, el tiempo de exposición al riesgo y el tipo de actividad.

4. El Poder Ejecutivo garantizará, en los supuestos que correspondiere, la aplicación de criterios homogéneos en la evaluación de las incapacidades dentro del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Art. 9º — Carácter provisorio y definitivo de la ILP.

1. La situación de Incapacidad Laboral Permanente (ILP) tendrá carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración.

Este plazo podrá ser extendido por la ART, por un máximo de 24 meses más, cuando no exista certeza acerca del carácter definitivo del porcentaje de disminución de la capacidad laborativa.

Por el contrario, cuando tal certeza exista ambos plazos podrán ser reducidos.

2. Vencidos los plazos anteriores, la Incapacidad Laboral Permanente tendrá carácter definitivo.

Art. 10. — Gran invalidez.

Existe situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de Incapacidad Laboral Permanente total necesite la asistencia continua de otra persona para realizar los actos de su vida.

## Cápitulo IV

## Prestaciones dinerarias

Art. 11. — Régimen legal de las prestaciones dinerarias.

1. Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciabiles y no pueden ser cedidas ni enajenadas.

2. Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral Temporal (ILT) o permanente provisoria se ajustarán en función de la votación del AMPO definido en la ley 24.241, de acuerdo a la norma reglamentaria.

3. Las prestaciones dinerarias que correspondan en los supuestos de accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, serán abonadas por el sistema de seguridad social en la forma que prevea la reglamentación.

Art. 12. — Ingreso base.

1. A los efectos de determinar la cuantía de las prestaciones dinerarias se considera ingreso base la cantidad que resulte de dividir la suma total de las remuneraciones sujetas a cotización y correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante, por el número de días comprendidos en el período considerado.

2. El valor mensual del ingreso base resulta de multiplicar la cantidad obtenida según el apartado anterior, por 30,4.

Art. 13. — Prestaciones por Incapacidad Laboral Temporal.

1. A partir de la primera manifestación invalidante y mientras dure el período de Incapacidad Laboral Temporal (ILT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.

La prestación dineraria correspondiente a los primeros treinta días estará a cargo del empleador. Las prestaciones dinerarias siguientes estarán a cargo de la ART la que, en todo caso, asumirá las prestaciones en especie.

2. El responsable del pago de la prestación dineraria efectuará los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de seguridad social, y abonará las asignaciones familiares.

Art. 14. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones:

a) Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 20 % una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente

que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante.

Esta suma en ningún caso será superior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad;

b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20 % o inferior al 60 %, una renta periódica —contratada en los términos de esta ley—, cuya cuantía será igual al 70 % del valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad.

3. Todas las prestaciones dinerarias están sujetas a las retenciones por aportes previsionales y del seguro de salud.

Art. 15. — Prestaciones por Incapacidad Permanente Total (IPT).

1. Mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado percibirá una prestación de pago mensual equivalente al 70 % del valor mensual del ingreso base. Percibirá, además, las asignaciones familiares correspondientes.

Durante este período, el damnificado no tendrá derecho a las prestaciones del sistema previsional.

2. Declarado el carácter definitivo de la Incapacidad Laboral Permanente Total (IPT), el damnificado recibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez, establezca el régimen previsional al que estuviere afiliado.

La ART se hará cargo del capital complementario correspondiente, definido en la ley 24.241 (artículo 92) o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional al que estuviere afiliado el damnificado.

El régimen previsional que perciba las cantidades antes señaladas se hará cargo de las prestaciones correspondientes.

3. Cuando la incapacidad permanente total no deviene en definitiva, la ART deberá:

a) Integrar el capital de recomposición (ley 24.241, artículo 94) si el damnificado estuviere afiliado al régimen de capitalización del SIJP;

b) Si el damnificado no estuviere afiliado al régimen de capitalización, reintegrar al régimen previsional respectivo los aportes personales que hubieren debido realizarse durante el período de incapacidad permanente total provisoria.

Art. 16. — Retorno al trabajo por parte del damnificado.

1. La percepción de prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente es compatible con el desempeño de actividades remuneradas.

2. Si el trabajador en situación de incapacidad permanente parcial retornara al trabajo a las órdenes del mismo empleador y en el mismo puesto de trabajo, éste podrá reducirle la remuneración correspondiente,

en proporción a su incapacidad y en función de su rendimiento. Si el retorno se produjera en puesto de trabajo diferente, los salarios se fijarán según lo establecido en el apartado siguiente.

3. Cuando el damnificado retorne al trabajo a las órdenes de un empleador diferente, podrá pactar un salario inferior al de su categoría o puesto de trabajo, en proporción a su incapacidad y en función de su rendimiento.

4. El empleador no podrá discriminar a sus trabajadores incapacitados en razón de su incapacidad.

El monto total a percibir por el trabajador en ningún caso podrá ser inferior a la remuneración que corresponda al puesto, función, o categoría desempeñados, ni a la que se abone a otros trabajadores del mismo establecimiento por un trabajo de igual valor.

5. La negociación colectiva fijará escalas salariales especiales para los trabajadores incapacitados que retornen al trabajo.

6. El Poder Ejecutivo podrá reducir los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, correspondientes a supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con Incapacidad laboral Permanente.

Art. 17. — Gran invalidez.

1. El damnificado declarado gran inválido percibirá las prestaciones correspondientes a los distintos supuestos de Incapacidad laboral Permanente Total (IPT).

2. Adicionalmente, la ART abonará al damnificado una prestación de pago mensual equivalente a 3 veces el valor del AMPO definido por la ley 24.241 (artículo 21), que se extinguirá a la muerte del damnificado.

Art. 18. — Muerte del damnificado.

1. Los derechohabientes accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado.

La ART se hará cargo del capital complementario definido en la ley 24.241 (artículo 92), o pagará una cantidad equivalente al régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado.

Art. 19. — Contratación de la renta periódica.

1. A los efectos de esta ley se considera renta periódica la prestación dineraria, de pago mensual, contratada entre el beneficiario y la compañía de seguros de retiro de su elección.

La percepción de la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente, y concluye en la fecha en que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación.

El derecho a la renta periódica se extingue con la muerte del damnificado.

2. A partir de la celebración del contrato de renta periódica la compañía de seguros de retiro es la única responsable del pago de la prestación dineraria.

3. El Poder Ejecutivo fijará la forma y la cuantía de la garantía del pago de la renta periódica en caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las compañías de seguros de retiro.

## CAPÍTULO V

### Prestaciones en especie

Art. 20. —

1. Las ART otorgarán a los trabajadores que sufran algunas de las contingencias previstas en esta ley las siguientes prestaciones en especie:

- a) Asistencia médica y farmacéutica;
- b) Prótesis y ortopedia;
- c) Rehabilitación;
- d) Recalificación profesional;
- e) Servicio funerario.

2. Las ART podrán suspender las prestaciones dinerarias en caso de negativa injustificada del damnificado a percibir las prestaciones en especie.

## CAPÍTULO VI

### Determinación y revisión de las incapacidades

Art. 21. — Comisiones médicas.

1. Las comisiones médicas y la Comisión Médica Central creadas por la ley 24.241 (artículo 51), serán las encargadas de determinar:

- a) La naturaleza laboral del accidente o enfermedad;
- b) El carácter y grado de la incapacidad;
- c) El contenido y alcances de las prestaciones en especie.

2. Estas comisiones podrán, asimismo, revisar el tipo, carácter y grado de la incapacidad, y —en las materias de su competencia— resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes.

3. La reglamentación establecerá los procedimientos a observar por y ante las comisiones médicas, así como el régimen arancelario de las mismas.

4. Las resoluciones de la Comisión Médica Central son recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, en los términos previstos en la ley 24.241 (artículo 49.4 y 5).

5. En caso de controversia sobre la naturaleza laboral del accidente o la presencia de causales eximentes de responsabilidad, se abrirá una instancia administrativa obligatoria de conciliación con arreglo a las reglas que a continuación se indican.

El trámite se iniciará mediante denuncia escrita formulada por el trabajador o sus derechohabientes, en caso de fallecimiento de aquél, ante la ANSES dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, correspondiente al domicilio del empleador autoasegurado, de la ART o del lugar de prestación normal y habitual de los servicios del trabajador.

La denuncia deberá contener una descripción suficientemente clara de los hechos controvertidos, acompañando las pruebas correspondientes.

Del escrito de denuncia se dará traslado por diez días a fin de alegar lo que se estime pertinente sobre

los hechos controvertidos denunciados y en su caso, ofrecer prueba, la que deberá diligenciarse en el término de veinte días. Vencido éste, se convocará a las partes a una audiencia a realizarse en un término no mayor de diez días para intentar la conciliación. En la audiencia fijada, la autoridad administrativa teniendo a la vista todos los antecedentes acumulados en la causa, invitará a las partes a arribar a una solución conciliatoria.

Si alguna de las partes no concuerda a la audiencia de conciliación o fracasaran las gestiones conciliatorias, la autoridad administrativa resolverá de oficio.

Este acto administrativo podrá ser apelado por cualquiera de las partes mediante **recurso directo** ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social dentro del plazo de diez días a contar desde la fecha de su modificación fehaciente.

El recurso directo se tramitará bajo el siguiente procedimiento. El recurso deberá ser interpuesto en sede administrativa, en forma escrita, y fundada en términos claros y precisos. Contener todas las pruebas que estime valerse el recurrente, con excepción de la prueba pericial, y sus peticiones concretas.

Interpuesto el recurso, la autoridad administrativa lo remitirá al tribunal juntamente con las actuaciones obrantes en el plazo de diez días.

Del recurso interpuesto se correrá traslado a la contraparte por diez días, la que deberá contestar y ofrecer la prueba que estime pertinente a sus derechos en el mismo esrito. Vencido el término previsto para contestar el traslado, el proceso será abierto a prueba por el término de veinte días. El tribunal podrá ampliar el término de prueba cuando las circunstancias de la causa, a su juicio, lo justifiquen.

Concluida la etapa probatoria se podrán los autos a disposición de las partes para que formulen sus respectivos alegatos, por el término de cinco días comunes. Transcurrido este plazo los autos pasarán a despacho a los fines de dictar sentencia, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de sesenta días contados desde la fecha en que quede firme el proveído que así lo dispone.

La sentencia que dirima el recurso será inapelable.

Las notificaciones se efectuarán en forma personal o por cédula.

Art. 22. — **Revisión de la incapacidad.**

1. A solicitud del obligado al pago de las prestaciones o del beneficiario, las comisiones médicas efectuarán nuevos exámenes para revisar el carácter y grado de incapacidad anteriormente reconocidos.

2. La modificación del carácter o grado de la incapacidad implicará la adecuación de las prestaciones a partir del mes siguiente a aquel en el que se dicta la modificación.

#### CAPÍTULO VIII

##### Régimen financiero

Art. 23. — **Cotización.**

1. Las prestaciones previstas en esta ley a cargo de las ART, se financian con una cuota mensual a cargo del empleador.

2. Para la determinación de la base se aplicarán las reglas de la ley 24.241 (artículo 9º), incluyéndose todas las prestaciones que tengan carácter remuneratorio a los fines del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

3. La cuota debe ser declarada y abonada juntamente con los aportes y contribuciones que integran el CUSS. Su fiscalización, verificación y ejecución estarán a cargo de la ART.

Art. 24. — **Régimen de alcuentas.**

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación establecerá los indicadores que las ART habrán de tener en cuenta para diseñar su régimen de alcuentas. Estos indicadores reflejarán la siniestralidad presente, la siniestralidad efectiva, y la permanencia del empleador en una misma ART.

2. Cada ART deberá fijar su régimen de alcuentas en función del cual será determinable, para cualquier establecimiento, el valor de la cuota mensual.

3. El régimen de alcuentas deberá ser aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

4. Dentro del régimen de alcuentas, la cuota del artículo anterior será fijada por establecimiento.

Art. 25. — **Tratamiento impositivo.**

1. Las cuotas del artículo 23 constituyen gasto deducible a los efectos del impuesto a las ganancias.

2. Los contratos de afiliación a una ART están exentos de todo impuesto o tributo nacional.

3. El contrato de renta periódica goza de las mismas exenciones impositivas que el contrato de renta vitalicia provisional.

4. Las reservas obligatorias de las ART están exentas de impuestos.

#### CAPÍTULO VIII

##### Gestión de las prestaciones

Art. 26. — **Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.**

1. La gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la LRT estará a cargo de entidades de derecho privado, previamente autorizadas por la Superintendencia del Sistema y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, denominadas "Aseguradoras de Riesgos del Trabajo" (ART), que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, y demás recaudos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus reglamentos.

2. La autorización conferida a una ART será revocable:

- a) Por las causas y procedimientos previstos en esta ley, en la ley 20.091, y en sus respectivos reglamentos;
- b) Por emisión de otorgamiento íntegro y oportuno de las prestaciones de esta LRT;
- c) Cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establece la reglamentación.

3. Las ART tendrán como único objeto el otorgamiento de las prestaciones que establece esta ley, en el ámbito que —de conformidad con la reglamentación— ellas mismas determinen.

4. Las ART podrán, además, contratar con sus afiliados:

- a) El otorgamiento de las prestaciones dinerarias previstas en la legislación laboral para los casos de accidentes y enfermedad incapacitantes; y,
- b) La cobertura de las exigencias financieras derivadas de los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo con fundamento en leyes anteriores.

Para estas dos operatorias la ART fijará libremente la prima, y llevará una gestión económica y financiera separada de la que corresponda al funcionamiento de la Ley de Riesgos del Trabajo. Ambas operatorias estarán sometidas a la normativa general en materia de seguros.

5. El capital mínimo necesario para la constitución de una ART será de \$ 1.000.000 que deberá integrarse al momento de la constitución. El Poder Ejecutivo podrá modificar el capital mínimo exigido, y establecer un mecanismo de movilidad del capital en función de los riesgos asumidos.

6. Los bienes destinados a respaldar las reservas de la ART no podrán ser afectados a obligaciones distintas a las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad.

En este último caso, los bienes serán transferidos al fondo de reserva de la LRT.

7. Las ART deberán disponer, con carácter de servicio propio o contratado, de la infraestructura necesaria para proveer adecuadamente las prestaciones en especie previstas en esta ley. La contratación de estas prestaciones podrá realizarse con las obras sociales.

#### Art. 27. — Afiliación.

1. Los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores.

2. La ART no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación.

3. La afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determinará la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

4. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alienotas vigente a la fecha del vencimiento.

5. La rescisión del contrato de afiliación estará sujeta a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra ART.

#### Art. 28. — Responsabilidad por omisiones.

1. Si el empleador omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley.

2. Si el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del fondo de garantía de la LRT.

4. Si el empleador omitiera —total o parcialmente— el pago de las cuotas a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.

#### Art. 29. — Insuficiencia patrimonial.

Declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador asegurado o, en su caso, autoasegurado para asumir las obligaciones directamente a su cargo, las prestaciones serán financiadas por la Superintendencia con cargo al fondo de garantía de la LRT.

#### Art. 30. — Autoseguro.

1. El Estado nacional y las empresas que hubieren optado por el régimen de autoseguro deberán cumplir con las obligaciones que esta ley pone a cargo del empleador y a cargo de las ART, con la excepción de la afiliación y del aporte al fondo de reserva de la LRT.

2. En caso de insuficiencia patrimonial de una empresa autoasegurada, las prestaciones se atenderán con recursos del fondo de garantía de la LRT.

### CAPÍTULO IX

#### Derechos, deberes y prohibiciones

#### Art. 31. — Derechos, deberes y prohibiciones.

1. Las aseguradoras de riesgos del trabajo.

- a) Fiscalizarán el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el plan de mejoramiento, denunciando ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) los incumplimientos;
- b) Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la LRT;
- c) Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas;
- d) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento;
- e) Informarán a los interesados acerca de la composición de la entidad, de sus balances, de su régimen de alienotas, y demás elementos que determine la reglamentación;
- f) No podrán fijar cuotas en violación a las normas de la LRT, ni destinar recursos a objetos distintos de los previstos por esta ley.

2. Los empleadores:

- a) Recibirán información de la ART respecto del régimen de alienotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos;
- b) Informarán a los trabajadores acerca de la utilidad de la ART a la que se encuentran afiliados;
- c) Informarán a la ART de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se produzcan en su establecimiento;
- d) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento;
- e) Mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento.

## 3 Los trabajadores:

- a) Recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas;
- b) Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional;
- c) Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo;
- d) Se someterá a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación.

## Art. 32. — Sanciones.

1. El incumplimiento por parte de los empleadores y de las ART de las obligaciones a su cargo, será sancionado con la multa que fije la reglamentación.
2. Si el incumplimiento del empleador consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, será sancionado conforme lo prescrito por la ley 23.771, por el Código Penal, y por la ley 11.683.
3. El incumplimiento de las ART en el pago de las prestaciones a su cargo o en el pago de los aportes a los fondos creados por esta ley, serán sancionados conforme lo prescrito por la ley 23.771, el Código Penal, y por la disposición adicional tercera de esta ley.

## CAPÍTULO X

*Fondo de garantía de la LRT*

## Art. 33. — Creación y recursos.

1. Créase el fondo de garantía de la LRT con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada.
2. Para que opere la garantía del apartado anterior, los beneficiarios o la ART en su caso, deberán realizar las gestiones indispensables para ejecutar la sentencia y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial en los plazos que fije la reglamentación.
3. El fondo de garantía de la LRT será administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y contará con los siguientes recursos:
  - a) Los previstos en esta ley, incluido el importe de las multas por incumplimiento de las normas sobre daños del trabajo, y de las normas de higiene y seguridad;
  - b) Una contribución a cargo de los empleadores privados autoasegurados, equivalente al 1,5 % de las prestaciones dinerarias que abonen a sus damnificados;
  - c) Las cantidades recuperadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial;
  - d) Las rentas producidas por los recursos del Fondo de garantía de la LRT, y las sumas que le transfiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

## CAPÍTULO XI

*Fondo de reserva de la LRT*

## Art. 34. — Creación y recursos.

1. Créase el fondo de reserva de la LRT con cuyos recursos se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la ART que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación.
2. Este fondo será administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y se formará con los recursos previstos en esta ley, y con un aporte a cargo de las ART cuyo monto será anualmente fijado por el Poder Ejecutivo.

## CAPÍTULO XII

*Entes de regulación y supervisión de la LRT*

## Art. 35. — Creación.

Créase la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. La SRT absorberá las funciones y atribuciones que actualmente desempeña la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

## Art. 36. — Funciones.

1. La SRT tendrá las funciones que esta ley le asigna y, en especial, las siguientes:
  - a) Controlar el cumplimiento de las normas sobre daños del trabajo y de las normas de seguridad o higiene en el trabajo, pudiendo dictar las normas complementarias que resulten de delegaciones de esta ley o de los decretos reglamentarios.
  - b) Supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las ART;
  - c) Imponer las sanciones previstas en esta ley;
  - d) Requerir la información necesaria par el cumplimiento de sus competencias, pudiendo peticionar órdenes de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública;
  - e) Dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, gestionar los fondos de garantía y de reserva, determinar su estructura organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos;
  - f) Mantener el Registro Nacional de Incapacidades Laborales en el cual se registrarán los datos identificatorios del damnificado y su empresa, época del infortunio, prestaciones abonadas, incapacidades reclamadas, y además, deberá elaborar los índices de siniestralidad.

2. La Superintendencia de Seguros de la Nación tendrá las funciones que le confiere esta ley, la ley 20.091, y sus reglamentos.

## Art. 37. — Financiamiento.

1. Los gastos de funcionamiento de los entes de supervisión se atenderán con la tasa prevista en la ley 20.091 (artículo 81), aplicada sobre las cuotas mensuales que el empleador paga a las ART.



2. El Poder Ejecutivo proveerá a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el equipamiento necesario para su funcionamiento.

3. El presupuesto de la SRT no integra el presupuesto de la Nación.

Art. 38. — Autoridades y régimen del personal.

1. Un superintendente, designado por el Poder Ejecutivo previo proceso de selección, será la máxima autoridad de la Superintendencia.

2. La remuneración del superintendente y de los funcionarios superiores del organismo será fijada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

3. Las relaciones del personal con la Superintendencia se regirán por la legislación laboral.

### CAPÍTULO XIII

#### *Responsabilidad civil del empleador*

Art. 39. — Responsabilidad civil.

1. Las prestaciones de esta ley exigen de responsabilidad civil al empleador, salvo la derivada del artículo 1.072 del Código Civil.

2. En este último caso, cuando el accidente de trabajo o la enfermedad laboral sean consecuencia de la conducta dolosa del empleador, el damnificado podrá reclamarle la reparación de los daños y perjuicios, de acuerdo a las normas del Código Civil.

3. Sin perjuicio de la acción civil del párrafo anterior, el damnificado tendrá derecho a las prestaciones de esta ley a cargo de las ART y de los autoasegurados, quienes podrán repetir su costo del responsable de los daños y perjuicios.

### CAPÍTULO XIV

#### *Órgano tripartito de participación*

Art. 40. — Comité consultivo permanente.

1. Créase el comité consultivo permanente de la IRT, integrado por tres representantes del gobierno, tres representantes de la CGT, tres representantes de las organizaciones de empleadores, y presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

El comité aprobará por consenso su reglamento interno, y podrá proponer modificaciones a la normativa sobre riesgos del trabajo y al régimen de higiene y seguridad en el trabajo.

2. Este comité tendrá funciones consultivas en las siguientes materias:

- a) Reglamentación de esta ley;
- b) Listado de enfermedades laborales;
- c) Tablas de evaluación de incapacidades laborales;
- d) Determinación del alcance de las prestaciones en especie;
- e) Acciones de prevención de los riesgos del trabajo;
- f) Indicadores determinantes de la solvencia económica financiera de las empresas que pretenden autoasegurarse.

3. En materias indicadas, la autoridad de aplicación deberá consultar al comité con carácter previo a la adopción de las medidas correspondientes.

Los dictámenes del comité en relación con los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, tendrán carácter vinculante.

El listado de enfermedades laborales deberá confeccionarse teniendo en cuenta la causa directa, de la enfermedad con las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales de trabajo.

### CAPÍTULO XV

#### *Normas generales y complementarias*

Art. 41. — Normas aplicables.

1. En las materias no reguladas expresamente por esta ley, y en cuanto resulte compatible con la misma, será de aplicación supletoria la ley 20.091.

2. No es aplicable al régimen de esta ley, el artículo 188 de la ley 21.241.

Art. 42. — Negociación colectiva.

La negociación colectiva laboral podrá:

- a) Crear Aseguradoras de Riesgo del Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo;
- b) Definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo.

Art. 43. — Denuncia y caducidad.

1. El derecho a recibir las prestaciones de esta ley comienza a partir de la denuncia de los hechos causales de daños derivados del trabajo.

2. La reglamentación determinará los requisitos de esta denuncia.

Art. 44. — Prescripción.

1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.

2. Prescriben igualmente a los dos años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de sus acreencias.

Art. 45. — Situaciones especiales.

Encomiéndose al Poder Ejecutivo de la Nación el dictado de normas complementarias en materia de:

- a) Pluriempleo;
- b) Relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial; y
- c) Sucesión de siniestros.

Art. 46. — Competencia judicial.

1. La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social tiene competencia exclusiva para entender en los conflictos por aplicación de esta ley.

2. Las acciones derivadas del artículo 1.072 del Código Civil transitarán ante la justicia civil.

3. El cobro de las cuotas, recargos e intereses adeudados a la ART, así como de las multas de esta ley se hará efectivo por la vía de apremio establecida en el Código Procesal Civil de la Nación, sirviendo de satisficente título ejecutivo el certificado de deuda expedido

por la ART o por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En competencia para entender en estos procesos correspondrá a la justicia federal y, en la Capital Federal, a los tribunales nacionales del Trabajo.

4. En las acciones judiciales derivadas de esta ley y promovidas por los damnificados o sus derechohabientes, los honorarios de los profesionales intervinientes se regirán teniendo en cuenta las dimensiones del trabajo profesional. El total de dichos honorarios en ningún caso podrá superar el 15 % del monto de la condena o del monto por el que hubiera prosperado el reclamo en el supuesto rechazo total de la demanda.

#### Disposiciones adicionales

Primerá: modificación de la ley 20.744.

Sustitúyese el artículo 75 de la ley 20.744 por el siguiente texto:

1. El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
2. Los daños que sufra el trabajador como consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior, se regirán por las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, dando lugar únicamente a las prestaciones en ella establecidas.

Segunda: modificaciones a la ley 24.241.

1. Sustitúyese el artículo 69 de la ley 24.241 por el siguiente texto:

Las administradoras podrán introducir un esquema de bonificación a las comisiones establecidas en los incisos b) y d) del artículo 68, a condición de no discriminar a los afiliados o beneficiarios comprendidos dentro de una misma categoría. La definición de estas categorías de afiliados o beneficiarios sólo podrá ser efectuada en atención a la cantidad de meses que registren aportes o retiros en la correspondiente administradora, y por hallarse afiliado a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Las normas reglamentarias establecerán el procedimiento para la determinación de las respectivas categorías.

La bonificación deberá establecerse como un porcentaje sobre la comisión vigente, debiendo ser aplicada en forma simultánea al cobro de las respectivas comisiones. El importe bonificado quedará acreditado en la cuenta de capitalización individual del afiliado o beneficiario, según corresponda.

2. Sustitúyese el artículo 177 de la ley 24.241 por el siguiente texto:

El seguro del artículo anterior sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que limiten en forma exclusiva su objeto a esta cobertura y a las prestaciones de pago periódico previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Tales entidades podrán operar en otros seguros de personas que resulten complementarios de las coberturas de seguros de retiro, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y su razón social deberá contener la expresión "seguros de retiro".

Tercera: delito por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

Será reprimido con prisión de 2 (dos) a 6 (seis) años el obligado que no diere cumplimiento a las prestaciones establecidas en esta ley, o que no aportara a los fondos que esta misma ley crea. El delito se configurará cuando el obligado no diere cumplimiento a los deberes aludidos, dentro de los 15 días de intimado a ello en su domicilio legal.

Cuarta: modificaciones a la ley 24.028.

1. Sustitúyese el artículo 45 por el siguiente texto:

Con carácter previo a la iniciación de cualquier acción judicial tendiente a la reparación de un accidente o enfermedad del trabajo deberá tramitarse obligatoriamente una instancia obligatoria de conciliación administrativa con arreglo a las pautas que a continuación se indican.

El trámite se iniciará mediante denuncia escrita formulada por el trabajador o sus derechohabientes en caso de fallecimiento de aquél, ante la delegación de la ANSSS dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, correspondiente al domicilio del empleador, del asegurador o del lugar de prestación normal y habitual de los servicios.

La denuncia deberá contener una descripción suficientemente clara de los hechos configurativos del siniestro invoacado y la incapacidad alegada, acompañando los estudios, diagnósticos y certificaciones médicas que posea, así como también la documentación que acredite los niveles de educación formal alcanzados o, en su defecto, una declaración jurada sobre el nivel de educación formal alcanzado.

Del escrito de denuncia se dará traslado al empleador y a su asegurador a fin de que alegue lo que estime pertinente sobre los hechos controvertidos denunciados por el trabajador y en su caso, ofrezca la prueba que estime pertinente en la audiencia convocada por la comisión médica del artículo 49 de la ley 24.241. A tal efecto la comisión médica con competencia en el domicilio del damnificado fijará una audiencia en un plazo no mayor de 30 días, en la que podrá participar un facultativo propuesto por cada una de las partes. En caso que el empleador no asistiera a la audiencia convocada por la comisión médica o negare que el daño se produjo en las circunstancias denunciadas por el trabajador o reconociéndolas invoacare las causas de exención total de responsabilidad prevista en el artículo 7º, se archivarán las actuaciones.

Si la discrepancia girara en torno de la existencia o grado de incapacidad o del grado de exención parcial de incapacidad la comisión médica

deberá expedirse en un plazo no mayor de 10 días. A los fines del dictamen médico la comisión médica podrá solicitar los estudios complementarios necesarios para dilucidar la controversia.

Del dictamen médico se convocará a las partes por el término de cinco (5) días, citándolas en el mismo acto a una audiencia para intentar una conciliación. En la audiencia fijada, la autoridad administrativa teniendo a la vista todos los antecedentes acumulados en la causa, invitará a las partes a arribar a una solución transaccional.

Si alguna de las partes no concurre a la audiencia de conciliación, o fracasaran las gestiones conciliatorias, se archivarán las actuaciones y el resultado del informe médico producido en sede administrativa no será vinculante en instancias inferiores.

Si se arribase a un acuerdo y el mismo fuese homologado en los términos del artículo 13, inciso 4 de esta ley, pasará en autoridad de cosa juzgada y habilitará al trabajador o a sus representantes a iniciar ejecución judicial en caso de incumplimiento del pago dentro del plazo previsto. Este acuerdo implicará la renuncia expresa al ejercicio de la opción por un reclamo al amparo de las normas civiles previstas en el artículo 16.

Será condición esencial para que la autoridad administrativa del trabajo homologue el acuerdo al que arriben las partes que el trabajador haya actuado con patrocinio letrado o asistencia sindical.

En ningún caso el trámite administrativo podrá tener una duración mayor de un año. Transcurrido este plazo sin que se haya arribado a un acuerdo, quedará expedita la vía judicial.

Los honorarios de los facultativos propuestos por las partes corren a su exclusivo cargo.

## 2. Sustitúyese el artículo 17 por el siguiente texto:

En las acciones judiciales iniciadas al amparo de las normas de esta ley o de la opción prevista en el artículo 16, los jueces deberán regular los honorarios de todos los profesionales intervinientes con abstracción del monto reclamado, del de la condena o transacción, y considerando exclusivamente la calidad y extensión de los trabajos realizados.

En ningún caso las regulaciones de honorarios de los letrados y apoderados de la parte vencedora y de los peritos podrán superar, en conjunto el veinticinco por ciento (25 %) del monto por el que la demanda podría haber prosperado, en caso de rechazo total, o del de condena o de la transacción, en su caso.

## Disposiciones transitorias

### Primera: compañías de seguros.

1. Las aseguradoras que a la fecha de promulgación de esta ley se encuentren operando en la rama de accidentes de trabajo podrán convenir con una ART la transferencia de la totalidad de los siniestros pendientes como consecuencia de esa operatoria, a la fecha que deter-

mine la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiendo en tal caso ceder igualmente los activos que respalden la totalidad de dichos pasivos.

2. Tales aseguradoras podrán continuar con su operatoria quedando sometidas a las mismas obligaciones a cargo de las ART, a excepción de los capitales mínimos que serán los exigidos en las normas que rigen la actividad aseguradora.

Los bienes que respalden las reservas derivadas de esta operatoria estarán sujetos al régimen de esta Ley de Riesgos del Trabajo, deberán ser registrados y expresados separadamente de los correspondientes al resto de sus actividades y no podrán ser afectados al respaldo de otros compromisos.

En caso de liquidación, estos bienes serán transferidos al fondo de reserva de la ART y no podrán ser afectados por créditos o acciones originados en otras operatorias.

### Segunda: contingencias anteriores.

1. Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley durarán derecho únicamente a las prestaciones de la LRT, aun cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescrito el derecho conforme a las normas de esta ley.

2. En este supuesto el otorgamiento de las prestaciones estará a cargo de la ART a la que el empleador se encuentre afiliado, a menos que hubiere optado por el régimen de autoseguro o que la relación laboral con el damnificado se hubiere extinguido con anterioridad a la afiliación del empleador a la ART.

## Disposiciones finales

### Primera:

Esta Ley sobre Riesgos del Trabajo entrará en vigencia una vez que una comisión tripartita apoyada por consenso el listado de enfermedades laborales y la tabla de evaluación de incapacitados laborales.

Tal aprobación deberá producirse dentro de los 180 días desde la promulgación de esta ley.

### Segunda:

1. El régimen de prestaciones derivadas por incapacidad permanente, muerte y gran invalidez entrará en vigencia progresivamente y por etapas, de modo tal que el 100 % de tales prestaciones se alcance dentro de los seis (6) años siguientes a la promulgación de esta ley.

2. Durante la primera etapa el régimen de prestaciones será el siguiente:

a) Incapacidad permanente parcial. Mientras dure la situación de provisionalidad de la incapacidad laboral permanente, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, cuya cuantía será el porcentaje del valor mensual del ingreso base que corresponda según la edad del damnificado de acuerdo con la siguiente escala:

Edad del damnificado	Porcentaje del valor mensual del ingreso base
Menos de 31 .....	45
31 a 40 .....	50
41 a 50 .....	55
51 a 60 .....	60
Más de 60 .....	65

Una vez finalizada la etapa de provisionalidad y en el caso de que el porcentaje de incapacidad sea inferior al 50 %, se abonará una indemnización de pago único, cuya cuantía será igual a 43 veces el valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del damnificado a la fecha de la primera manifestación invalidante. Esta suma, en ningún caso, será superior a la cantidad que resulte de multiplicar \$ 55.000 por el porcentaje de incapacidad.

Para el caso en que el porcentaje de incapacidad permanente definitiva fuera igual o superior al 50 % o inferior al 66 % se abonará una renta periódica cuyo monto será igual al porcentaje de incapacidad multiplicado por el porcentaje del valor mensual del ingreso base que corresponda según la edad del damnificado de acuerdo con la escala precedente.

En ningún caso el valor actual esperado de la renta periódica podrá superar los \$ 110.000;

- b) Incapacidad total, muerte y gran invalidez. En sustitución de la obligación impuesta en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15, la ART se hará cargo del 25 % del capital complementario definido en el artículo 92 de la ley 24.241 o, en su caso, abonará una suma equivalente al régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y abonará además a éste o, en su caso, a sus derechohabientes, una suma de pago único equivalente a la diferencia entre el valor de 43 salarios mensuales multiplicados por el coeficiente que surge de dividir el número 65 por la edad del damnificado con el límite máximo de \$ 55.000 y el 25 % del capital complementario.

3. Facúltase al Poder Ejecutivo a definir el cronograma de las siguientes etapas, previa consulta con el comité consultivo permanente de la LRT.

4. El paso de una etapa a la siguiente estará condicionado a que la cuota promedio a cargo de los empleadores incluidos en esta ley, en el último año, no supere lo 3 % de la nómina salarial.

#### Tercera:

1. Las disposiciones adicionales primera y cuarta entrarán en vigencia en la fecha de promulgación de la presente ley.

2. A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente.

Art. 47. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

José A. Caro Figueroa. — Domingo F. Carrallo.

#### OBSERVACIONES

1

Buenos Aires, 15 de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de esta Honorable Cámara, vengo en tiempo y forma a observar el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, Justicia y Presupuesto y Hacienda, publicado en el Orden del Día N° 1.242, Ley de Riesgos del Trabajo, expediente 59-P.E.-94.

Sin perjuicio de ampliar oportunamente en el tratamiento del proyecto en cuestión, señalaré a continuación las razones fundamentales que motivan las presentes observaciones.

En primer lugar la técnica legislativa empleada no resulta feliz, si se tiene en cuenta que en la cláusula cuarta de las disposiciones adicionales y finales que se establecen en el artículo 49 se reemplaza el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.028, mientras que más adelante, en el punto 3 de la cláusula tercera de las disposiciones finales se utiliza la fórmula genérica de que quedarán derogadas todas las disposiciones de la ley 24.028, sus complementarias y reglamentarias y toda otra norma en cuanto se oponga a la presente.

Del análisis del proyecto se advierte con facilidad que la referida situación originará un alto índice de litigiosidad resultando numerosas las situaciones que devienen ambiguas, toda vez que en definitiva serán los órganos jurisdiccionales los que en definitiva deberán resolver cuáles son las normas aplicables al caso en concreto.

En tal sentido, creemos necesario una reestructuración orgánica de todo el régimen de accidentes del trabajo, o en su defecto la derogación expresa de las normas que el proyecto en tratamiento pretende reformar.

En cuanto al contenido del proyecto, se realizan las siguientes observaciones:

— En cuanto al ámbito de aplicación consideramos necesario mantener la definición de trabajador que realiza el artículo 1º de la ley 24.028, sin perjuicio del agregado de las actividades que el proyecto incorpora.

— El carácter que se les da a las comisiones médicas que establece el artículo 21 del proyecto, excede la mera determinación de la existencia y entidad de una enfermedad o accidente laboral, transformándose al respecto en un órgano con facultades decisorias inapelables. La situación descrita implica un inaceptable desplazamiento

de la función jurisdiccional a la esfera administrativa para resolver sobre la materia.

— Asimismo el proyecto elimina el derecho que tradicionalmente tiene el damnificado de optar entre la vía prevista en la ley especial o la reparación integral que establece la legislación civil.

— Finalmente, y si bien creemos que la legislación sobre la materia debe ser adecuada a la nueva realidad económica, consideramos que el sistema de prestaciones dinerarias proyectado afecta el principio de equidad entre las partes.

Por lo expuesto, y sin perjuicio de las consideraciones que se harán en la oportunidad del tratamiento en general y particular del proyecto en cuestión, dejo formuladas las presentes observaciones.

*Nicolás A. Caray.*

2

Buenos Aires, 20 de marzo de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, dentro del término fijado por el artículo 95 del reglamento de este cuerpo, a los efectos de observar totalmente el dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.242 referido a la creación del Régimen sobre Riesgos del Trabajo, fundado en las razones que expondré en el recinto sosteniendo mi oposición a esta modificación del régimen actual.

Saludo a usted cordialmente.

*Angel M. D'Ambrosio.*

3

Buenos Aires, 20 de marzo de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de observar, en tiempo y forma, el Orden del Día N° 1.242, referido al proyecto de ley para la Regulación de la Prevención de los Riesgos y la Reparación de los Daños Derivados del Trabajo.

*¿Cuál es el punto de partida?*

El derecho del trabajo, sin perder su esencia ni sus principios, debe adaptarse a los cambios y transformaciones que realmente se den en las relaciones laborales. Pero para ello se debe desmitificar la discusión, desechando los eslóganes que los lobbies pretenden —muchas veces con éxito— instalar en la opinión pública a fuerza de repetición.

En efecto, hace unos años comenzó una verdadera campaña publicitaria, agitada y catapultada por empresarios y comunicadores sociales tendiente a bajar los costos laborales de las empresas.

Dos de las tantas materias atacadas falazmente en dicha campaña era nel "Régimen de Accidentes de Trabajo" y la "industria del juicio" que el mismo, se invocaba, generaba.

Decían, por ejemplo, que en Rosario había entre 50.000 y 50.000 pleitos por lipoacusia. En la misma época de la campaña que denunciábamos, el doctor Cingolani, juez del Trabajo de Rosario, se encargó de esclarecer la verdad frente a dicha falacia. En su juzgado desde 1983 a 1990, sólo tuvo que dictar diez sentencias sobre lipoacusia y en los ocho juzgados del Trabajo de Rosario, por todos los conceptos reclamables en la justicia laboral (enfermedades, accidentes, despidos, diferencias salariales, etcétera) sólo tramitaba 9.500 juicios.

No obstante, la campaña orquestada obtuvo un claro triunfo. La legislación sobre accidentes de trabajo fue modificada, a instancias de las compañías de seguro y de ciertos sectores empresariales y en el sentido por ellos pretendido; por eso afirmamos que el lobby tuvo resultado positivo. Así, el 26 de diciembre de 1991 entró en vigencia la ley 24.028 que, derogando la ley 9.688, redujo las indemnizaciones de los trabajadores incapacitados y los honorarios de abogados y peritos.

Queda claro entonces que la ley 24.028 fue producto de la presión empresarial y del apoyo de los ministerios de Trabajo y Economía.

Hoy, sin esperar los resultados de esta ley, la impetuosa necesidad de hacer caja impulsa una nueva reforma que, como entonces, ignora los datos ciertos y oculta los conocidos, disminuyendo la protección a los trabajadores.

Pensamos que una primera aproximación sobre el tema nos lleva a la necesidad de contar con informes ciertos que actualmente no existen, o existen en parte, o se ocultan premeditadamente. O lo que es peor, se utilizan algunos pocos casos patológicos, para generar una imagen engañosa de la realidad.

No hay información actuarial sobre los montos que anualmente se pagan en concepto de enfermedades o accidentes, desagregando de acuerdo a que se haya aplicado la ley 9.688 o la ley 24.028.

No hay información sobre las falencias en torno de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

No hay información sobre las inversiones efectuadas en higiene y seguridad.

No hay información sobre la cantidad de trabajadores con disminución de su capacidad laborativa derivada de accidentes o enfermedades vinculadas con el trabajo.

No hay información estadística sobre la incidencia de enfermedad laborativa sobre el universo total de enfermedades.

No hay información estadística sobre las causas que provocan los accidentes de trabajo.

No hay información sobre los montos que no pudieron percibir los trabajadores incapacitados por invalencia de sus empleadores.

No se conocen tampoco los costos administrativos que demandó el sistema actual.

En un análisis sobre los recursos que deben destinarse a:

1. Asistencia médica y farmacéutica.
2. Provisión y renovación de aparatos de prótesis y ortopedia.
3. Tratamiento de rehabilitación.
4. Programas de readaptación profesional.
5. Servicio funerario, etcétera.

Por otra parte, se ocultan datos ciertos y verificables en lo que hace a la disminución de la litigiosidad judicial, al costo de los honorarios, al rechazo o favorable acogida a las demandas por accidentes y enfermedades laborales, al aumento de la dificultad para percibir las reparaciones ordenadas en las sentencias en tal tipo de juicios, y al verdadero costo de tales reparaciones.

En tal sentido, los datos que a continuación se exponen surgen de estadísticas efectuadas por las excelentísimas Cámaras Nacional de Apelaciones del Trabajo y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

#### 1. La litigiosidad bruto en proporciones más que significativas

En 1901, con la ley 9.688 se iniciaron 18.301 pleitos.

En 1904, con la ley 24.028, se iniciaron al 21-10-04, 6.260 pleitos, que proyectados a todo el año, dan 7.500, es decir que se redujo la litigiosidad a un 40 %.

En 1991, por la acción civil de la ley 9.688, se iniciaron 3.580 pleitos.

En 1994, con la ley 24.028, por la acción civil se iniciaron hasta el 21-10-94, 711 juicios que proyectados a todo el año dan 853, es decir se redujo la litigiosidad al 23 %.

#### 2. Se redujeron los honorarios

Los honorarios de los peritos y de los abogados ya no son un porcentaje de la demanda o de la condena, sino importes mucho menores por imperio del artículo 17 de la ley 24.028 que en su parte pertinente reza: "Los jueces deberán regular los honorarios de todos los profesionales intervinientes con abstención del monto reclamado y en función de los trabajos realizados...".

Recientemente, y en virtud de la sanción de la ley 24.432, se disminuyeron aún más los honorarios profesionales, al imponer a los mismos un tope del 25 % del monto de condena a distribuirse entre todos los profesionales (abogados y peritos) intervinientes en el pleito.

Por otra parte, si el trabajador pierde el juicio, su abogado no percibe honorarios.

#### 3. Quiénes ganan y quiénes pierden

En nuestro país existen al decir de Arturo Jauretche, verdaderas zonas etólicas. Una de ellas, sería aquella que afirma que: "...en nuestro país, no trabaja el que no quiere..." y otra, que se refiere específicamente al tema que estamos abordando, es que asegura que: "...los patrones pierden todos los juicios laborales...".

El trabajador pierde más juicios que los que gana. En una investigación realizada por la doctora Izabe Vasilachis de Gialdino por el período 1982/85, en porcentajes que luego se aumentaron en perjuicio del trabajador, el empleador gana el 53,6 % de los juicios por enfermedad y el 37,6 % por accidentes. Se estima que del total de juicios, el 80 % son por enfermedades y el 20 % por accidentes. Ello indica que el trabajador perdía 55,36 %, porcentaje que aumentó en los últimos años, máxime si se tiene en cuenta las nuevas leyes flexibilizadoras dictadas con el objetivo de disminuir costos empresariales.

Los accidentes de trabajo reclamados por el artículo 1.113 se demandan ante la justicia civil (conf. ley 24.028), lo que implica una menor especialidad de la justicia civil sobre el tema, mayor complejidad procesal (no hay inapropio de oficio en el proceso civil), perjudicando notoriamente la defensa de los trabajadores.

#### 4. La dificultad de cobrar las reparaciones

En los últimos años aumentó notablemente la dificultad para percibir los juicios que gana el trabajador:

	Expedientes en prueba	Expedientes en ejecución
1991	105.533	49.889 (47,36 %)
1992	119.857	54.554 (45,52 %)
1993	121.720	57.227 (47,01 %)
1994	119.426	50.172 (41,93 %)

Esta estadística elaborada de la Procuraduría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, revela que prácticamente se duplicaron los juicios ganados por el trabajador pero no puede cobrar sin excepción, y en un 30 % de los casos no cobra a pesar de la ejecución.

#### 5. Los verdaderos costos

Un autoritario, el "Crónica Comercial" del 20-10-94, citando un estudio del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la Argentina (IDEA), aseguró que de agosto del '93 al mismo mes de 1994 se registraron demandas por accidentes de trabajo por un valor superior a los 21 millones de pesos, que con las costas ascenderían, según decían, a 33 mil millones de pesos. Esta afirmación significa un menor ítem del tema de referencia. Ese ítem, además de inventar, implica aproximadamente, la mitad de la deuda externa. Afirmamos que días después, rectificaron la información sosteniendo que los importes respondían a todos los juicios laborales, más o menos como si existieran mentiras verdaderas.

En primer término recordemos que por la ley 24.028 el tope máximo indemnizatorio (la muerte por ejemplo) es de \$ 55.000. Esta cifra nos demuestra el valor que la ley considera que tiene la vida de un trabajador que muere como consecuencia de un accidente de trabajo. No cambia esta cifra si el accidente se debe a la culpa del empleador, por ejemplo por no suministrar el lugar de trabajo las condiciones mínimas de higiene y seguridad, etcétera.

Estimando el promedio de incapacidad en el 15 %, la condena maxima (siendo generalmente menor en función de la depresión de los niveles salariales) será de (15 % sobre \$ 55.000) = \$ 8.250. Multiplicado por los juicios que se pagan, que estimamos en un 70 %, da un total de \$ 19.490.625. Si le adicionamos las costas, no más de un 28 % por imperio del artículo 17 citado (ahora reducido por la ley 24.432), éstas son de \$ 5.457.375, o sea un total de \$ 30.145.000. Am cobrándose el 100 por ciento de los juicios, esa cifra no llega a los 45 millones de pesos.

Ahora, si calculamos que cada juicio iniciado en la justicia civil tiene iguales porcentajes de condena que en el fuero laboral (estimando el importe global de sentencia en \$ 200.000), el total sería de \$ 38.391.000. Si le adicionamos las costas de los juicios ganados por el empleador, serían \$ 844.470 más, o sea \$ 39.238.470. Sumando todos los costos da un total de \$ 69.383.970. Estos juicios abarcan Capital Federal y un 30 % de la provincia de Buenos Aires. Puede proyectarse, en consecuencia, otro tanto por los pleitos iniciados en las demás jurisdicciones, lo que da un total de \$ 138.767.940.

Para efectuar alguna comparación, es el 1,4 % del importe de evasión patronal, estimado por Tacchi en \$ 10 mil millones.

En definitiva, no existe una evaluación seria, científica y responsable sobre los resultados económicos medidos en base a la ley que comenzó a regir a finales de diciembre de 1931 como para poder evaluar acabadamente los costos de su aplicación; y ello desde la perspectiva empresarial.

Por el contrario, puede sin lugar a dudas efectuarse una evaluación acerca de su consecuencia para los trabajadores: la nueva ley implicó la disminución de los montos resarcitorios y la supresión de derechos que les concedía la legislación anterior.

Como corolario de lo antedicho, no cabe otra conclusión que la imposibilidad de efectuar un tratamiento serio, responsable, y con pretensiones de utilidad social, de un proyecto de ley que regule materia de semejante trascendencia social —como son las incapacidades laborales— que carece del más mínimo fundamento en la realidad de la siniestralidad y sus costos en la República Argentina.

Si datos ciertos acerca de los puntos señalados no pueden encuadrarse modificaciones legales que atiendan a la prevención de accidentes, a la higiene y seguridad laboral, a las reparaciones de los daños sufridos por el trabajador, y a la factible reducción de sus costos.

### *El proyecto de ley*

El proyecto de Ley enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo pregona entre sus objetivos "reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo" y "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales".

Pero del texto del proyecto en consideración se desprende claramente que ninguno de los dos objetivos se cumplirá.

Con este proyecto empeora la situación de ambas partes de la relación laboral, trabajador y empleador. Pero en mayor medida se perjudica el trabajador.

En primer lugar, de obtener favorable sanción el proyecto de ley para la Regulación de la Prevención de los Riesgos y la Reparación de los Daños Derivados de Trabajo enviado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo dejará librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo la determinación de cuáles serían las enfermedades laborales mediante la inclusión que de las mismas debe efectuar en un listado a tal fin. Dispone el mismo proyecto que las enfermedades no incluidas en dicho listado en ningún caso serán consideradas laborales.

Este listado de enfermedades laborales de carácter taxativo, conlleva al serio riesgo de quedar excluidas del mismo enfermedades que, según la letra del decreto, no obtendrían reparación. Encontraríamos así enfermedades incapacitantes causal o ocasional vinculadas al trabajo que podrían no generar derecho a reparación.

En segundo lugar, se exime a los empleadores de toda responsabilidad por los accidentes o enfermedades sufridos por sus dependientes, salvo el caso de dolo. Ello implica que el empleador sólo será responsable cuando el daño sufrido por el trabajador haya sido causado por su patrono deliberadamente y con la intención de causarle dicho daño; por ejemplo, cortar la mano.

Los trabajadores son arbitrariamente y peyorativamente discriminados respecto del resto de los ciudadanos en el proyecto en análisis.

Dispone el Código Civil que todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio (artículo 1.109). De la misma manera se encuentra obligado a reparar el daño causado con una cosa, o por el riesgo o vicio de una cosa, su dueño o guardián. Esta obligación reparatoria se extiende a los daños que causaren las personas que están bajo su dependencia (artículo 1.113).

A partir del proyecto de ley en consideración, los trabajadores dependientes ya no serán igual al resto de los habitantes del país, serán ciudadanos de segunda que carecerán de los derechos que el derecho común garantiza a todo aquel que habite el territorio nacional sean argentinos o extranjeros, domiciliados o transeúntes.

El trabajador que sufra un daño por culpa o negligencia de su empleador, por las cosas de que éste se sirve, por el riesgo o vicio de una cosa de su propiedad o bajo su guarda, o por otro dependiente de la misma empresa no puede exigir la reparación del daño causado.

Para ser más claros: si de una obra en construcción se desprende un andamio y mata o incapacita a una persona, el empleador será responsable o no de reparar el daño según sobre quien caiga el andamio. Si el damnificado es, por ejemplo, un transeúnte, el constructor deberá indemnizar el daño ocasionado. Si el damnificado es un trabajador de él dependiente, se encuentra eximido de toda responsabilidad, no estando obligado a reparar el daño causado.

Si los accidentados del ejemplo fallecieran como consecuencia del siniestro, esto es lo que percibirían sus viudas:

La del patrón, la indemnización a cargo del constructor más la pensión correspondiente.

La del trabajador, solamente la pensión, no teniendo derecho —según el proyecto y supleniendo su constitucionalidad— a percibir indemnización alguna.

Resulta claro que la discriminación creada por el proyecto es manifiestamente inconstitucional frente al imperativo del artículo 16 de la Carta Magna que garantiza la igualdad ante la ley.

#### *Aspectos de prevención*

Los empleadores ya no serán responsables por los daños psicofísicos que sufran sus dependientes por el hecho o en ocasión del trabajo. Al eximir de responsabilidad a los empleadores por las incapacidades sufridas por los trabajadores, se incentiva la no inversión en higiene y seguridad laboral.

Si con el Régimen de Accidentes de Trabajo vigente, en el que el empleador es responsable por las incapacidades laborales sufridas por sus dependientes, no existe prácticamente inversión en condiciones de higiene y seguridad a fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales, nunca puede razonablemente sospechar que en un país en que el discurso economicista dominante pregona que la única salvación está en la "disminución de los costos" algún empresario invierta dinero en higiene y seguridad cuando su competidor que no invierte en ello será tan irresponsable (no responsable) como él por los daños que pudieran sufrir los trabajadores.

Podría pensarse qué pautas culturales llevarían a los empresarios a invertir en prevención de infortunios. Pero en una sociedad donde se ha cortado la cadena de pagos no es de esperar que sobre cuestiones económicas prevalegan las pautas culturales.

Prescribe el proyecto además, que el incumplimiento por parte de los empleadores a las normas de higiene y seguridad en el trabajo no podrá ser sancionado. Este contrasentido implica la permisividad legal a incumplir o violar la ley. Es la propia ley la que habilita al sujeto al que por un lado obliga un determinado comportamiento a violarlo. Para ello, sólo necesita el empleador no terminar nunca el plan de mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene. "Señor empleador: ésta es la ley. Si usted quiere puede cumplir con ello. Si no quiere no cumpla porque no puede ser sancionado".

Contra dichas argumentaciones podrá sostenerse que las cuotas mensuales que el empleador tendrá que pagar a las ART estarán determinadas en función de los riesgos de siniestro en su establecimiento. El razonamiento es lógico pero irreal. Hay en día dicho razonamiento podría aplicarse a las primas por seguro de accidente de trabajo. La lógica indica que su monto tendría que estar en relación con los riesgos del establecimiento. Pero todos sabemos que no es así. En nada modifica el valor de la prima de seguro por accidente el riesgo de siniestralidad en cada establecimiento.

Como se ve, si igualmente irresponsables son los empleadores que, conscientes del rol social que les corresponde en nuestra comunidad, preservan la integridad psicofísica de sus dependientes invirtiendo a tal fin, y los empleadores que nada invierten en ello, el proyecto lo que incentiva es la no inversión en prevención, y no la prevención de sí como grandilocuentemente declara.

Más aún resulta así cuando es la propia ley la que faculta a violar otra ley (Higiene y Seguridad).

#### *Aspectos reparatorios*

También pierden los trabajadores en cuanto a las reparaciones que la ley dispone para los infortunios laborales.

Así, sólo tendrán derecho a percibir indemnización en un solo pago los trabajadores que posean una incapacidad permanente inferior al 20 % de la total obrera.

Pero el proyecto faculta a las ART a no considerar definitiva la incapacidad hasta transcurrido 60 meses de la declaración de incapacidad. Durante dicho período, 5 años, el trabajador no tendrá derecho a percibir la indemnización correspondiente. Pero, para mayor claridad, vayamos a un ejemplo.

Supongamos un trabajador de 45 años de edad, incapacitado en un 15 % de la t.o., y con un salario de \$ 500.

La indemnización a que este trabajador tendría derecho equivale a la suma de \$ 4.658.

Aun cuando su remuneración mensual fuera superior a la del ejemplo, nunca podría percibir más de \$ 550 por cada grado de incapacidad.

Pero la ART pertinente podría considerar que su incapacidad no es definitiva y mantener la situación de provisionalidad durante 5 años, durante los cuales sólo percibirá el trabajador la suma de \$ 52,50 mensuales.

Nadie, razonable y lógicamente, podría suponer que ésta es una reparación adecuada.

Quiénes sufran una incapacidad superior al 20 % de la t.o., pero inferior al 66 % carecen de derecho a percibir indemnización alguna, su derecho se limita a una renta mensual que, para el trabajador del ejemplo, y suponiendo una incapacidad del 50 % de la t.o., sería de \$ 175. ¿Constituye esto quizás una reparación adecuada?

Por último, si el trabajador sufriera como consecuencia de un accidente de trabajo una incapacidad permanente total (más del 66 % hasta el 100 %), no percibirá indemnización ni renta alguna, solamente cobrará la jubilación por invalidez.

Ahora bien, si nuestro trabajador del ejemplo falleciera como consecuencia de un accidente de trabajo, su viuda, ¿tendrá derecho a percibir alguna indemnización? No. Solamente la pensión correspondiente, tal como si su marido hubiese fallecido durmiendo.

Como se podrá observar, tampoco se cumple con el objetivo declarado de "reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades laborales".

#### *Los empleadores y las ART*

La eximición de responsabilidad de los empleadores que el proyecto dispone parecería constituir una ventaja patrimonial a su favor.

Pero habría que detenerse en el cotejo de costos de cada uno de los sistemas legales sobre accidentes de trabajo (el vigente y el proyectado) para concluir que será el sistema del proyecto más gravoso económicamente que el régimen actual.



El régimen proyectado crea las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART), entidades aseguradoras de los riesgos de trabajo, con competencia exclusiva y excluyente en la materia, recipiendarias de la totalidad de las cotizaciones empresarias y a cuyo cargo se encuentra la gestión de las prestaciones establecidas en el proyecto.

Las ART, un mercado cautivo de aproximadamente 7 millones de trabajadores, que se traduce en una masa económica que supera con creces la suma que en concepto de indemnización por accidentes y enfermedades laborales deben solventar los empleadores bajo el actual sistema normativo.

Estas serán las nuevas beneficiarias de un sistema normativo que no atiende ni a la prevención de los infortunios de trabajo ni a la reparación de los mismos; y que se ha elaborado sin fundamento en datos ciertos que revelen las consecuencias del régimen de accidentes de trabajo instituido por la ley 24.028.

#### *Pedido de informes*

Por ello, a fin de poder dar un serio tratamiento al proyecto de ley sometido a consideración y determinar las falencias del actual sistema normativo que deben ser subsanadas en aras de la prevención y reparación de siniestros laborales, se torna ineludible solicitar los informes que a continuación propongo para conocer acabadamente la realidad sobre la cual debemos operar:

1º—A la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y supremas cortes de Justicia provinciales, a fin de que informen respecto de cada jurisdicción:

- a) Cantidad de juicios en trámite cuyo objeto sea la reparación de accidentes o enfermedades laborales;
- b) Evolución anual de demandas promovidas por tal concepto durante los diez últimos años de la cantidad de juicios por accidente y por enfermedad laboral en etapa de prueba y en etapa de ejecución;
- c) Cantidad de sentencias definitivas dictadas por año en juicios de tal objeto, discriminando aquellas que dieron favorable acogida a la demanda de aquellas que las rechazaron, la enfermedad o incapacidad a reparar, y el porcentaje de incapacidad determinado en cada caso con expresa indicación de la edad del damnificado;
- d) Montos anuales de condena por accidente o enfermedades laborales;
- e) Sumas efectivamente abonadas, en forma anual, en concepto de cumplimiento de sentencias por reparación de accidentes o enfermedades laborales;
- f) Sumas efectivamente abonadas, en los últimos diez años, en concepto de honorarios profesionales en juicios por accidentes o enfermedades laborales, discriminando los de los letrados de la actora, de la demanda, de eventuales citados como terceros, y de peritos.

2º—A la Superintendencia de Seguros de la Nación, a fin de que informe sumas abonadas por las compañías de seguro en concepto de accidentes de trabajo, durante los últimos diez años, discriminando las abonadas en sede administrativa de las de sede judicial, y las correspondientes a honorarios profesionales de letrados y peritos.

Asimismo, se torna necesario contar con la opinión de las instituciones y organismos especialistas en la materia, por lo cual propongo girar el proyecto sometido a nuestra consideración, solicitando opinión sobre el mismo, a:

1º—Los departamentos de Derecho del Trabajo de las facultades de Derecho de la totalidad de las universidades nacionales, sean públicas o privadas.

2º—A las asociaciones y fundaciones cuyo objeto sea el estudio, debate y/o perfeccionamiento de la legislación laboral, entre otras, Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, Asociación de Abogados Laboralistas, Asociación de Abogados de la Argentina, Fundación Altos Estudios Sociales y Colegio Público de Abogados.

A raíz de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta lo delicado del tema que estamos exponiendo, solicito al señor presidente y a mis pares, que el proyecto vuelva al seno de la Comisión de Legislación del Trabajo y abrir en ella un marco de debate a los actores sociales para recabar su opinión al respecto.

Naldo R. A. Brunelli.

4

Buenos Aires, 15 de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Honorable Cámara, vengo a observar el dictamen publicado en el Orden del Día N° 1.242 de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, referente a la Ley sobre Riesgos del Trabajo.

Sin perjuicio del derecho de ampliar mi posición en el recinto, a continuación señalo los fundamentos por los cuales manifiesto disconformidad con el referido dictamen, a efectos de que sean considerados por esta Honorable Cámara.

El proyecto del Poder Ejecutivo sobre riesgos del trabajo tiende a reducir los costos de las empresas, lo que parecería ser el único objetivo de todos los proyectos remitidos por el mismo, mediante el autoseguro de los empleadores que cumplan determinados requisitos y, caso contrario, la obligación de asegurarse en una aseguradora de riesgo del trabajo —ART—, a su elección.

Con una manifestación totalmente voluntarista, expresa que podrá incluirse también al servicio doméstico, autónomos y trabajadores vinculados por relaciones no laborales, sin aclarar cómo podrá llevarse a cabo la protección, ni fijarse plazo para ello, cuando se tienen dificultades para cubrir a los actuales sectores.

En el capítulo II se menciona como una obligación de los empleadores la adopción de las medidas legalmente mencionadas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, y que las partes deberán asumir compromisos concretos para cumplir con las normas sobre higiene y seguridad del trabajo.

En nuestro país no se cumple, salvo raras excepciones, con la ley 19.587 y decreto reglamentario 351/79 de seguridad e higiene en el trabajo, cuya aplicación depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que debe actuar por medio de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus delegaciones en el interior del país.

La realidad ha demostrado que la higiene y seguridad del trabajo no se consideró un objetivo prioritario en el actuar de los organismos de aplicación, sino que se acudió a exigir su cumplimiento generalmente frente a denuncias concretas.

Ni los organismos de aplicación, ni las organizaciones sindicales y empresarias han desarrollado la importante función de información, difusión, y concientización de las ventajas que traería la prevención de la siniestralidad laboral para los trabajadores y las propias empresas.

El panorama general que ofrecen muchas empresas, permite señalar que muchas de ellas formulan expresas instrucciones a los responsables del servicio de higiene y seguridad del trabajo que deben limitarse a producir el mínimo de gastos posibles y, en otras, se rechaza sistemáticamente toda sugerencia o estudios que impliquen modificaciones sobre las instalaciones o de los propios procesos productivos por razones de higiene o seguridad en el trabajo, argumentando razones económico-financieras y los elevados costos que pudiera implicar.

Estas tendencias negativas se han visto revertidas en situaciones puntuales por sentencias judiciales adversas que hacían lugar a los reclamos de sus dependientes respaldados en el incumplimiento empresarial a las normativas de prevención.

El decreto 351/79 pone a cargo de los servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, la obligación de llevar un registro estadístico de los accidentes y enfermedades del trabajo (artículo 125) y no obstante que numerosas empresas cumplen con su obligación de presentar el informe anual estadístico, la autoridad de aplicación no ha dado a conocer los resultados o no los ha publicado lo suficiente para que puedan servir de orientación sobre los aspectos que se deben modificar para lograr una mayor prevención de los riesgos del trabajo.

Este proyecto es meramente declarativo en materia de prevención ya que sólo habla de la incorporación de un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad (artículo 1º, punto 2º).

Nos preguntamos cómo harán las PYMES para llevar a cabo ese plan de mejoramiento en las condiciones en que se encuentra el sector en la actualidad y sin líneas de crédito instrumentadas a tal fin.

La OIT tanto en el Código Internacional del Trabajo, como en los convenios y recomendaciones sobre la materia, propicia la adopción de sistemas de colaboración

entre empleadores y trabajadores, a fin de mejorar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Dichos sistemas podrían revestir la forma de comités de seguridad u otros organismos similares, creados dentro de cada empresa o establecimientos con más de 25 trabajadores, en los que participen representantes de los trabajadores y de los empleadores, con un reglamento que regule su funcionamiento y con la finalidad de mejorar la prevención. (Por nuestra parte, y desmintiendo aquello de que la oposición no tiene propuestas, presentamos con fecha 29-9-88 un detallado proyecto sobre comités mixtos que no mereció la atención de la mayoría.)

La suma que por incumplimiento debe abonar el empleador que no cumple las normativas de higiene y seguridad en el trabajo no tiene mecanismo de movilidad, máxime teniendo en cuenta que los precios al consumidor han sufrido, desde la implementación de la ley de convertibilidad, un aumento superior al 60 % (artículo 5º).

Las incapacidades derivadas de enfermedades contraladas a causa del trabajo, solamente se indemnizarán cuando la enfermedad estuviese consignada en la enumeración taxativa (cerrada) que establecerá el Poder Ejecutivo (artículo 6º, punto 2º).

Las incapacidades permanentes tendrán carácter provisorio durante los 36 meses siguientes a su declaración, y en caso de que lo requiera la aseguradora de riesgo del trabajo, este plazo podrá ampliarse por 24 meses más (artículo 9º, punto 1º). Durante tales lapsos la prestación a recibir por el trabajador accidentado se limitará a la proporción del grado de incapacidad, sobre el 70 % de su remuneración correspondiente al año anterior al accidente.

Se excluyen de la protección de esta ley las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral (artículo 6º, punto 3º).

El artículo 23 y concordantes del decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, establece la obligatoriedad de los exámenes médicos periódicos.

El preocupacional puede determinar que el empleador no incorpore al trabajador o que, como lo prevé el artículo 16, punto 2, lo obligue a pactar un salario inferior al correspondiente al puesto o categoría desempeñada aun cuando, por normas legales o convencionales, se impusiera el deber de no disminuir la remuneración.

Tampoco se menciona que, en el caso de no haberse realizado dicho examen preocupacional debería presumirse, salvo prueba en contrario, que la incapacidad del trabajo se produjo durante la relación de trabajo.

Se expresa que las prestaciones dinerarias que correspondan a los accidentes ocurridos en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo serán abonados por el sistema de seguridad social, dejando a la reglamentación la forma en que se podrá llevar a cabo (artículo 11, punto 3º).

Es de público conocimiento, y así lo han manifestado en reiteradas oportunidades distintos funcionarios del gobierno, que el nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), establecido por la ley 21.241,

tiene severas dificultades para cumplir con su cometido. Una prueba de ello es el decreto 2302/94 del Poder Ejecutivo, calificado de "necesidad y urgencia", y la ley de Solidaridad Previsional, e inclusive el cambio de las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones que se ha visto forzada a instrumentar en estos últimos meses la Secretaría de Seguridad Social (resolución 96/95).

En el artículo 13, punto 1, se manifiesta que las prestaciones dinerarias correspondientes a los primeros diez días estarán a cargo del empleador y las siguientes a cargo de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) la que, "en todo caso, asumirá las prestaciones en especie".

Según esta redacción, parecería que puede suplirse la prestación dineraria (y que reemplazará la falta de sueldo del trabajador) con la prestación en especie y, en este caso, se dejaría al trabajador y su familia sin posibilidades de cubrir las necesidades alimentarias y de subsistencia (excepto por sus ingresos por asignaciones familiares).

Las incapacidades más serias (20 % a 66 %) son "reparadas" mediante el pago de una renta periódica, de tan ínfimo valor, que no alcanza a compensar la disminución del salario referida en el artículo 14, inciso b).

El trabajador accidentado que vuelve al trabajo sufrirá una disminución en su retribución proporcional al grado de incapacidad que lo afecta (artículo 16, puntos 2 y 3).

La incapacidad total (superior al 66 %) o muerte del trabajador accidentado, se "repara" con el retiro por invalidez o pensión por fallecimiento, conforme al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (artículos 15 y 18).

Establece la obligación de las ART de hacerse cargo del capital complementario y del capital de recomposición correspondiente definido en la ley 24241 (artículos 92 y 94), o en su caso de una suma equivalente al régimen previsional al que estuviere afiliado el damnificado (artículo 15, punto 2), pero no menciona quién se hará responsable de esta obligación en el caso de quiebra o liquidación por insolvencia de las ART.

Se destaca que el capital complementario es la diferencia positiva entre el capital técnico necesario y el capital acumulado en la cuenta de capitalización individual del afiliado a una AFJP a la fecha del dictamen definitivo por invalidez o a la fecha de fallecimiento del causante.

Y, en cuanto al capital de recomposición, son los aportes destinados al sistema de capitalización que el afiliado con derecho a retiro por invalidez transitoria hubiera acumulado durante el período de percepción de la prestación en forma transitoria.

No merece menor importancia la suma que debe abonarse al sistema previsional de reparto estatal, ya que ella formará parte de los fondos que el Estado utilizará para abonar a los actuales jubilados y pensionados (idem artículo 18, punto 2).

Estimamos que, en el caso del trabajador inválido total, se debería abonar el total de las remuneraciones

y no sólo el 70 % del ingreso base salarial, siendo ínfimo el valor de 3 AMPOS (en la actualidad \$ 189) para que el trabajador denominado "gran inválido total" y que dependerá para vivir de la atención de otra persona para que pueda hacer frente a sus necesidades (artículo 17, punto 2).

### III

Entre las prestaciones en especie no se incluye la readaptación al trabajo o el transporte de los accidentados y enfermos para llevar a cabo la necesaria atención médica ni las prestaciones odontológicas. Tampoco se incluyen fondos para el financiamiento de la rehabilitación de los alcohólicos y otras patologías sociales que afectan la producción y el trabajo, ni las repatriaciones y mantenimiento de las prótesis y aparatos ortopédicos.

Tampoco establece la obligación de las ART de intimar al trabajador como paso previo a la suspensión de las prestaciones dinerarias.

En el artículo 21, punto 2, se establece que cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la ART y el damnificado o sus derechohabientes será resuelta únicamente por las Comisiones Médicas creadas por la ley 24241 (artículo 51).

Estas comisiones tendrán a su cargo la determinación de la incapacidad, pero también resolverán sobre aspectos legales, como la naturaleza laboral del accidente, el contenido de ciertas prestaciones en especie.

No debemos olvidar que la ley 24241 (artículo 49, punto 4) establece un procedimiento de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social para las resoluciones de la Comisión Médica Central, y que los honorarios y gastos que insume la apelación serán soportados por el recurrente vencido, lo cual llevará a no apeladas a los trabajadores o sus causahabientes temerosos de las posibles consecuencias adversas de los fallos.

Se establece que las prestaciones a cargo de las ART se financiarán con una cuota mensual a cargo del empleador (artículo 23, punto 1) pero no se fija el porcentaje, por ende los empleadores no tienen un costo cierto presupuestario, ni reglas claras del sistema de cotización.

Por otro lado, se manifiesta que para la determinación de la base imponible se aplicarán las reglas de la ley 24241 (artículo 99); esto significa que se reduce el aporte de contribución al importe máximo equivalente a 60 AMPOS (en la actualidad: \$ 3.780) tomando inciertas las posibilidades de financiación del sistema (artículo 23, punto 2).

El artículo 24 establece el régimen de alicuotas según la siniestralidad presente, efectiva y la permanencia del empleador en una misma ART.

Esto nos lleva a algunas reflexiones, tales como: en el caso de no existir estadísticas actualizadas de siniestros, cuál será el método empleado para fijar las alicuotas. ¿Y será un condicionante para que el empleador permanezca en la misma ART y entorpezca el cambio de la aseguradora?

El punto 4 del citado artículo menciona que la cuota del artículo 23 será fijada por establecimiento, sin aclarar el número o actividad que se tendrá en cuenta.

## IV

En cuanto a las ART, no se las obliga a contar un plantel completo de expertos en prevención y asegurarse que los empleadores notifiquen, en tiempo y forma, a sus trabajadores sobre los riesgos del trabajo y las medidas de prevención.

Se les exige un capital mínimo (\$ 1.000.000) para iniciar sus actividades cuando el capital y la garantía de las ART deben estar en relación directa a la cantidad de trabajadores asegurada y relacionada con la expectativa de desembolsos futuros.

No se les exige un mínimo de trabajadores afiliados para establecer una ART, ni cupos obligatorios de distribución de trabajadores afiliados. Por ejemplo, es necesario fijar una cantidad mínima de trabajadores de pequeñas empresas en conexión con un tamaño determinado que podría ser del orden mínimo del 15 % de la masa total. La ART debería incorporar el 15 % de trabajadores de empresas de 1 a 25 trabajadoras.

No se les exige dedicar un mínimo de los ingresos directos a la prevención de los riesgos del trabajo ni tampoco un gasto máximo en administración.

No se aclara si los empleadores autoasegurados deben contar con un dictamen de una calificadora de riesgo sobre su solvencia financiera.

## V

Sólo suprime para los trabajadores la acción civil por responsabilidad objetiva transformando al trabajador en un ciudadano de segunda clase, desprotegido por el Código Civil, configurando una afectación constitucional que lo coloca en inferioridad de condiciones respecto del resto de los habitantes de la Nación. Tal discriminación afecta los artículos 14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución Nacional y los convenios 42 y 121 y recomendaciones 20, 24, 97 y 121 de la OIT.

La ley no debería omitir la facultad del reclamo de la vía civil especialmente para darle un poder de conciliación a la ART para que sugieran a los empleadores sobre la conveniencia de realizar acciones preventivas.

Limita la acción judicial a la apelación ante la Cámara de Seguridad Social, reemplazando la invalorable jurisprudencia acumulada por la justicia laboral por la instancia administrativa de conciliación obligatoria.

En las disposiciones finales limita aún más el monto de las indemnizaciones a los trabajadores supeditando el pago total de las mismas, que puede llegar a prolongarse por 6 años, al cumplimiento de etapas, para las cuales no establece fechas fijas.

En la cláusula adicional 2ª modifica el pago del capital complementario a que se hace referencia en el artículo 15, apartado 2, y la suma equivalente de pago al sistema jubilatorio de reparto, sin que se explique claramente si se refiere en el último renglón (punto B) si el 25 % restante será entregado al afiliado o a sus causahabientes, cómo podrán éstos percibir el retiro por

invalidez o la pensión por fallecimiento que dispone el SIJP, ya que para ello resulta indispensable integrar el 100 % del capital complementario.

## VI

Creemos que los cambios operados en la economía argentina llevan a la necesidad de una adecuación de las relaciones laborales a las nuevas tecnologías de gestión y organización y a otras características del mercado del trabajo en el país.

Pero los cambios a realizarse deben ser efectuados en función de políticas de inversión y una real participación de los trabajadores en los procesos de trabajo.

Pensamos que está pendiente un debate serio y profundo, genuinamente científico, con relación a los cambios producidos en el universo productivo y su impacto en las relaciones de trabajo y las normas que la reglan.

Oportunamente insistimos para que se citara a las organizaciones de trabajadores, de empresarios y a los profesionales especializados, a exponer sobre el tema de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, sin resultado positivo. Se alegó que este proyecto de ley era el resultado de la discusión de las partes interesadas en el "Acuerdo Marco", cuando este acuerdo es la ratificación de los proyectos oficiales de desprotección laboral que se vienen profundizando desde hace tiempo y que están dirigidos a presionar institucionalmente al Poder Legislativo para hacerlo responsable ante la sociedad, en el caso de no aprobar los proyectos de ley que remite el Poder Ejecutivo, de las consecuencias negativas económicas y sociales, que son el resultado de las políticas oficiales y no de la falta de sanción de leyes que dejan sin efecto derechos elementales del trabajador.

Se propone un sistema de regulación de accidentes del trabajo que determina la abolición del derecho constitucional de obtener una adecuada reparación frente al daño injustamente sufrido por la víctima laboral.

Aunque nos acusen de obstruccionistas, no daremos nuestra aprobación a este proyecto de ley.

Como dijo Juan B. Justo, el socialismo es la lucha en la defensa y para la elevación del pueblo trabajador, que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana.

Nosotros, como socialistas, seguiremos oponiéndonos a proyectos que van en contra del hombre como trabajador, que anteponen la obtención de ganancia de ciertos sectores a la salud del trabajador.

La transformación económica, la organización política, son medios para alcanzar la elevación del hombre y no fines en sí mismas.

Guillermo E. Estévez Boero.

5

Buenos Aires, 20 de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

Los abajo firmantes, venimos a presentar observaciones al Orden del Día N° 1.242, impreso el día 9

de marzo de 1993, referido a la Ley sobre Accidentes de Trabajo. Creación (expediente 59-P.E.-1994) por entender que la misma es absolutamente falaz, y no está destinada a "prevenir" tal como versan los fundamentos, sino a permitir la disminución de las indemnizaciones y a hacer la vista gorda al incumplimiento de medidas referidas a higiene y seguridad laboral en empresas amparadas por el "plan de mejoramiento".

#### Antecedentes

El régimen legal especial, para reparar infortunios laborales, estaba regido por la ley 9.688 que data de 1915 y recogía la doctrina vigente en sus similares de Francia y España. Por el mismo, se estableció un sistema de responsabilidad individual del empleador, como alternativa, frente a la otra posibilidad que se basaba en sistemas basados en seguros sociales, contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, adoptados por otras legislaciones, otorgando indemnizaciones tarifadas de pago único.

Esta ley permitía al empleador cubrirse con un seguro facultativo y establecía además, un tope máximo (propio del régimen tarifario) y la opción del trabajador a la acción de derecho común.

En 1991, esta ley fue modificada por la ley 24.023 que conservó muchos de los anteriores principios, pero introdujo también muchas innovaciones, preparando el camino para esta etapa, de la misma manera que la Ley de Empleo (24.023) lo hizo con relación a la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744).

#### Necesidad del cambio

Como en tantas otras ocasiones, nos preguntamos cuál es la motivación para el cambio, y si la solución proporcionada, es adecuada para lo uno o lo otro. La respuesta que obtenemos es concluyente: ni es cierto el diagnóstico, ni es adecuado el instrumento. Pero lo más importante es destacar que esta ley está muy lejos de cumplir el declamado objetivo de prevenir los riesgos, por el contrario, interpretamos que juntamente con la "flexibilidad laboral" que ha sido introducida por el proyecto recientemente sancionado por diputados, ambas contribuirán a dejar al trabajador desamparado. La flexibilidad significará mayor cantidad de horas de trabajo, mayor agotamiento, y mayor siniestralidad; la ley de accidentes de trabajo, dejará muchas veces a los trabajadores sin cobertura, permitiendo que trabajen mientras la empresa se adapta al plan de mejoramiento, que permitirá que los trabajadores lo hagan en condiciones no recomendables.

Pero acá, el verdadero desamparo de los trabajadores, no es generado por esta ley en sí —que no es tan mala como la que crea el sistema—, sino, fundamentalmente, por tres razones:

1. El probable aumento de la siniestralidad, que se produciría como consecuencia del incremento de los horarios de trabajo por aplicación de las normas que permiten la "flexibilidad laboral".

2. La posibilidad que una empresa a la que se le admita autoasegurarse, entre en estado de insolvencia y deje a los trabajadores sin cobertura.

3. La inexplicable "necesidad" de tener que crear un nuevo tipo de sociedad (las ART) con posibilidad de prestar o subcontratar los servicios con terceros, que de quebrar dejarían a los trabajadores sin la debida cobertura.

Aclaramos que el MODIN, no se opone al sistema donde aseguradoras privadas, participen en la cobertura de riesgos vinculados a la siniestralidad laboral, sino a los defectos instrumentales que tiene este proyecto que vuelve a ser un parche temporario, como todas las normas que el Poder Ejecutivo, ha obtenido del Congreso, negociando en pasillos o utilizando otro tipo de "artillería".

Lo primero que queremos advertir, es que esta ley, podrá en algunos casos ayudar a reparar los daños producidos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales —artículo 2º, inciso b)—, pero es absolutamente falaz y declamativa cuando dice que la misma tiene como objetivos:

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo;

b) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados;

c) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Y decimos que estos objetivos no son ciertos, porque la ley no puede ser analizada si no es dentro del contexto normativo junto con el cual le tocará entrar en vigencia, y dentro de la realidad a la cual deberá aplicarse.

La interpretación armónica del artículo 15 del precepto nacional, del título III del Estatuto para las PYMES y de varios proyectos recientes, con la consiguiente posibilidad de negociar "hacia abajo", aumentando horas de trabajo, posponiendo vacaciones, aceptando condiciones de falta de higiene y seguridad en los períodos de adaptación de la empresa, llevarán a que el trabajador tenga que desempeñar su tarea bajo condiciones de estrés negativo. Esta situación funcionará como factor de aumento de la siniestralidad por las siguientes razones:

1. Porque el trabajador deberá seguir trabajando aun en condiciones de agotamiento y por lo tanto ya no podrá hacerlo con la atención y los reflejos óptimos, y, en algunos casos, ni siquiera los necesarios.

2. Porque el trabajador vivirá angustiado: no sólo no se realizará por el trabajo, además la situación económica, la cantidad de horas trabajadas, el miedo a perder el trabajo frente a la disminución de las fuentes de empleo, las dificultades para la reinserción, todo ello, lo tornará un ser mucho más vulnerable a las enfermedades, pues es un hecho demostrado que las afecciones del psiquismo, disminuyen las defensas del organismo.

Esta ley, que viene a marcar el fin de una transición anunciada, tal es la del sistema de responsabilidad individual del empleador, implica la consagración de

un sistema de reparación colectivo trasladando las técnicas de protección al sector privado, pero que paradójicamente, no queda desprovista de la finalidad motora de dicha actividad. El fin de lucro, será de ahora en más el que determinará la compensación que a los argentinos les corresponda tanto frente a un accidente, como frente a una enfermedad inculpable, en materia laboral.

Este modelo, está muy lejos de tener como finalidad la preservación de la salud del trabajador porque, como casi todos los proyectos del grupo gobernante, sólo se tienen en cuenta principios economicistas. En este caso, como en la Ley Previsional, la Ley de PYMES, las leyes de vivienda, se sigue soslayando el que debería ser el principio más importante: que las leyes deben estar al servicio de todos los hombres, y no de unos pocos.

Hacemos notar que el Sistema Privado de Salud lleva ya muchos años de aplicación en Chile y que se consolidó allí en 1993, cuando se le da el marco global de Sistema Privado de Salud, y se crea el ISAPRE (Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional). Bajo este marco, se formaron asociaciones de empleadores sin fines de lucro, y surgieron las mutualidades que pasaron a administrar los recursos para el financiamiento previsional de la salud.

El proyecto argentino fija como intencionalidad:

- a) Prevención de riesgos;
- b) Reparación de daños;
- c) Rehabilitación psicológica.

Pero, lo cierto es que el proyecto, solamente cumple con el punto b) con lo cual en la mayoría de los casos, los puntos a) y c) quedarán convertidos en mero voluntarismo declamativo.

Este proyecto, que ha sido modificado por la Comisión es el resultado del "Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social" suscripto por el gobierno, y asociaciones de empleadores y trabajadores el 25 de julio de 1994 y tiene como aspectos esenciales:

1. *Contingencias cubiertas*: riesgos del trabajo accidentes de trabajo y/o enfermedad laboral.

2. *Definición de accidente de trabajo*: remisión a un listado de enfermedades identificadas en la reglamentación que será actualizada con una periodicidad no mayor de 12 meses.

3. *Tabla de incapacidades laborales*: la elaborará una comisión tripartita, del sector compatibilizarse con lo que prescribe la Ley 24.241.

4. *Gestión*: a cargo de las llamadas Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART), entidades de derecho privado que reúnan los requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión, recursos humanos establecidos por ley, cumplimiento y adecuación a la ley 23.091 y normas que dicte la Superintendencia del Sistema y la Superintendencia de Seguros de la Nación.

5. *Seguro obligatorio*: el empleador deberá afiliarse obligatoriamente a alguna de las ART. Salvo que los empleadores opten por autosegurar los riesgos del trabajo siempre y cuando acrediten periódicamente los requisitos de solvencia económico financiera para afrontar

las prestaciones de esta ley, y garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones médicas y las demás previstas en el artículo 20 del proyecto en debate.

8. *Prestaciones*: de pago único en caso de incapacidad laboral permanente parcial definitiva igual o inferior al 40 %. Cuando fuere superior a ese porcentaje hasta el 60 % dará lugar a una renta mensual hasta acceder a la jubilación ordinaria y el pago a las AFJP del capital complementario previsto en la ley 24.241, artículo 93.

En algunos casos como medicamentos, prótesis, etcétera, puede entregarse directamente el elemento necesitado.

En este proyecto, también observamos que el Poder Ejecutivo, vuelve a pedirle al Congreso facultades ilegales, como por ejemplo que sea ese organismo el que decida, si los trabajadores domésticos, los trabajadores autónomos, los vinculados por relaciones no laborales y los hombres voluntarios, sean o no incluidos en el sistema. Pensamos que ésta es una decisión del Congreso Nacional, y que en muchos casos se estaría invadiendo el poder de policía de las provincias. *Autoseguro* (artículo 3.2.)

Con relación a los casos de autoseguro, también queremos expresar nuestra preocupación, dado que si tal como lo dice el ministro de Economía vivimos en una situación de estabilidad definitiva, entendemos que debieron haberse fijado valores más precisos con relación a la forma de acreditar la solvencia económica financiera y a la forma de garantizar los servicios necesarios.

#### *Obligaciones de las partes*

El artículo 4º permite que por vía de una ficción jurídica, se obligue a los empleados a trabajar en lugares donde no se cumplen las medidas de seguridad e higiene, bajo la ficción de "Plan de Mejoramiento" que sería un instrumento donde el empleador se compromete a "adecuar a la normativa vigente" y se le fijan los plazos de ejecución. Lo que no dice es qué sucede si el accidente se produce mientras la empresa "se adecua a la normativa vigente".

Y para coronar la hipocresía, este artículo establece que mientras el empleador esté ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Parecería que este artículo quita las atribuciones otorgadas al Poder de Policía Provincial, lo que significa un nuevo menoscabo del federalismo.

#### *En tal caso, descuentos*

No es buena la definición contenida en el capítulo IV, y la remisión al AMPO, no nos parece afortunada.

#### *Comisiones médicas*

Entendemos que debieron precisarse más datos, y que debido a las características de los accidentes de trabajo, sería fundamental instrumentar un mecanismo,

que acelere el procedimiento y no entorpezca la liquidación y/o la prestación del servicio. No cuestionamos la institución, sino la falta de parámetros para la instrumentación.

#### Situaciones especiales

El artículo 45 que delega al Poder Ejecutivo el dictado de normas referidas a: a) Pluriempleo; b) relaciones laborales de duración determinada y a tiempo parcial; c) sucesión de siniestros; d) trabajador jubilado o con jubilación postergada, nos parece un exceso que excede las facultades contenidas por el artículo 76 de la Constitución Nacional.

#### Disposiciones generales

Advertimos que la sustitución que se hace del artículo 75 anterior por el que se pretende, no es precisamente para que el empleador cumpla las normas de seguridad e higiene, sino para permitirle escapar a las multas y sanciones, lo que se logra por remisión al "ordenamiento legal" (concepto amplio).

Por último queremos dejar constancia que nos parece adocenado el Sistema de Seguro Social, y que muchos de los puntos de la ley nos parecen un avance positivo, lamentablemente, la necesidad de encontrar soluciones cortoplacistas vuelve a malograr el intento, y lo que pudo ser la mejor solución posible para el tema, se ha convertido en un nuevo parche, y por eso anticipamos que la misma necesitará ser modificada en poco tiempo.

En conclusión, nuestras divergencias se resumen en los siguientes puntos:

1. No estamos de acuerdo en la forma en que son creadas las ART, como compañías distintas de las compañías de seguros actualmente existentes. Lo fundamental de nuestra disidencia es que no estamos de acuerdo que éstas puedan tener fin de lucro. En este punto ponemos de manifiesto, que se han tomado muchas cosas del modelo chileno, pero hay una diferencia que cambia sustancialmente el espíritu del proyecto. En Chile la seguridad social está a cargo de asociaciones privadas que nuclean empleadores, pero bajo la forma de mutualidades es decir que no pueden tener fin de lucro.

2. La obligación de las pequeñas y medianas empresas que no lleguen a alcanzar los requisitos para asegurarse, tendrán un aumento en los costos fijos. Esto tiene un importante agravante, en momentos donde muchas de ellas se encuentran endeudadas y en la medida que las cuotas impagas, podrán ser ejecutadas por las ART por la vía del apremio.

3. Nos parece que no es justo trasladar el "riesgo empresario" al trabajador. Pensamos que en última instancia y agotadas otras vías debe subsistir la responsabilidad del empleador, incluso, mientras no interviene la obra social o la ART, debe adelantar los fondos necesarios, cuando se trate de una emergencia.

4. No nos conforma la metodología para calcular las indemnizaciones tan atadas al AMPO.

5. Hay demasiada delegación legislativa, que acercaría la actuación de este cuerpo, a la concesión prohibida

por el artículo 29 de la Constitución Nacional, excediendo lo expresamente reglado por el artículo 76 de la Constitución Nacional.

6. En realidad no hemos adoptado un sistema de seguridad social, sino un sistema mixto, en la medida que el autoseguro, deja subsistentes muchos principios correspondientes al seguro de responsabilidad individual, y sometidos a los trabajadores a los caprichos de sus empleadores que decidan la manera conforme la cual prestan el servicio.

7. Afectación de las bases del federalismo: dado que el Poder Ejecutivo nacional, podría por medio de la autorización de los planes de mejoramiento, impedir que las provincias ejerzan sus facultades en materia de poder de policía con relación a medidas de seguridad e higiene.

Guillermo G. Fernández Gál.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Antes de otorgar la palabra al primer orador, la Presidencia desea que se fije una hora tentativa para la votación en general. Se encuentran anotados para hacer uso de la palabra los señores diputados Borda, Alcides López, Estevez Boero, Solanas, Nieva, Zuccardi, Armendáriz, Di Tulio, Novau, Gazia, Maidana, Polino, Rico, Jesús Rodríguez, D'Ambrosio, Kammerath y Digón.

Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: propongo que se vote en general a la hora 22.

Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en consecuencia.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Borda. — Señor presidente: a principios de siglo se diseñó en nuestro país un instrumento jurídico para regular los accidentes de trabajo, creado bajo un concepto inspirado en la idoneidad y con el objetivo de reparar los infortunios laborales. Me refiero a la ley 9.688, sancionada en 1915.

Han pasado ochenta años desde su entrada en vigencia y han sido muchas las modificaciones que se han operado en el campo del trabajo. Se ha alcanzado un punto en el que el sistema de protección de los trabajadores se encuentra distorsionado frente a los riesgos laborales y la reparación de los daños producidos por ellos, lo que incrementa el costo laboral y ge-

nera un serio obstáculo para el aumento de los empleos productivos.

La ley 24.028, sancionada en 1991, y su decreto reglamentario —1.279/92—, constituyen el último intento por preservar el modelo diseñado en 1915 con la ley citada. Así se trataban de corregir los problemas más graves que evidenciaba la aplicación de aquella norma.

Han pasado tres años desde que se puso en vigencia esta nueva ley y nos hemos encontrado con que, sin desmedro de la calidad de la norma, falla el sistema de cobertura en su conjunto, llegándose a la conclusión de que el actual mecanismo de reparación para los accidentes de trabajo es insatisfactorio para los actores sociales involucrados.

Esta razón es la que inspira la idea de concretar una norma clara, abarcativa y rigurosamente aplicable, que denominamos "ley sobre riesgos del trabajo" y cuyos objetivos son muy claros. Ellos consisten en: reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos del trabajo" y cuyos objetivos son muy derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales —claramente explicitadas— incluyendo la rehabilitación de los trabajadores damnificados; promover la recalificación y la recolocación de éstos, y la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

Estos cuatro aspectos que acabo de enunciar son elementos indispensables para superar los defectos que exhibe el sistema actual estructurado sobre la base de un régimen de indemnizaciones tarifadas y limitadas que son percibidas por un pago único por parte del trabajador y que en general no guardan relación con la pérdida real del ingreso ocurrida como consecuencia del infortunio.

Reconozcamos que de la misma manera que hoy no existen estímulos para la prevención de los siniestros, tampoco los hay para el pago espontáneo de las indemnizaciones, lo que se traduce en una frecuente postergación de la percepción de las prestaciones reparatorias por el damnificado, las cuales, una vez pagadas, llegan reducidas por los honorarios profesionales. En síntesis, debemos reconocer que se cobra tarde, mal y poco. Mientras el accidentado espera desesperado entre el drama económico y moral emergente del accidente, o los deudos tienen que empeñarse en rehacer sus vidas a toda velocidad, el resarcimiento se hace esperar, supeditado a la lentitud del juicio.

La ley 24.028 redujo los índices de litigiosidad, pero reconocemos que aún se encuentran en niveles inaceptables, lo cual se debe a la

imperfecta descripción de los presupuestos de responsabilidad, agravada por una interpretación amplia de ésta en los tribunales, lo que genera un incremento en los costos laborales sin que ello suponga la mejora de la protección de los trabajadores.

Digamos que frente al accidentado se genera una industria que castiga al empleador declarado responsable, se beneficia con el damnificado y da lugar a un sistema que hasta la fecha ha demostrado su incapacidad de brindar una cobertura integral mediante la contratación de un seguro privado y cuya dinámica dista muchísimo de ser la adecuada. Esto es especialmente así en un país que pretende modernizarse dentro de una filosofía de justicia y de equidad en la cual no existan las abstracciones en lo referente a la responsabilidad de todos los que integran este mecanismo complejo de las relaciones laborales.

En esta inteligencia, los actores sociales y el gobierno nacional decidieron con fecha 25 de julio de 1994, dentro del Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, reformar integral y sustancialmente el sistema, enviando el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional un proyecto de ley para la regulación de los riesgos y la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo. En base a dicho proyecto las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, luego de consultar a los sectores involucrados, han elaborado este régimen que apunta, sintéticamente, a integrar la prevención de los riesgos del trabajo con la reparación de sus consecuencias dañosas y con la atenuación de éstas por vía de la rehabilitación, la recapacitación y la reinserción laboral, tal cual he expresado al comienzo de esta exposición.

Antes de entrar a analizar las características de este proyecto, insisto en recalcar que hoy el trabajador percibe como máximo 55 mil pesos de indemnización en forma proporcional a la incapacidad que presente, y que de ello deberá deducirse un 20 por ciento como mínimo en concepto de honorarios a letrados. También debe apuntarse que la factibilidad del cobro de la indemnización depende de la solvencia de la compañía de seguros o del empleador, algo verdaderamente riesgoso en tiempos de crisis, y que un juicio dura cuatro años promedio y se cobra si hay solvencia empresarial o de la aseguradora.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.



**Sr. Borda.** — La iniciativa que proponemos está dirigida especialmente a los trabajadores dependientes y a los empleadores públicos y privados. En este ámbito de aplicación se podrá incluir a los trabajadores domésticos y autónomos, a relaciones no laborales y a bomberos voluntarios.

Definimos claramente la distinción entre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siguiéndose las normas internacionales del trabajo; y para evitar la litigiosidad que se origina en la caracterización de una dolencia, se deja en manos de las comisiones médicas del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, la evaluación correspondiente.

Este proyecto de ley prevé prestaciones en dinero y en atenciones médicas integrales tendientes a lograr una verdadera reparación del trabajador y su inclusión en un programa de recalificación profesional, ya que el abandono de la vida laboral —cuando puede evitarse— coloca al individuo en un punto de no retorno moral de graves consecuencias.

Dentro del espíritu protector del salario emergente de la ley 9.688, y siguiendo también los lineamientos del derecho comparado y de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, damos preferencia a los pagos periódicos, dejando las sumas globales o indemnizaciones para los supuestos de resarcimientos menores.

De esta manera, ante un caso de incapacidad evaluada entre un 21 a un 65 por ciento, se asignará al trabajador una renta vitalicia consistente en un 70 por ciento de su sueldo actual por el porcentual de incapacidad más las asignaciones familiares, que contará con una reglamentación clara y estricta.

Cuando se trate de una incapacidad superior al 66 por ciento o la propia muerte del trabajador, se pagará entonces al damnificado o a sus causahabientes, de por vida, un 70 por ciento del sueldo más la indemnización prevista en la ley 24.028, pero esta última percibida en forma de renta igualmente vitalicia.

En todos los casos existe un elemento fundamental: el pago será automático.

Además vinculamos las prestaciones de larga duración con el sistema previsional para evitar superposiciones y duplicaciones eventuales.

La financiación del sistema se realizará a través de un aporte del empleador cuyo monto se fijará sobre la base de su siniestralidad real y presunta y de su permanencia en el ente de la gestión, y que estará a cargo de aseguradoras

de riesgos del trabajo, a las que deberán afiliarse y cotizar obligatoriamente los empleadores, con excepción de aquellos que por el nivel de solvencia previsto en la reglamentación puedan operar bajo un régimen de autoseguro.

La omisión de afiliación general es responsabilidad directa del empleador frente al trabajador, y la eventual insuficiencia patrimonial de aquel es cubierta con un fondo de garantía que también creamos con esta ley. También se establece una pena de prisión de 2 a 6 años para el obligado que no diese cumplimiento a las prestaciones prescriptas o que no aportara a los fondos que esta misma ley crea.

La supervisión y el control del sistema quedará a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el marco de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tendrá las funciones y atribuciones que hoy corresponden a la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, en razón de la necesaria vinculación del nuevo sistema en cumplimiento con las normas de seguridad e higiene.

En aras de reflejar el origen consensuado de esta ley, se propone la creación de un comité consultivo permanente, integrado por representantes de los actores sociales y del gobierno, cuyos dictámenes y opiniones serán de alto valor de consulta para las autoridades de aplicación.

La ley que proponemos supera a nuestro criterio, el trabajo de transición que derivó en la ley 24.028. Debemos asumir que la dinámica de las relaciones laborales se ajusta a las constantes modificaciones económicas, lo que genera cambios que no se pueden soslayar y que en ningún momento desvinculamos del criterio de protección emergente de ese gran instrumento jurídico que fue la primigenia ley 9.688, redactada con la sabiduría de los legisladores que nos precedieron, en un tiempo en que en la Argentina todo estaba por construirse.

Hoy vivimos otra dinámica en el trabajo y en ella nos desenvolvemos. La dureza del infortunio laboral debe ser tratada criteriosamente, pero salvaguardando la integridad moral del damnificado, apuntando a su reinscripción al mundo del trabajo y colaborando como legisladores para que el resarcimiento económico no sea pan para hoy y hambre para mañana, sino un sistema de pago vitalicio que lo sostenga de por vida luego de una pérdida irreparable en su plena capacidad laboral.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

**Sr. López (A. H.).** — Señor presidente: llegamos al recinto con este proyecto luego de un

trámite realmente accidentado, no sólo en la Comisión de Legislación del Trabajo, sino también en el cumplimiento del acuerdo marco al que ha hecho referencia el señor diputado Borda en su exposición.

Debo señalar que no es cierto que este proyecto llegue a este recinto consensuado; ni siquiera fue consensuado por los firmantes del acuerdo marco, ya que la UIA públicamente anunció su separación señalando que esta norma en lugar de reducir los costos laborales los iba a incrementar.

Por otra parte, no es cierto que en la Comisión de Legislación del Trabajo hayan sido escuchados la totalidad de los actores sociales. La Asociación de Abogados Laboralistas, el AITA, el CTA y las compañías de seguros fueron invitados a la Comisión de Legislación del Trabajo pero se negó a los diputados de la oposición el derecho indiscutible de escuchar sus opiniones. La reunión de esa comisión en la que se aprobó el dictamen terminó prácticamente en un escándalo cuando los actores sociales se levantaron y lo mismo tuvo que hacer la bancada radical acompañada por el resto de las bancadas opositoras.

En esta norma se propone un cambio sustancial en el sistema de reparación de los infortunios del trabajo; se plantea aquí un cambio integral y profundo pero, a nuestro criterio, con mucho de voluntarismo. Esto lo explicaré en el transcurso de mi exposición y seguramente también lo harán miembros de otras bancadas al referirse a este problema.

Comenzaré por señalar que el proyecto presenta inconvenientes de fondo constitucional, ya que en algunos aspectos afecta prescripciones establecidas por nuestra Constitución Nacional. Ello ocurre cuando se pretende regular el empleo público en las provincias y en los municipios de su dependencia avanzando sobre las facultades autonómicas de las jurisdicciones provinciales. En este sentido, no es feliz el ámbito de aplicación definido en el proyecto. En normas anteriores en las que se legisó sobre el empleo público se lo hizo en la subduría y el entendimiento de que se trataba exclusivamente del empleo público nacional. Esta es la primera observación en cuanto a la constitucionalidad de este proyecto.

Por otra parte, también se afecta la garantía constitucional referida a los derechos de igualdad ante la ley, ya que la privación de la acción civil al trabajador accidentado lo coloca

en un marco de evidente y notoria desigualdad frente al conjunto de los ciudadanos de la República.

Me permitirá tomar un ejemplo utilizado por un miembro de la bancada Justicialista —el diputado Brunelli— quien en las observaciones que están sobre los pupitres de los legisladores, señala que si a un constructor se le cae un andamio encima y ello le ocasiona un grave daño a su salud —supongamos una incapacidad total y permanente—, tiene derecho a una indemnización y, además, al cobro de un retiro si está afiliado a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, es decir, un retiro anticipado por incapacidad.

Ahora bien, si ese andamio en vez de caerle a un tercero le cae a un trabajador, éste sólo tendrá derecho al retiro de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones y carecerá del derecho de indemnización. Es decir, que por esta ley se priva —hay que decirlo con toda claridad— de toda indemnización a los trabajadores, excepto para las incapacidades menores del 20 por ciento, y se los pretende pasar a un sistema que calificamos de voluntarista, de cobertura de su incapacidad por prestaciones periódicas a cargo del sistema de seguridad social.

La discriminación se hace notoria en el tema de las incapacidades por accidentes de trabajo. En esos casos el incapacitado que vuelve a su trabajo tiene derecho a la misma remuneración que percibía antes de ser afectado por el accidente de trabajo. Por esta norma va a tener que pactar con su empleador —que está en una condición de superioridad económica financiera y de solvencia, lo cual demuestra que no es cierto el principio de igualdad para contratar— una remuneración inferior para desempeñar las tareas que realizaba antes. Es cierto que va a cobrar la misma remuneración, pero por dos vías diferentes: una, el sistema de renta periódica que estará a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo, y la otra, la remuneración disminuida de acuerdo con la incapacidad, que le va a pagar el patrón.

El incapacitado carece del derecho de indemnización y eso es discriminatorio respecto de los hombres sanos que trabajan en iguales tareas. La delegación que hace la ley en el tema de los accidentes *in itinere*, en el pluriempleo, en los jubilados empleados y en los trabajadores temporarios para que el derecho a la renta periódica, o a la indemnización sea reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional implica una grave cesión de facultades legislativas que nosotros creemos inadecuada porque no se ajusta a nues-

tro derecho constitucional. Por ello tenemos fundamentales observaciones que hacer, lo que nos llevará indudablemente a votar negativamente en general el despacho de mayoría.

El establecimiento de un monopolio en la cobertura de los riesgos de trabajo en manos de las aseguradoras de riesgo del trabajo ha sido objetado principalmente por las compañías aseguradoras, que tienen una larga experiencia —ochenta años, según lo señaló el miembro informante de la mayoría— en esta materia, la que será desechada por un sistema novedoso que apunta a tratar de crear un mercado de capitales que juegue en la Bolsa, como se hizo con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; un sistema que les garantice un lugar importante a las aseguradoras de riesgo del trabajo y les evite los riesgos de los accidentes *in itinere*, de los jubilados y de los empleados periódicos, que pasarán a ser soportados por el propio sistema de jubilaciones y pensiones, que según el Poder Ejecutivo está en grave quiebra.

Este monopolio de las aseguradoras de riesgo del trabajo que van a estar obligadas a cubrir solamente riesgos del trabajo hace pensar que la ecuación económico financiera que tradicionalmente se ha tenido en cuenta en materia de seguros para evaluar la solvencia de las compañías correrá un grave riesgo, que puede llevar a la insolvencia a estas nuevas creaciones que prevé la norma.

Como todos sabemos, las siniestralidades de distintos eventos permiten que se recaude por distintos riesgos cubiertos por las compañías aseguradoras para formar sus fondos de reserva. Si muchas veces no han sido capaces de afrontar los riesgos del trabajo no obstante tener la posibilidad de cubrir esos infortunios con recaudaciones provenientes de la cobertura de otros sectores como los de accidentes de tránsito, de vida, de buques, de aeronaves, etcétera, es decir, con el cubrimiento de un espectro muy amplio, ¿cuál será la ecuación económico financiera que deberán presentar esas aseguradoras de riesgo del trabajo?

Tanto es así que la propia ley, luego de definir todo un sistema de rentas periódicas apunta finalmente a que dicho sistema sólo entrará en vigencia seis años después de sancionada la norma y seis años después de definidas las tablas de incapacidad de la Comisión Tripartita Permanente. También dice que esas rentas o prestaciones van a ser disminuidas por ese sistema transitorio que está oculto en los últimos artículos de la iniciativa. Digamos que, prácticamente, se priva del derecho al servicio de justicia a los trabajadores, sobre todo a los del interior.

El sistema de procedimiento de reclamos propuesto señala que, luego de efectuada la denuncia de incapacidad, queda en manos de la comisión regional asesora médica toda decisión. Esto implica que la comisión médica creada al efecto deberá evaluar no solamente cuestiones de salud o incapacidad de los asegurados sino también cuestiones jurídicas, cual es la naturaleza laboral o no del accidente.

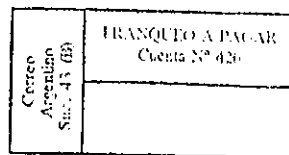
El reclamo que deberá hacer un trabajador de cualquier provincia lo obligará a dirigirse desde su domicilio a la capital de ese Estado, donde seguramente estará la comisión médica que lo evaluará. Esto implicará que el afectado en algunos casos tendrá que recorrer más de 300 kilómetros para llegar a la comisión médica que evaluará su incapacidad y la naturaleza de su afección o daño. Pero si existen diferencias con la comisión médica tendrá que venir a la Capital Federal y dirigirse a la comisión médica central para efectuar el reclamo.

Si tampoco existiera acuerdo deberá recurrir a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, órgano que está recargado de trabajo, con grandes atrasos y serias deficiencias que fueron reconocidas por los propios camaristas. Esto implicará un encarecimiento del costo laboral, sobre todo en cabeza del trabajador, lo que en la práctica le imposibilitará acceder al servicio de justicia.

La eliminación de la responsabilidad contractual del empleador cuando deje de cumplir con las normas de higiene y seguridad que obligatoriamente le impone la ley para su empresa —en este caso el empleador puede accionar contra su empleador— constituye también una desigualdad ante la ley.

El listado de enfermedades profesionales excluyentes que va a efectuar la Comisión Tripartita Permanente y que va a ser avalado en definitiva por el Poder Ejecutivo nacional —por el cual habrá enfermedades respecto de las cuales no se podrá probar que han sido contraídas exclusivamente debido al medio ambiente donde se desarrolla la tarea o precisar la forma en que se afecta la salud del trabajador—, implica un grave retroceso en cuanto a derechos oportunamente concedidos.

Hablemos ahora de la acción civil. ¿Qué casualidad! Cuando el daño es causado por un tercero —en ocasión del trabajo o en virtud del horario del trabajador y de su tarea—, ahí sí nace la acción civil, pero en cabeza de la aseguradora de riesgo del trabajo, que puede subrogarse en los derechos del damnificado. Es decir que el trabajador dañado por un tercero en su



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

14ª REUNION — 4ª SESION ORDINARIA

JUNIO 14 Y 15 DE 1995

---

SEGUNDA PARTE

trabajo recibirá exclusivamente la prestación de renta periódica, pero el asegurador de riesgo va a poder subrogar los derechos del trabajador y accionar contra el tercero por la cobertura integral del daño de salud causado al trabajador. Esto nos hace ver con nitidez la notoria diferencia que establece el proyecto de ley que perjudica los derechos de los trabajadores.

Las perlas de esta iniciativa son quizás sus últimos artículos, donde se define el procedimiento conciliatorio. Ha sido suprimido el procedimiento que había propuesto el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

Se dice que antes de efectuar cualquier tipo de acción, el trabajador deberá someterse a las disposiciones del nuevo artículo 15 de la ley 24.088, que establece un procedimiento conciliatorio ante la autoridad administrativa del trabajo. Esto se determina en la disposición adicional cuarta. ¡Pero qué casualidad! El punto 3 de la disposición final tercera, dice: "A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la ley 24.028, sus normas complementarias y reglamentarias y toda otra norma que se oponga a la presente. De esa manera, el texto legal entra en una grave contradicción, pues establece un procedimiento conciliatorio sobre la base de una ley cuya derogación determina.

Destacamos una vez más que la iniciativa en discusión se debate dentro del marco de aceptación de que en la Argentina el desempleo ha crecido más del 14 por ciento; así lo manifestó el señor ministro Caro Figuerola al ser entrevistado en el día de ayer, precisamente respecto de este tema. Este proyecto de ley se discute en momentos en que el sistema judicial del trabajo está en grave crisis; cuando la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, dadas las fuertes insuficiencias para mantener sus equilibrios comerciales, se ven obligadas al cierre permanente.

En tal sentido, se registran índices que escapan a toda razonabilidad en el marco tanto de la economía argentina anterior como de la economía comparada. Así, se propone un sistema que ha sido atacado nada menos que por organizaciones empresarias que han constituido el acuerdo marco, pues dicen que se van a encarecer los costos laborales. Conforme creo haberlo dicho, seguramente se van a encarecer los costos judiciales del reclamo de los trabajadores, que son los que menos tienen para reclamar en este sistema.

Por lo expuesto, entendemos que el dictamen en consideración no merece el voto afirmativo en general por parte del bloque radical, y así lo

expresaremos en el momento de la votación. Sin perjuicio de ello, en caso de que el proyecto sea aprobado en general por la voluntad del oficialismo, que tendrá que asumir la responsabilidad de la norma que se sancione —seguramente la verá fracasar—, propondremos durante el tratamiento en particular algunas mejoras que consideramos necesarias. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Estévez Boero.** — Señor presidente: estamos ante una nueva iniciativa originada en la filosofía del equipo económico de rebajar el costo argentino, pero ello, siempre a expensas de los derechos de los trabajadores.

Como sabemos, a principios de siglo los legisladores socialistas desempeñaron un rol protagónico en la concreción de las primeras leyes protectoras del trabajo y reparadoras de los daños producidos a raíz de accidentes ocasionados en el momento de la prestación del servicio. Durante la vigencia de esas leyes y del derecho laboral, y con una justicia del trabajo funcionando a pleno, el país registró los mayores índices de ocupación y de trabajadores en relación de dependencia. Aquí se pretende convencer a la población, e incluso a los propios trabajadores, de que el fenómeno de la desocupación se debe a la existencia de normas de derecho laboral, especialmente de normas protectoras de los trabajadores, como la ley de accidentes de trabajo. Esto no es así.

Lo que se aplica hoy es una nueva filosofía, es una nueva jerarquización y valoración de las relaciones sociales; se apuesta al triunfo de un modelo de exclusión y de una sociedad que posibilita la concentración de la riqueza y la pauperización creciente de las mayorías del país.

Introducidos en el fanatismo de la religión del mercado, se considera que todo límite o toda regulación de los derechos del capital constituye una traba para el desarrollo del país. Así hemos concluido en la recesión que ha reconocido el propio ministro de Economía y que siempre se endilga a la responsabilidad de los legisladores, porque desde los diversos bloques no hemos facilitado arrasar urgentemente con todo tipo de legislación social.

Hoy nos encontramos ante un nuevo proyecto que tiende a reducir los costos de las empresas y que se edifica a través de nuevas desigualdades: por ejemplo, la obligación de asegurarse en una aseguradora de riesgo del trabajo rige únicamente para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas podrán cons-

trín su propio fondo de autoseguro, que todos sabemos que resulta mucho más económico que aportar a la aseguradora. Este beneficio, en desmedro de la pequeña y mediana empresa, lo obtendrán las grandes empresas, que también lo van a emplear para concretar estas indemnizaciones, desde ya sumamente reducidas en el texto de la ley, y sujetas a todos los manejos y dilaciones que desde siempre se aplicaron en perjuicio del trabajador.

También queda una expresión totalmente voluntarista en relación con los accidentes del servicio doméstico, de los autónomos, y de los trabajadores que no están en relación de dependencia. En el capítulo II se habla en forma voluntarista porque se dice que las empresas deben "adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo".

Todos sabemos que en el país, salvo raras excepciones, no se cumple con la ley 19.587 y su decreto reglamentario de 1979, referida a la seguridad e higiene del trabajo. También sabemos que no ha sido un objetivo de las autoridades de aplicación velar por esta norma. Los organismos de aplicación difundieron ante los trabajadores las ventajas que traería la prevención de la siniestralidad laboral. Existe la obligación legal de llevar estadísticas de los siniestros y de sus causas; estadísticas que reclamamos al ministro del área cuando estuvo en la Comisión de Legislación del Trabajo, y estadísticas que deberían servir como base científica y objetiva para introducir mejoras en la nueva legislación. Pero estas estadísticas no aparecen en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

Permanentemente la OIT ha llamado a la concertación entre empresarios y trabajadores para mejorar las condiciones de trabajo. También ha llamado a la concreción de comités mixtos para afianzar la higiene y la seguridad en el trabajo.

Por nuestra parte, hemos presentado un proyecto de ley sumamente detallado con relación a estos comités mixtos —el 28 de septiembre de 1988—, que nunca mereció la atención del oficialismo que hoy dice estar preocupado por el problema de los accidentes de trabajo, cuando en realidad está preocupado por desbrozar el camino del gran capital frente a las obligaciones laborales.

En una apretada síntesis queremos analizar los cambios que se han producido. Se ha producido un cambio de concepto en el aspecto social con respecto a la reparación de los daños emergentes de los accidentes de trabajo,

para trasladar estas responsabilidades a un supuesto sistema de seguridad social. Corresponde aclarar que si este proyecto fuera sancionado el trabajador accidentado que vuelva a su lugar de trabajo sufrirá una merma en su retribución que será proporcional al grado de incapacidad que lo afecte, de acuerdo a lo establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 16.

Las incapacidades más serias, que van de un 20 a un 66 por ciento, serán reparadas mediante el pago de una renta periódica tan ínfima en su valor que no alcanzará a compensar la disminución del salario, tal como figura en el inciso b) del artículo 14.

Por otra parte, la incapacidad total, cuando sea superior al 66 por ciento o se produzca la muerte del trabajador accidentado, se reparará con la jubilación por invalidez o pensión a favor de los familiares, conforme al régimen establecido.

Tal como lo ha planteado un señor diputado precursor va a desaparecer la posibilidad de reclamar una indemnización integral por la vía del derecho civil. Aquí el trabajador sufre la discriminación de ser el único que no puede reclamar por supuesto dolo en el caso de daños causados en forma intencional por el empleador. Se va a una limitación en el listado de las enfermedades profesionales, lo que desde el punto de vista médico es absolutamente anticientífico, porque estamos tratando casos de enfermos y no de enfermedades. Estamos tratando el caso de enfermos que padecen una enfermedad por un trabajo realizado en condiciones psicosomáticas que deben ser analizadas en forma independiente y no en forma conjunta. El listado que se ha elaborado con relación a las enfermedades que pueden padecer los trabajadores va a dejar afuera a gente que se ha enfermado en su trabajo y que no va a poder cobrar su indemnización.

Por otro lado, existe un sistema que obliga a someterse a una instancia conciliatoria ante la ANSES y que puede durar un año sin posibilidad de que el trabajador tenga indemnización.

Sólo al finalizar el año sin llegar a un acuerdo se puede promover acción legal. Es así que mediante este criterio la relación que el régimen pretende devolver al Código Civil, basada en la igualdad de las partes, termina negando el fundamento básico del derecho laboral, que consiste en privilegiar a la parte más débil de una relación desigual, pues es conocida la coacción que puede ejercerse sobre el lado débil de esta negociación durante esta espera obli-

gatoria de un año con intención de que acepte acuerdos o calificaciones totalmente contrarias a derecho, basadas en la debilidad económica del trabajador y de su familia.

En relación con las incapacidades permanentes se incurre en una contradicción conceptual que avanza sobre los dictámenes de los organismos que crea la propia ley porque se considera que son provisorias. Durante los 36 meses subsiguientes a la declaración de estas incapacidades permanentes la aseguradora de riesgo del trabajo puede considerarlas provisorias, e incluso esta provisoriedad puede ser ampliada por 24 meses más. Vale decir que la aseguradora es dueña de la estabilidad de ese trabajador y de su familia durante cinco años, porque puede prolongar la determinación de la incapacidad permanente, considerándola provisorio durante ese lapso.

A su vez, las comisiones médicas que se crean no sólo van a dictaminar sobre los aspectos médicos del accidente sino también a resolver acerca de cuestiones legales, como son la naturaleza laboral del accidente, el contenido de ciertas prestaciones en especie y las discrepancias jurídicas surgidas entre la aseguradora y el accidentado o sus derechohabientes. No existe frente a esta resolución emanada de una comisión médica sobre temas estrictamente jurídicos la posibilidad de iniciar acción legal alguna contraria a sus conclusiones. Estas sólo podrán ser revisadas por la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, reglamentada en la ley de jubilaciones.

Este proyecto modifica por completo el régimen de indemnización establecido por la ley 24.028 que desde 1991 modificó el sancionado en 1915.

Los ocho puntos que hemos considerado como los más regresivos en materia de accidentes de trabajo tienen diferencias sustanciales, profundas, conceptuales y de hecho con las disposiciones contenidas en la legislación vigente. Así por ejemplo, las normas que rigen en la actualidad no permiten que cuando el trabajador se reintegre a su actividad se disminuya su remuneración, aspecto que sí autoriza esta iniciativa. Además, para la indemnización actual de toda incapacidad por accidente o enfermedad derivada del trabajo se aplica una tarifa que surge de tres factores: la remuneración, el grado de incapacidad y la edad del trabajador. Este sistema de evaluación sólo se conserva en el proyecto en análisis para las incapacidades inferiores al 20 por ciento.

Las incapacidades que superan el porcentual anterior tienen techo y piso fijo determinado por el proyecto. En caso de incapacidad total o de muerte se abona la indemnización correspondiente conforme a la fórmula referida, la que en ningún caso puede superar los 55 mil pesos. Además, el trabajador que sufra una incapacidad superior al 66 por ciento puede transmitir su jubilación por invalidez.

En la actual ley el trabajador accidentado tiene la posibilidad de reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente siempre que se den los requisitos previstos por el Código Civil o las normas del derecho común.

En el proyecto se establece la ilegítima discriminación del trabajador por el solo hecho de haber sufrido el accidente en ocasión del trabajo. Así, por ejemplo, si otra persona sufre un accidente idéntico en el mismo lugar, podrá ejercer la acción del Código Civil, siempre que no se encuentre bajo relación de dependencia. Esto se prohíbe al trabajador en relación de dependencia.

Con respecto a las enfermedades, la ley actual no dispone una enumeración taxativa, sino que brinda un concepto de enfermedad profesional, que puede ser aplicado por los peritos médicos y la justicia. En cambio, en este proyecto de ley se efectúa una enumeración taxativa.

En la actualidad, el trabajador tiene la posibilidad —pero no la obligación— de iniciar un trámite administrativo en el Departamento de Accidentes de Trabajo, lo que en ningún momento le impide el acceso al reclamo judicial. El proyecto elimina toda posibilidad de acceder a la justicia del trabajo, lo que sólo puede hacerse por intermedio de los comités que estatuye el proyecto. Así no se garantiza la participación de un tercero imparcial.

Los problemas mencionados se agravan por una legislación que plantea la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo. En este punto existen enumeraciones voluntaristas. ¿Cómo va a mejorar la pequeña y mediana empresa sus condiciones de trabajo y seguridad cuando está al borde de cerrar en forma permanente? En consecuencia, lo que aquí aparece como bueno y como un interés sano es un voluntarismo que no puede exigirse en forma concreta. En cambio, lo que el proyecto contempla con seguridad son las restricciones a la protección del trabajador.

Por los motivos expuestos, el Interbloque Alternativa Federal va a votar por la negativa a este proyecto de ley y, en caso de que sea apro-

bado en general por la Cámara, tratará de aportar conceptos superadores a la redacción de los diversos artículos.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Kammerath. — Señor presidente: quiero adelantar el apoyo en general del bloque de la UCEDE al proyecto de ley en tratamiento.

Nadie puede negar que se va a sustituir un régimen anacrónico —que se encuentra en plena discusión en la sociedad argentina desde hace mucho tiempo— por otro mejor. Por supuesto que tenemos la misma preocupación que otros sectores ideológicos con respecto al régimen de protección del trabajador frente a los infortunios laborales. Entendemos que esta iniciativa resolverá lo que el régimen actual —quizás, bien perfeccionado originariamente— no puede garantizar a los trabajadores de manera oportuna y efectiva al momento de los siniestros.

Se está efectuando una profunda reforma al régimen de accidentes de trabajo. Se busca dar protección al trabajador que padece un accidente y, al mismo tiempo, establecer reglas claras y precisas para los empleadores. El régimen actual ha cumplido un ciclo, porque hoy existe la desprotección del trabajador frente a estas circunstancias. También se pueden mencionar prácticas abusivas, que no son de aplicación general, pero que han distorsionado claramente esta protección.

La hiperlitigiosidad ha generado en muchos ámbitos tribunales un sobrecosto, que no sería tan grave si en definitiva hubiera garantizado una pronta y efectiva protección de los trabajadores que pasan por las circunstancias que la ley prevé.

Esta verdadera industria que se genera implica un proceso importante de redistribución de la riqueza en el que el trabajador, para ser franco, se lleva la parte del ratón y no la del león. Sabemos que este es un régimen novedoso que tiene precedentes en el derecho comparado y que por supuesto tendrá una complejísima transición. En particular, el señor diputado Harbía, así como otros legisladores, plantearán problemas sobre los que quisiéramos advertir, por ejemplo, en materia de empleados y funcionarios públicos de las provincias que se incorporan.

Además de desproteger al trabajador, o por lo menos no darle una protección oportuna, y de generar esta hiperlitigiosidad, el actual sistema afectó, como uno de los factores más importantes, la generación de fuentes de empleo, especialmente en la pequeña y mediana empresa que más de una vez se encuentra con

la imposibilidad económica de tener su sistema de autoseguro y con la imposibilidad práctica de que las empresas aseguradoras asuman el seguro destinado a protegerla con respecto a un potencial juicio en materia de enfermedades y accidentes de trabajo.

Es por eso que decimos —por supuesto respetando las opiniones diversas que se han expresado y que se expresarán— que el régimen actual ha fracasado en proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias de un siniestro con motivo de su relación laboral. En miles de casos citados la parte más débil del eslabón, el trabajador, es el que se lleva la parte del ratón en la distribución. Esto hace que sólo una persona de grandes ingresos pueda afrontar la espera, y por supuesto consideramos positivo un régimen que da de inmediato una reparación mensual al trabajador accidentado.

Naturalmente genera dudas legítimas el planteo de un régimen de seguro obligatorio y de autoseguro. En principio, la lógica podría decir que es necesaria una masa crítica de recursos financieros para afrontar el costo de este régimen de protección a los trabajadores y que debería contarse con la presencia de quienes hoy han podido sortear los escollos del régimen actual generando sus propios fondos y las propias formas para autoprotgerse. Se ha discutido mucho este tema y quizás hoy se discuta también.

Entendemos que será inevitable en la primera etapa de este régimen respetar el autoseguro aunque evidentemente el sistema tendrá que ser solidario y capaz de generar esa masa de recursos para la pequeña y la mediana empresa.

También es importante pensar que en la medida en que exista el autoseguro, deben preverse claramente las enormes exigencias y controles a efectos de verificar la solvencia económica de las empresas autoaseguradas para que en una situación de falencia o quiebra no se impida que quienes deben ser resarcidos por estos infortunios tengan la debida protección de la ley. Hay instrumentos legales que aparentemente garantizan eso. Pues bien, esto se discutirá en particular.

También nos alegra que el Estado argentino haya entedido —a través de la comisión que ha debatido este tema— la situación de los bomberos voluntarios, que son miles y miles a lo largo del territorio de la Nación Argentina y que cumplen asumiendo muchas veces el riesgo de perder sus puestos de trabajo, porque a más de un empleador poco solidario le molesta que al sonido de una sirena un trabajador se retire para cumplir con el servicio público de bomberos. Es



bastante plausible que se haya comprendido que el Estado nacional argentino debe afrontar —con los recursos con que cuenta actualmente lo hace, pero mediante un sistema engorroso, impracticable y enmarañado— los costos de asegurar a estas personas que no cobran nada a cambio de su labor que no sea la gratificación de contribuir a la seguridad de sus pueblos y ciudades. El Estado argentino debe por lo menos afrontar el costo de asegurarlos frente a accidentes debidos al cumplimiento de un deber.

Esto es importante e importa un avance, aunque nos hubiera gustado que se incorporara en el punto 1 del artículo 2º y no en el punto 2, como se ha hecho ahora. Deberemos convencer al Poder Ejecutivo de que afronte esta obligación que hoy, en virtud de la ley vigente, no cumple cabalmente. Cuando un bombero voluntario pasa por esta circunstancia, sus familiares deben llevar a cabo trámites tan engorrosos que terminan afrontando un costo muy grande buscando una protección que por lo menos yo considero absolutamente elemental.

Bien se ha dicho hace unos instantes que las materias de protección del trabajador han tenido un amplio debate en este recinto desde principios de siglo, incluso a fines del siglo pasado. Bien se ha dicho que el socialismo argentino hizo muy buenos aportes en esta materia. Obviamente, también sería bueno recordar a hombres como Joaquín V. González que impulsaron que estadistas como Julio Argentino Roca llevaran por primera vez al debate formal el primer proyecto de Código del Trabajo. También iniciativas como la de Carlos Saavedra Lamas o la de Juan Caferatta y otros. En todos ellos siempre existió la enorme preocupación no sólo por empezar a distinguir la diferencia entre el derecho privado en sí y la protección al trabajador, sino también por volcar todo esto en un derecho naciente, el derecho laboral, partiendo de la debilidad implícita de una de las partes en la búsqueda de generar contratos de mutuo beneficio. El ingeniero Bialef Massé realizó un trabajo a pedido del ministro del Interior de Roca, Joaquín V. González. Dicho estudio versa sobre la situación de la clase obrera en la Argentina.

Desde ese momento hasta el presente hubo notables avances en muchos sectores, pero no en todos el Estado manifestó su preocupación en cuanto a la seguridad e higiene del trabajo.

El señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra señaló que parece mentira que por un lado, desde distintas posiciones, compartamos la inquietud acerca de cómo proteger al trabajador frente a un infortunio o un siniestro labo-

ral, y por otra parte, en enormes franjas de la República, incluidas importantes capitales, no se hagan cumplir con la efectividad que se exige las normas sobre seguridad e higiene en materia laboral a pesar de los grandes avances tecnológicos y de experiencia práctica que en esta materia se pudieron realizar.

No hace mucho visité CIADFA —ex Renault o ex IKA— y pude observar cómo al cabo de un año y medio de esfuerzos en generar la mística y la preocupación necesarias, en conjunto el sector empresario, el sindical y los trabajadores, pudieron reducir enormemente la cantidad de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

Lamentablemente no en toda la sociedad argentina existe esa conciencia y evidentemente hay una falencia del poder de policía para hacer cumplir una ley tan importante que, además de abaratar costos, protege la salud del trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Se propone aquí un nuevo régimen y esperamos que sea mejor que el actual; así lo indica la experiencia del derecho comparado. El régimen vigente no soporta un nuevo parche.

Esta nueva filosofía en la interpretación de la protección ante el infortunio laboral es bienvenida por nosotros, más allá del debate puntual y de imprecisiones en la redacción, lo que evidentemente será motivo del debate en particular.

Es también plausible el esfuerzo en materia de recolocación y reubicación del trabajador que ha sufrido un infortunio laboral y el incentivo de crear un mercado laboral para aquellas personas que han sufrido incapacidades parciales de modo tal que se puedan incorporar plenamente —tienen otro tipo de capacidades— en el desempeño de un trabajo que les permita afrontar responsabilidades en su vida.

El nuevo régimen establece un seguro que garantizará prestaciones dinerarias, como regla general, y en especie, como regla excepcional. Deseamos que, con algunas normas que luego se incorporarán, esto se pueda llevar a cabo, porque si un trabajador que sufrió un infortunio laboral no recibe una respuesta oportuna, en definitiva no será ayudado. Cualquier derecho que garanticemos, que se demore en el tiempo, para un humilde trabajador es un derecho abstracto que no podrá ejercer.

En general apoyamos este nuevo régimen, aunque tenemos la prevención de no ver en su totalidad el sustento de cifras y cálculos actuariales que garanticen su financiamiento.

Por otra parte, tiene enorme importancia la autoexigencia del Estado en el control de los autoasegurados y el cumplimiento por parte de

la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en cuanto a las prestaciones que deben brindarse.

Por el deseo de protección cierta y oportuna del trabajador y por la decisión de acompañar el esfuerzo nacional por crear más fuentes de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta —nos consta claramente— que la pequeña y mediana empresa entre otras dificultades tiene la de encontrar compañías aseguradoras para afrontar los costos de eventuales juicios, apoyamos en general este proyecto y esperamos que en el debate en particular se aclaren cuestiones muy importantes para el orden y la seguridad jurídica argentinos y para que obviamente luego no provoquen severos debates de interpretaciones jurisprudenciales que poco ayudan a proteger a los trabajadores. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Rico.** — Señor presidente: rápidamente trataré de fundar nuestro voto negativo a este proyecto de ley, sin perjuicio de que las razones de esa posición se encuentran contenidas en las observaciones al dictamen formuladas por el señor diputado Fernández Gill, que tuvieron entrada el 20 de marzo.

Es necesario aclarar que el MODIN no se opone al sistema por el cual aseguradoras privadas participan en la cobertura de riesgos vinculados a la siniestralidad laboral, sino a los defectos instrumentales que presenta la iniciativa, que vuelve a ser un parche temporal.

Esta norma lejos está de cumplir el reclamado objetivo de prevenir los riesgos. Por el contrario, actúa juntamente con la ley de flexibilización laboral, significando mayor cantidad de horas de trabajo por idéntico precio, mayor agotamiento y mayor siniestralidad. El verdadero desamparo de los trabajadores no es generado por esta ley sino por el programa económico que lleva adelante el gobierno. Esta norma sólo puede ser analizada dentro del concepto normativo junto con el cual deberá entrar en vigencia, y teniendo en cuenta la realidad en la cual deberá aplicarse. Me refiero a un marco de recesión que ya ha sido anunciada por el gobierno, donde aumenta la deuda externa, desaparecen los derechos de los jubilados y de los trabajadores, y existe un riesgo cierto de que entremos en cesación de pagos.

Este modelo está muy lejos de tener como finalidad la preservación de la salud de los trabajadores porque, como casi todos los proyectos del grupo gobernante, sólo tiene en cuenta principios economicistas.

En este caso, como en los de la ley provisional, la de las pequeñas y medianas empresas y la de vivienda, se sigue soslayando el que debería ser el principio más importante: que las leyes deben estar al servicio de todos los hombres y no únicamente de unos pocos, que van a hacer los grandes negocios con las aseguradoras como lo están haciendo con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Esto nos lleva a inferir que la ley de accidentes de trabajo pasará a ser un nuevo producto para que las empresas hicieran como lo fue la jubilación con las AFJP, donde éstas poseían un mercado cautivo y quedaban en la nebulosa los controles del sistema al violarse la participación de los aportantes en el manejo de los fondos. Permanentemente el interesado está ausente de la administración y del control de todos estos fondos que se van conformando.

Para concluir, nuestras divergencias se resumen en los siguientes puntos: primero, no estamos de acuerdo con la forma en que son creadas las ART como compañías distintas de las compañías de seguros actualmente existentes. Los fundamentos de nuestra disidencia se basan en que no estamos de acuerdo con que ellas puedan tener fines de lucro. En este punto ponemos de manifiesto que se han tomado muchas cosas del modelo chileno, aunque con una diferencia que cambia sustancialmente el espíritu del proyecto, ya que en Chile la seguridad social está a cargo de asociaciones privadas que nuclean a los empleadores pero que están organizadas bajo la forma de mutualidades, o sea que no pueden tener fines de lucro.

Segundo, las pequeñas y medianas empresas que no lleguen a alcanzar los requisitos para asegurarse tendrán un aumento en los costos fijos. Esto tiene un importante agravante en momentos en que muchas de ellas se encuentran endeudadas y en la medida en que las cuotas impagas podrían ser ejecutadas por las ART mediante la vía del apremio.

Tercero, no es justo trasladar el riesgo empresario al trabajador. En última instancia, y agotadas otras vías, debe subsistir la responsabilidad del empleador, incluso mientras no interviene la obra social o la ART. Deben adelantarse los fondos necesarios cuando se trate de una emergencia.

Cuarto, no nos conforma la metodología para calcular las indemnizaciones, tan atada al concepto de AMPO.

Quinto, hay demasiada delegación legislativa, que acrecería la actuación de este cuerpo a la concesión prohibida por el artículo 20 de la

Constitución Nacional, exceptuando lo expresamente reglado por su artículo 76.

En sexto lugar, en realidad no hemos adoptado un sistema de seguridad social sino un sistema mixto en la medida en que el autoseguro deja subsistentes muchos principios correspondientes al seguro de responsabilidad individual, sometiendo a los trabajadores a los caprichos de sus empleadores, que decidirán la manera conforme a la cual prestarán el servicio.

Por último, se afectan las bases del federalismo, dado que el Poder Ejecutivo nacional podría, por medio de la autoridad que le es conferida en virtud de los planes de mejoramiento, impedir que las provincias ejerzan sus facultades en materia de poder de policía en relación con las medidas de seguridad e higiene.

Por las razones señaladas, el MODIN expresa su voto negativo a esta iniciativa.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).**— Tiene la palabra la señora diputada por Salta.

**Sra. Maidana.**— Señor presidente: hablo en nombre de los diputados de los bloques provinciales, aclarando que si no están presentes en este momento ello es en función de la confianza que me dispensan.

Quiero dejar sentado en primer lugar que el derecho del trabajo, sin perder su esencia ni sus principios, debe adaptarse a los cambios y transformarse para expresar realmente las relaciones laborales actuales y ponerse a tono con los tiempos.

Existe una tendencia actual a considerar que en el orden internacional se ha lanzado todo un movimiento que apunta al cambio, pero esos cambios sin lugar a dudas deben ser beneficiosos para la sociedad en que se van a aplicar y también para las partes de la relación, en este caso el empleador, que tendrá como mira bajar su costo, y también el trabajador, que buscará preservar su capacidad de trabajo, porque es la fuente de sus propios recursos con los que va a subvenir a las necesidades de él y de su familia.

En este marco de política legislativa que está por el cambio se inserta el proyecto que nos ocupa. Pero es indudable que para cambiar hay que buscar, dentro de lo posible, que ese cambio emerja de los propios protagonistas; que sea el fruto de la confrontación y de la discusión necesarias para llegar al consenso y al acuerdo.

Eso podrá darse si se advierte que, más que reformar, vamos a reemplazar una ley que, a través de las modificaciones que recibió, nunca alteró su filosofía, y que es la que rigió durante casi ochenta años, sustentada en principios

consagrados y defendidos por los trabajadores, por sus entidades gremiales y aun por los estudiosos del derecho del trabajo, los laboristas, que siguen defendiendo el sistema. Ello porque las modificaciones que recibió la ley de 1915 siempre respetaron la dignidad del trabajador, del empleador, y además, el trabajo en sí mismo.

A esos efectos, advierto que al abocarnos a esta nueva normativa debemos hacerlo —lo digo con una expresión gráfica— con pie de plomo, con el mayor de los cuidados, porque se trata de un proyecto que, luego de su sanción, reemplazará a una ley que data del año 1991 como última modificación de este régimen. En tal sentido me pregunto si, a escasos cuatro años de la sanción de esa ley, podemos decir que ella no ha tenido el resultado que pretendía el legislador de 1991. Honestamente, carezco de los estudios y de las estadísticas necesarias como para poder decir que esa norma ha fracasado íntegramente y que debe ser reemplazada por otra con una filosofía distinta.

A mi entender, estos y otros factores son los que han impedido que este proyecto contara con el beneplácito y el apoyo tanto de los sectores interesados —trabajadores y empresarios— como de las empresas aseguradoras.

Las críticas de los diferentes sectores puntualizadas por los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra no son pocas. Una de ellas surge de los empresarios, quienes señalan que no existe un menor costo laboral, pese a que éste es el móvil de todos los proyectos que sobre la materia nos ha planteado el actual gobierno. Ello porque obliga a las empresas a afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo y a soportar una contribución a determinar, que variará en función de los siniestros y de otros factores.

La patronal también deberá financiar el fondo de garantía para aquellos casos de insolvencia de las empresas y, por otro lado, cumplir con un plan de mejoramiento y de reformas para prevenir accidentes, siempre sobre la base de la legislación de higiene y seguridad. Esto significa que el costo difícilmente será menor; a mi juicio será mayor y resultará impredecible.

Además, el proyecto no es claro y puede generar todo tipo de conflictos. Precisamente, para reemplazar lo que tenemos se esgrime el argumento de que debemos dar solución a los innumerables conflictos que se imputan a la ley vigente. Reitero que, en lugar de bajar el costo laboral, éste se encarecerá.

Con respecto a las compañías de seguro, que también han hecho conocer sus críticas al proyecto de ley, debo señalar que la Asociación Ar-

gentina de Compañías de Seguro declaró a la prensa que la iniciativa implicará costos excesivos: establece una cobertura obligatoria que anula toda posibilidad de competencia y, aunque prevé que las compañías pueden operar con el riesgo, en verdad aspira a que sean sólo las ART las que absorban todos los riesgos.

A mi juicio, más preocupante aun es que el proyecto no protege al trabajador, que es a quien más debemos atender por ser la parte más débil de la relación. En tal sentido, es doblemente débil. Por un lado, lo es porque su salud y su organismo están afectados y, por el otro porque si quien goza de buena salud no consigue trabajo, ¿qué puede esperar el que resulte con alguna incapacidad? Sería lírico pensar que mediante este ordenamiento le estamos acordando un mejor y un nuevo derecho.

Sostengo que está desprotegido además porque —si los cálculos no me fallan— los montos que va a percibir como consecuencia de haber sufrido una disminución en su capacidad laboral serán inferiores a los que asegura la ley vigente, que manda efectuar, por lo demás, un pago íntegro.

Asimismo, existe otra desprotección ya señalada por los diputados que me precedieron en el uso de la palabra; me refiero a la falta de posibilidad de recurrir a la Justicia, hecho que para mí es suficiente para descalificar el proyecto que estamos tratando. Además, se priva al trabajador del derecho que le confieren las leyes que amparan a todos los ciudadanos por igual, como son las normas del Código Civil, entre ellas el artículo 1.113.

Indudablemente que el artículo 39 del proyecto limita la responsabilidad del empleador al caso del artículo 1.072 del Código Civil, que es el de los supuestos de conducta dolosa del empleador. Esa disposición —la del artículo 39— resulta contraria a un texto expreso de la Constitución Nacional: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por lo tanto, considero que este artículo 39, por la forma en que está redactado, no constituye el remedio apropiado para curar los males del trabajador damnificado; más aun si tenemos en cuenta el caso por todos conocido "Alegre c/Manufacturera Algodonera Argentina", donde a los damnificados por un accidente o enfermedad se los habilita a todos por igual —sean trabajadores o no— a buscar la indemnización integral, garantía de la que se priva al trabajador en este proyecto.

Reconozco por supuesto los inconvenientes que en su momento suscitó la aplicación del texto del derecho civil. De cualquier modo, la

litigiosidad que despertó o el mayor costo laboral que puede imputársele, no están corrigidos en el proyecto que estamos analizando.

Debemos acostumbrarnos a respetar la Constitución. Habrá que regular la cuestión en otros términos pero lo que no podemos hacer es ignorar la cláusula constitucional, porque si lo hacemos tendremos una oleada de juicios impugnando por inconstitucional la norma que se pretende sancionar y, obviamente, el resultado será contrario al que aquí se persigue.

Otra cuestión que a mi entender no está bien resuelta es la referida a las enfermedades del trabajo, que queda sujeta a un listado que practicará periódicamente el organismo administrativo, siendo que la doctrina más autorizada, junto con la ley vigente, se pronuncia por señalar que la norma debe fijar pautas precisas de configuración de la enfermedad profesional.

En resumen, el proyecto apunta a corregir una legislación que, debo reconocer con honestidad de pensamiento, ha sido rebasada por los tiempos y ha originado una litigiosidad que a los abogados también nos cuesta aceptar, ya que puede ser imparable. También es necesario reconocer que no se puede seguir cargando absolutamente todas las contingencias laborales única y exclusivamente en el empleador.

Pero lo cierto es que este proyecto no resuelve la cuestión con enjundia y sabiduría. Lo estimo así porque está pendiente el debate que los sectores interesados del país y la sociedad misma quieren realizar y afrontar, porque no se garantiza en el proyecto en forma adecuada al trabajador y a sus derechohabientes, en su caso, la percepción de la renta periódica en tiempo propio y en forma automática una vez que se ha producido el evento. Además, el monto de esa renta periódica es reducido; es por demás bajo e irrisorio.

En mérito a lo expuesto manifiesto que el Grupo Provincial —en cuyo nombre me he expresado— votará por la negativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Solanas. — Señor presidente: el bloque Corriente Grande fundamenta su oposición a este proyecto de ley en que estamos frente a una iniciativa que simplemente vuelve a disminuir la protección de los trabajadores y termina con el régimen de accidentes de trabajo y de enfermedades del trabajador que, con algunas modificaciones, ha venido rigiendo desde 1915, cuando se sancionó la ley 9.688.

Las modificaciones que hoy se presentan a este proyecto de ley son tan radicales y extremas

que se termina eximiendo de responsabilidad a los empleadores de aquellos trabajadores que se accidentan o adquieren enfermedades. Pero, como si esto fuera poco, el proyecto habla de que se indemnizará por aquellas enfermedades que estén taxativamente explicitadas en una lista que elaborará el Poder Ejecutivo.

Es decir que estamos frente a una nueva vuelta de tuerca de la precarización laboral, la que en los hechos se traduce en una creciente falta de protección para los trabajadores —llamada inestabilidad e inseguridad—, acompañada de bajas remuneraciones y de una disminución en las condiciones de preservación del medio ambiente donde desarrollan sus tareas.

Siendo las 20 y 40 de este frío miércoles 14 de junio me llama poderosamente la atención la desmovilización y la falta de debate en un tema tan importante que echa por tierra casi un siglo de defensa de estas indispensables medidas que aseguraban la preservación de las condiciones de trabajo.

La desmovilización es total, porque no hay gente en las galerías y existe una falta de interés hasta en los gremios opositores por el tratamiento de este proyecto de ley. Es como si estuviéramos hablando de un tema absolutamente intrascendente, cuando es un asunto que, de ser analizado desde el punto de vista cultural, demostraría un retroceso enorme con respecto a las nociones de progreso y seguridad social vigentes en todas las naciones adultas.

Entre los fundamentos de este proyecto se alude a la reducción del costo laboral y a la idea de terminar con la industria del juicio. Pero sería un error pretender analizar esta iniciativa al margen de las consecuencias que surgen de la aplicación del modelo económico que nos rige, basado en la ley de convertibilidad y en un régimen que ha venido multiplicando el desempleo en los últimos años; en altas tasas de interés, que constituyen la tenaza grande que nos oprime; ello sin dejar de mencionar el alto costo de los servicios y la apertura indiscriminada de las importaciones, que dejó a la pequeña y mediana empresa desarmada para afrontar la competencia externa por falta de créditos a bajas tasas de interés. La consecuencia directa de este modelo económico es la creciente tasa de desocupación, y parece que el único factor viable para reducirla es disminuir el costo laboral.

El desempleo ha venido aumentando en la Argentina durante los últimos años. Hoy se dice que estamos rondando el 24 por ciento de desocupación real. La precarización es tan grande en virtud de este modelo que el principal objetivo es

cumplir con nuestros compromisos externos. Hemos escuchado decir al ministro de Economía que, antes que asegurar el pago de los salarios de los empleados públicos, se asegurará el pago de los compromisos externos.

No es una cuestión más el tema de los compromisos externos, porque en estos seis años la Argentina liquidó la mayor parte de su patrimonio público para disminuir su deuda externa. Es así que negociamos el Plan Brady y volvimos a atarnos al compromiso por varias décadas. Pero lejos de haber disminuido, esa deuda externa, que en el año 1989 ascendía a 66 mil millones de dólares ha sobrepasado hoy los 105 mil millones de dólares, de los cuales 85 mil millones corresponden a deuda pública y 20 mil a deuda privada. Incluso recuerdo haber leído un artículo de Rogelio Frigerio publicado en el diario "Clarín", quien preveía que para fin de año la deuda externa argentina superará holgadamente los 110 mil millones de dólares.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Justicia, doctor Francisco de Durazona y Vedía.

**Sr. Solanas.** — Allí está el principal factor de ajuste sobre el que se ordena este modelo que se está aplicando con absoluta impunidad en desmedro de los más elementales derechos que costaron innumerables luchas y sacrificios a lo largo de este siglo.

Lo más curioso es que no estamos ante una Argentina pobre. Aunque escuchamos decir que no hay de dónde ajustar porque no hay cómo pagar, la Argentina no se ha empobrecido en su rendimiento económico durante los años de aplicación de este modelo. El producto bruto interno ha crecido y hasta el propio secretario Tacchi nos habla de 300 mil millones de dólares de producto bruto interno. Entonces, ¿cómo es posible que esta creciente ola de riqueza pueda terminar en una polarización, consistente en el enriquecimiento extraordinario de algunos pocos y en la exclusión extrema de otros?

Existe una pauperización creciente de las capas medias y una ola de desocupación plena y semiplena, que en algunas provincias llega al 40 por ciento y en algunas ciudades del interior del país sobrepasa el 50 por ciento. Nos tendríamos que preguntar cómo es posible que suceda esto. ¿Adónde fueron a parar los 45 mil millones de dólares adicionales de endeudamiento externo que la Argentina acumuló en estos seis años? A esta cifra debemos agregar los 9.500 millones de dólares que la Argentina recibió en efectivo por la venta de sus activos.

¿Adónde se encuentra ese dinero, si en estos años se detuvieron las obras públicas y los grandes emprendimientos? Ya no queda por emprender ningún cambio tecnológico ni ninguna gran obra de infraestructura. Entonces, nos oponemos bajo todo punto de vista a que la crisis del modelo recaiga sobre el sector laboral.

Concretamente, quiero referirme a algunos puntos que, siendo tan graves con respecto a los derechos del trabajador, no puedo dejar pasar por alto. Se dice que en el régimen todavía vigente de la ley 24.028, a ningún trabajador accidentado que se reintegra al trabajo se le disminuye el salario. Estas modificaciones tienen la escandalosa osadía de castigarlo.

Aquí, al que ha sufrido una disminución de más del 20 por ciento de su capacidad, se lo tendrá en cuenta para indemnizarlo. Sin embargo, en lugar de protegerlo, se ajustará su salario, disminuyéndolo en función del porcentaje de su incapacidad física. Es decir que el trabajador que ha sufrido un accidente durante su tarea, terminará con una disminución de su remuneración. Debemos tener en cuenta que en la mayor parte de los casos nos referimos a accidentes ocurridos durante el desarrollo del trabajo, donde resulta imposible deslindar de su responsabilidad al empleador.

Esta es una antigua tradición que se remonta a más de doscientos años en la propia Europa. Incluso, ya en el derecho romano está su antecedente, el principio del riesgo creado, es decir, a quel principio de que quien goza del beneficio debe cargar con el riesgo. Las modificaciones que propicia este proyecto quitan absolutamente toda responsabilidad a los empleadores.

Otro punto que llama la atención es la reducción de las indemnizaciones por incapacidad. Mientras en el régimen actual, la ley 24.028, se indemniza toda incapacidad derivada del trabajo, cualquiera sea su grado, en las modificaciones que se proponen las incapacidades más graves, aquellas que van del 20 al 66 por ciento, serán simplemente reparadas mediante el pago de una renta periódica que en los hechos es una pensión y que es menor a la pérdida salarial que la incapacidad le ha ocasionado al trabajador. Si nos referimos incluso a aquellos casos de incapacidad mayor al 66 por ciento —supongamos una incapacidad permanente y total— comprobamos que el trabajador no percibirá indemnización o renta alguna sino simplemente la jubilación por invalidez. Hay que destacar que también según la legislación actual, la incapacidad total o muerte significa cobrar el máximo de la indemnización, es decir, 55 mil pesos.

Es decir que hay despojos graves, y podríamos referirnos a muchas otras cosas. Cabría preguntarse si no es éste un testimonio crudo, doloroso e incluso inhumano de abandono del pilar de toda sociedad que son sus trabajadores y de abandono de la tradición social y de luchas de este país que a lo largo del siglo defendió la justicia social y las conquistas de sus trabajadores.

En cuanto a los empleadores y las ART, el proyecto parecería que constituye una ventaja patrimonial a favor de éstas. El régimen acerca las administradoras de riesgo, entidades aseguradoras de los riesgos del trabajo, con competencia exclusiva y excluyente en la materia. Deben recibir la totalidad de las cotizaciones empresarias y a su cargo se encuentra la gestión de las prestaciones establecidas en el proyecto. Pero estas ART tendrán como mercado cautivo la friolera de siete millones de trabajadores, lo que se traducirá en una masa económica que supera con creces la suma que en concepto de indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales deben solventar los empleadores bajo el actual sistema normativo.

Termino diciendo que además nos oponemos a estas modificaciones porque el proyecto es inconstitucional por donde se lo analice. Entre otras cosas vulnera los principios constitucionales de igualdad ante la ley y priva al trabajador de la posibilidad de la reparación integral, un derecho que los trabajadores tenían inclusive antes de 1915, porque podían apelar al Código Civil.

El reclamo de la reparación integral por los daños y perjuicios sufridos aquí no se contempla. Por lo tanto, estamos vulnerando los principios de igualdad ante la ley de seguridad social, el derecho a la propiedad y la preeminencia jurídica de los convenios internacionales que en materia de derechos sociales hemos incorporado a la Constitución luego de la reforma de 1994. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Duránova y Vedía). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una reflexión que no tiene que ver con el tratamiento de este proyecto de ley pero que me parece importante desde el punto de vista de nuestra mecánica parlamentaria. Creo que este espacio debería ser el lugar donde se debatan las ideas, más allá de que después la mayoría pueda imponer, democrática y legítimamente, su opinión a través del voto.

Quiero hacer llegar —a través de la Presidencia— a los distintos bloques la preocupa-

ción por la ausencia de legisladores en el recinto, lo que imposibilita el proceso de reflexión que debe darse en un tema tan sustantivo para el futuro de los trabajadores argentinos y en una modificación de tanta envergadura como la que estamos tratando.

Si bien hemos adelantado a través del señor diputado Estévez Boero diversas consideraciones en general, quisiera agregar algunos aspectos que me parecen importantes. Uno de ellos es la concordancia que hay entre esta instrumentación que hoy estamos tratando y otras medidas en las cuales ha habido una filosofía común, como en el caso del proyecto de flexibilización laboral.

Una vez más se está imponiendo el criterio de que tras la modernización, la disminución de los costos del trabajo y el mejoramiento de la calidad, puede ocultarse la falta de equidad. Estamos absolutamente convencidos de que los procesos modernizadores en la legislación del trabajo, de la previsión social y de la seguridad social son absolutamente imposibles de conciliar profundamente con ausencias o desequilibrios tan expuestos como los que en esta ley o en el funcionamiento de este sistema van a quedar en el sentido de la desprotección de los trabajadores.

Hay tres aspectos centrales que nos preocupan en este proyecto de ley. En primer lugar, la ausencia de universalidad, que impide o dificulta la solidaridad del sistema. El hecho de que las empresas grandes puedan autoasegurarse tiene varias aristas. Si bien es legítimo en el caso de algunas, la ley no especifica cómo esos empleadores de mayor poder económico van a ver limitados o regulados sus derechos, y se está forzando a la pequeña y mediana empresa —que hoy está en una crisis muy profunda en la Argentina—, de las cuales depende prácticamente el 70 por ciento de la masa de trabajadores, a incorporarse al sistema de las ART, imposibilitando entonces un reparto más igualitario que permita la constitución de un efectivo sistema solidario.

Es así que podemos llegar a vivir la siguiente contradicción: que empleadores con mayor poder económico tengan menor costo laboral mientras que empleadores con menor poder económico van a tener un mayor costo laboral.

Nos preocupa también el tema de los pasivos ocultos y nos preguntamos quién va a financiar la puesta en marcha de este sistema para más de siete millones de trabajadores.

Hay una cantidad de discapacidades de origen laboral que, frente a la vigencia del siste-

ma propuesto, no van a ser asumidas por las nuevas administradoras ni por las compañías de seguro actuales —que ya están quebradas— ni por las empresas, que no van a poder pagar, ni por el Estado que no tiene recursos para hacerlo. En este caso nuevamente se ratificará el criterio de que quienes pagarán serán quienes menos tienen. Van a pagar los trabajadores argentinos con sus discapacidades al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema. Se agregaría de esta manera una inequidad sustantiva.

Por otra parte, también nos preocupa la financiación del sistema en los primeros años.

El Plan de Mejoramiento que está planteado como clave para iniciar un proceso de prevención y de obtención de la calidad del trabajo, será determinado únicamente por las empresas y las ART, sin intervención directa de los trabajadores ni del Estado. Nuevamente, como en el caso de la flexibilización laboral, estamos inclinando el fiel de la balanza hacia un solo platillo, colocando en condiciones absolutamente desparejas a los que tienen que negociar sin la intervención del Estado, que es quien debería participar regulando el conflicto desde la perspectiva del bien común o de la medida socialmente acordada.

El control del cumplimiento también está a cargo solamente de las ART. En el caso chileno —que ya ha sido mencionado por otros legisladores— existen comisiones paritarias de trabajadores por empresas que participan tanto en el diseño como en el control de los planes de mejoramiento.

En cuanto a lo que se señaló acerca de la solidaridad o del autoseguro, entendemos que el proyecto de ley es muy vago en relación con la definición de las condiciones para autoasegurarse. Se deberían incluir una serie de requisitos sumamente estrictos, entre ellos la creación de una reserva contable especial, un plan de mejoramiento y una supervisión específica de las normas de higiene y seguridad industrial, de manera de evitar que empresas sin las condiciones necesarias se ahorren la prima del seguro pero luego no respondan por los accidentes que tengan.

Nos preocupa también que las comisiones médicas, que, en definitiva, serán quienes determinen el grado de incapacidad y la indemnización para el trabajador, sean las creadas por la ley provisional, que en la práctica han dejado severas dudas en su funcionamiento. Otro problema es que las apelaciones sólo podrán hacerse ante la Cámara Federal de la Seguri-

dad Social, con los inconvenientes que ello representará para los trabajadores del interior del país.

En cuanto a la obligación de las ART también hay vaguedad en la norma al otorgar las prestaciones en especie, en particular las referidas a rehabilitación y recalificación profesional. En este sentido el control de la superintendencia no asigna a esta cuestión la importancia que tiene, dejando al trabajador en una situación de desprotección.

Es por todos sabido que en el caso español el éxito del sistema no ha consistido tanto en las reparaciones en dinero sino en los complejos de rehabilitación y la posibilidad de reincorporación laboral que han propiciado las mutuales españolas.

En cuanto a las alícuotas o primas de seguro, consideramos que debería haber una intervención más activa del Estado, estableciendo tasas testigo y controlando para evitar que acuerdos entre las ART impongan alícuotas abusivas y que eventuales acuerdos entre las ART y ciertas empresas introduzcan distorsiones en el sistema.

Los costos operativos de este régimen no han sido debidamente estudiados y por lo tanto estamos corriendo riesgos que pueden ser difíciles de prever en este momento.

Los criterios de solvencia para el autoseguro no han sido especificados debidamente y no se establecen riesgos diferenciales para el sector del comercio, que es de bajo riesgo en comparación con el de la industria.

Estos son algunos de los vacíos y aspectos particulares que nos preocupan de la norma. El sistema de exclusión y la posibilidad de recurrir a la justicia civil son absolutamente violatorios de la Constitución Nacional y afectan las garantías establecidas en los artículos 14, 14 bis, 17 y 28.

El catálogo de enfermedades que teóricamente se va a elaborar no intenta dar solución al problema de la concausalidad de las enfermedades profesionales y se deja al arbitrio del Poder Ejecutivo la ejecución de dicho listado.

No se exige un porcentaje de utilidad de las ART para el financiamiento del sistema. Se excluyen las enfermedades laborales que no son de carácter profesional y que estarán incluidas en el listado que determinará la reglamentación. Se extiende exageradamente el plazo para que la incapacidad laboral se considere permanente. Se dispone que el derecho del trabajador se consolida a partir de la denuncia, cuando

la Corte Suprema la sentenciado, ya que el derecho al reclamo nace y se consolida a partir de la producción del infortunio. Además, se crean plazos de prescripción inciertos, y se dilata y dificulta el ejercicio de la defensa en los casos producidos en las provincias —como señalé recién— por la radicación de la cámara revisora en Buenos Aires.

El Poder Ejecutivo se reserva el derecho de incluir autónomos, personal doméstico o bomberos voluntarios, situaciones que deberían ser tratadas también en el ámbito legislativo. ¡Quiénes mejor que nosotros podríamos analizar las condiciones de trabajo que tienen sectores como el de las empleadas domésticas, que están absolutamente fuera de toda previsión!

Estas son algunas de las preocupaciones que se nos plantean en el tratamiento de la presente iniciativa. Frente a la decisión de imponer un proyecto que una vez más inclina la balanza hacia el platillo de los poderosos sin buscar el equilibrio necesario para que las fuerzas del trabajo estén suficientemente representadas y defendidas, vamos a votar negativamente en general el proyecto en consideración. No obstante, trataremos de introducir algunas modificaciones a su articulado a fin de morigerar algunos aspectos negativos de esta legislación.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz. — Señor presidente: la norma sobre riesgos de trabajo que estamos tratando esta noche se refiere a dos temas fundamentales: en primer lugar, a los accidentes que son sucesos imprevistos que producen un daño en el físico de las personas y por lo tanto alteran su salud, y en segundo término, a las enfermedades profesionales que son desviaciones del estado fisiológico normal, que también implican pérdida de la salud como consecuencia de una contingencia que se produce durante el trabajo.

Es decir, que los dos temas fundamentales están directamente vinculados con la salud. Por eso, en mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, debo decir que me extraña sobremanera que esta cuestión que tiene que ver con la salud de un sector importante de la población no haya sido dirigida a nuestra comisión.

El artículo 69 del reglamento de la Cámara establece que compete a la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública dictaminar sobre todo asunto o proyecto referente a la legislación



sobre salubridad: individual, pública o social, considerando la medicina asistencial, preventiva y social.

De más está decir entonces la vinculación que tiene toda la temática de esta norma con el trabajo que el reglamento le encomienda a la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública de esta Honorable Cámara.

Hecha la aclaración, voy a considerar este proyecto de ley que es una modernización aparente de la ley de accidentes de trabajo, de la vieja ley 9.688 y sus modificaciones posteriores, con la 24.028 que en la actualidad atiende esta área tan importante.

El proyecto se diferencia sin duda en forma manifiesta de otros anteriores que buscaron por encima de todas las cosas la flexibilización laboral. Tiene otra importante y manifiesta orientación, ya que no busca en forma directa la disminución del costo laboral. Apunta en primer término, y hay que rescatarlo, a establecer un sistema casi nuevo que busca insertarse con otros sistemas que ya han sido sancionados en los últimos tiempos, fundamentalmente imbricándose con la ley 24.241.

El proyecto en consideración subsidiariamente va a tratar la disminución del costo laboral, pero en forma indirecta porque fundamentalmente se saca al empresario la responsabilidad para dársela a las ART, que serán las que a partir de ahora a través de una cuota se harán cargo de la responsabilidad, y por lo tanto de las prestaciones respectivas.

En ese sentido debemos señalar que desaparece la responsabilidad total de los accidentes *in itinere*, lo que pasa a ser una especie de socialización de las cosas, ya que los trabajadores empiezan a concurrir en el sostenimiento del sistema, y los empleadores quedan, en este caso, definitivamente exonerados de la responsabilidad.

En cuanto a las contingencias cubiertas, debemos señalar que aquí han desaparecido las enfermedades-accidentes y en cambio se mantienen las profesionales, que en su momento fueron muy bien señaladas cuando se sancionó la ley 19.587 y su decreto reglamentario, el 351/79. Allí quedó muy bien especificado cuáles eran por entonces las enfermedades, algunas de las cuales voy a mencionar para que todos tengan conocimiento: las neuroconiosis, la silicosis, las bronconeumopatías, las enfermedades causadas por agentes sensibilizantes que desencadenan el asma profesional, las enfermedades causadas por el berilio, el cadmio, el fósforo, el cromo, el manganeso, el arsénico, el mercurio, el plomo,

el flúor, el sulfuro de carbono; las provocadas por los derivados halogenados tóxicos de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos; las causadas por el benceno o por los derivados nitrados y amínicos tóxicos del benceno o de sus homólogos; las provenientes de la nitroglicerina o de los alcoholes o de algunas sustancias asfixiantes, como el óxido de carbono.

También están aquellas que provienen de otras causas, que ya no se vinculan con minerales. Por ejemplo, las afecciones auditivas provocadas por el ruido o por las vibraciones; las afecciones en el trabajo en aire comprimido, las lesiones sobre la piel y también, incluso, hasta el cáncer de pulmón, que se considera en algunos casos enfermedades profesionales.

Pero ocurre que este criterio ahora se cambia porque ahora se dice que todos los años el Estado, a través de su área respectiva, procederá a dar a conocer la lista de cada una de las enfermedades que abarca esta norma.

Otro tema fundamental tiene que ver con la accesibilidad a la Justicia por parte del trabajador, donde evidentemente éste tendrá una limitación importante. La justicia laboral prácticamente desaparece, pues si no prospera el trámite administrativo iniciado por el damnificado éste puede recurrir a la Cámara Federal; pero sabido es que mientras en el fuero laboral el obrero sabía que muchas veces lograba justicia, es muy difícil que la logre en el fuero federal. Además, no está suficientemente explicitada esta incursión en el fuero civil ni explicado cómo se aplicarán a cada caso las figuras del Código.

En definitiva, esta normativa implicará la existencia de diferentes subsistemas, que sin lugar a dudas están totalmente relacionados. Habrá una superintendencia de las ART, vinculadas con la Superintendencia de Seguros de la Nación y con la de las AFJP. En definitiva, se pretende uniformar todo en esta orientación que el gobierno ha dado al proyecto.

Fíjese, señor presidente, que las comisiones médicas que van a intervenir son las mismas que las que lo hacen en las AFJP para determinar las incapacidades señaladas. Luego, cuando se llega a la incapacidad total permanente, las prestaciones emergentes de ese hecho se registrarán de acuerdo con el régimen de la ley 24.241. En lo que se refiere a las prestaciones complementarias, se utilizará como base el AMPO para graduar el monto de tales coberturas.

Todo ello nos hace llegar a la conclusión de que no se ha pensado en el trabajador que sufre una contingencia; el proyecto no tiene sensibilidad ni orientación de tipo social. Todo ha sido

guiado por la personalidad de un ministro que manifiesta condiciones neuróticas del tipo definido por la psiquiatría como un verdadero *border line*, es decir, lo que comúnmente se conoce como fronterizo; que transmite a la sociedad los impulsos y la inestabilidad emocional en los afectos, la conducta y las relaciones, que fluctúan en intensidad y desorden según las circunstancias. Sólo se mantienen intactos en estas personalidades su autoimagen, su endiosamiento, su narcisismo, su impulsividad y su capacidad, incluso, para poder manipular grupos.

Si a ello sumamos su identificación con algunas corrientes que aparecen desde la década del 70 en adelante, y que podemos personalizar tal vez en Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Salinas de Gortari, llegamos a la conclusión de que para que cierren las cuentas hay que acumular recursos de cualquier forma y sin reparar en los costos sociales, porque en definitiva lo que se busca es lograr un nuevo mercado de capitales para alentar esta inspiración del señor ministro de Economía. (*Aplausos*.)

**Sr. Presidente** (Durañona y Vedia). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino**. — Señor presidente: confieso que entro a este debate sin mucho entusiasmo, porque resulta deprimente que en tratamiento de una ley fundamental para el país, para los trabajadores y los empresarios, estemos sesionando con veinticuatro diputados presentes, esto es, menos del 10 por ciento de la Cámara, galerías vacías y un diario de sesiones que, como lo señalé al comienzo de la reunión hoy, aparece a los diez meses o al año de haberse llevado a cabo la sesión.

Además, no existe debate: cada uno dice su discurso, llega la hora fijada para la votación y se impone la fuerza del número, sin que exista un cambio de ideas o un diálogo donde se produzcan las confrontaciones o las rectificaciones. De manera que la metodología que se está imponiendo en esta Cámara para debatir las leyes fundamentales del país es deprimente. Por eso voy a dejar de lado el grueso de mi exposición —para satisfacción incluso de muchos— y me dedicaré a señalar algunos datos concretos, porque las cifras no tienen ideología y son de una elocuencia intrínseca que habla por sí sola.

Se ha hecho referencia a la industria del juicio, a abogados pleiteros, a jueces cómplices y a trabajadores mañosos. Así es como aparece esta ley correctiva de la industria del juicio. Se ha dicho que existen más de cincuenta mil juicios por hipocresía solamente en la ciudad de Rosario, cuando la totalidad de los pleitos laborales,

por todas las causas, y en todo el país, no superaría los treinta mil. Adviértase la diferencia.

El doctor Héctor Recalde, conocido estudioso de estos temas, que ha tenido trato con los gremialistas del partido gobernante, ha dicho que la legislación sobre accidentes de trabajo fue modificada a instancias de las compañías de seguro y sectores empresarios. Así es como observamos la reforma de la ley 23.643 por la 21.028, que reduce las indemnizaciones de los trabajadores y los honorarios de abogados y peritos. Queda en claro que la ley 24.028, vigente desde el 26 de diciembre de 1991, fue producto de la presión empresarial apoyada por supuesto en forma cálida por los ministros del Poder Ejecutivo nacional.

Hoy, sin esperar los resultados económicos de esa ley, se impulsa una nueva reforma que, como entonces, carece de datos ciertos y oculta deliberadamente los conocidos para seguir bajando los costos empresarios y aumentando la desprotección de los trabajadores, porque se habla de la reducción de los costos pero siempre afectando al sector más débil de la relación laboral.

Desde hace un año y meses que he asumido mi función de diputado jamás he visto una iniciativa del sector mayoritario que propusiera la reducción de los costos mediante la disminución, por ejemplo, de los enormes gastos que tienen en publicidad las empresas. También se podrían reducir las enormes retribuciones que se perciben en la línea gerencial de las grandes empresas que, como lo demostré en un debate anterior con cifras que nadie rebatió, están fijadas en dólares y son las más altas del mundo.

Sin embargo, seguimos insistiendo en que para bajar los costos hay que seguir precarizando el empleo y afectando a los trabajadores, que representan al sector más débil.

También nos llama la atención que el órgano representativo de los trabajadores —que debería haber hecho punta en la oposición a este proyecto de ley— termine avalando esta iniciativa.

¿Cuál es el costo de las empresas? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien está en condiciones de decir científicamente cuál es la composición de los diversos rubros que terminan integrando el costo de un producto? Nadie lo sabe, y si alguien lo supiera se lo guarda como si fuera un secreto de Estado.

Tampoco sabemos cuál es la cantidad de trabajadores con disminución de su capacidad laboral por accidentes o enfermedades vincu-

ladas con el empleo. La nueva iniciativa se olvida olímpicamente del enfermo por causas laborales, siendo que las enfermedades conforman el 70 por ciento de los infortunios en esta materia. Se trata de un porcentaje altísimo al que debiera prestársele mayor atención.

No existen estadísticas serias acerca de las causas u orígenes de las incapacidades laborales, lo que es gravísimo, porque sin esa información no hay política eficaz para poder prevenirla.

Tampoco se conocen los costos administrativos que implicaría el cambio del sistema vigente al enunciado, donde se traslada la responsabilidad del empleador hacia una compañía de seguro. Esta iniciativa es el complemento de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. En este punto resulta curioso que la ley exija como garantía de solvencia patrimonial a las aseguradoras de riesgo del trabajo un capital equivalente a 20 indemnizaciones máximas, esto es, un millón de pesos, cuando todos hemos visto fundirse y desaparecer a compañías de seguros inmensamente más poderosas, económicamente mucho más fuertes. Esta cantidad aparece como irrisoria e insuficiente. No parece haberse estudiado a fondo este punto.

Las verdaderas estadísticas que se conocen indican que lo cierto es que en los últimos años bajó significativamente la litigiosidad laboral. Es decir que no aumentó; ha bajado, no así los accidentes ni las enfermedades, que sí aumentaron.

Durante 1991 y en virtud de la ley 9.688 se iniciaron 18.301 pleitos laborales. En 1994, con la ley 24.028, se iniciaron 6.260 juicios; o sea, una tercera parte del total de 1991; se redujo la litigiosidad a un 40 por ciento. Por la vía del artículo 1.113 del Código Civil, en el mismo lapso se redujo el número de demandas a un 23 por ciento, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. También se redujeron los honorarios de los peritos y abogados en virtud del artículo 17 de la ley 24.028, porque el abogado del trabajador que pierde el juicio no percibe honorarios.

En todo esto vemos una intención manifiesta de desalentar la iniciación de juicios laborales como un modo patético que pretende esconder la precaria realidad en la que se desenvuelven los trabajadores argentinos, así como se persigue, en otro campo, a los vendedores callejeros, en un intento de esconder de algún modo la realidad de la desocupación que padece el país.

En los últimos años aumentó notablemente la dificultad para percibir las condenas por los juicios que gana el trabajador. Estadísticas de la Prosecretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revelan que prácticamente se duplicaron los juicios que el trabajador gana, pero no puede cobrar sin ejecución y, en un 30 por ciento de los casos, no cobra a pesar de la ejecución. Esta es la triste realidad de la situación de los trabajadores argentinos. Las cifras se confunden con total irresponsabilidad y no guardan ninguna relación con la verdad.

Se habló de demandas por valor de 21 mil millones de pesos. Sin embargo, el promedio del valor de las indemnizaciones anuales no supera los 130 millones de pesos en todo el país. Esto equivale a un 1,3 por ciento de la evasión patronal estimada por el secretario de Ingresos Públicos, doctor Tacchi, la que alcanzaría los 10 mil millones de pesos.

¿De qué se habla cuando se menciona la reducción de los costos empresarios? Se pone el acento en la disminución de los costos de fabricación de los productos y no se observa la verdadera ostafa que se efectúa al fisco por parte del sector más poderoso de la relación laboral, que precisamente no está constituido por los trabajadores.

A pesar de todos los adelantos en materia médica, de seguridad industrial, de fisiología y de psicología —además de la introducción de las modernas computadoras y otros avances—, el número de accidentes y de muertes por razones laborales sigue siendo payoroso a nivel mundial. Anualmente fallecen 250 mil personas en el mundo, lo que representa una cifra mayor a la que arrojan algunas guerras. Asimismo, también se registran 140 millones de enfermedades anuales como consecuencia del trabajo.

Este es el resultado de un mundo gobernado bajo el sistema capitalista de producción, donde a raíz de las ideas neoliberales y conservadoras se agravó la situación de los trabajadores. He mostrado la crisis y las cifras de un sistema económico y social injusto, que pone el acento en las ganancias y en el dinero, siendo secundarias las personas.

Pareciera no preocupar este modelo de sociedad que vive la mayor parte del mundo, al que el gobierno quiere adscribir con un entusiasmo de fundamentalismo fanático similar al de los cruzados de la Edad Media. Este es el resultado pavoroso de este sistema económico y social, que cuestionamos con toda nuestra fuerza des-

de el socialismo. Nos oponemos con ideas superiores a estos disvalores de la sociedad que nos rige.

Por ello no tiene sentido continuar aprobando leyes de esta naturaleza. Cuando sancionamos las leyes de empleo y de flexibilización laboral se nos dijo que tenían como objetivo reducir la desocupación y generar puestos de trabajo. Los índices de desocupación, los oficiales —aquellos que son provistos por los mismos organismos públicos y que al presidente de la República no le merecen confianza—, subieron el 14 por ciento, y seguimos dictando leyes que precarizan aun más el empleo y que están destinadas solamente a favorecer a un reducido grupo de empresarios que harán con las aseguradoras privadas un nuevo gran negocio para el lucro pero no para prevenir las enfermedades incurables y los accidentes de trabajo que están directamente vinculadas con la higiene y la seguridad industrial. En esta materia no existe cumplimiento de las normas en vigor por parte de los diversos organismos competentes en las diferentes jurisdicciones.

Esa es la triste realidad de las cifras, que yo desearía que fueran rebatidas con otras fundadas en la realidad y en el trabajo de organismos serios, y no en meras declaraciones de que con esta ley vamos a reducir los costos y a aumentar la productividad y el empleo. Es una verdadera falacia que, por repetida, ya no la creen ni siquiera los mismos que la profesan.

**Sr. Presidente (Durañona y Vedia).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. D'Ambrosio.** — Señor presidente: más allá de las características singulares de esta crónica parlamentaria, más que debate parlamentario, y adhiriéndome naturalmente a lo expuesto por los señores diputados de la Unión Cívica Radical que me precedieron en el uso de la palabra, quiero ceñir mi exposición a términos muy breves para marcar algunos perfiles sobre el trámite irregular que una vez más una importante ley tiene en este Parlamento. Con respecto a algunas consideraciones, la irregularidad de este trámite ha hecho, no que no se analicen con seriedad sino que directamente no se analicen.

En primer lugar tenemos la reiterada negativa de la Presidencia al reconocimiento de una comisión que en 1987 se creó precisamente a instancias de lo que hoy es el oficialismo, cual es la Comisión de Economía, que específicamente tiene dentro de su órbita de competencia las cuestiones del seguro.

Parece inconcebible que hayamos llegado al establecimiento de las AFJP sin que la Comisión de Economía se haya enterado. Y con este

proyecto ha pasado exactamente lo mismo pese a las numerosas ocasiones en que legisladores del radicalismo y de otras bancadas de la oposición pidieron el giro a dicha comisión, a fin de que trate temas como reservas técnicas y cálculos actuariales. Más allá de la oposición de fondo a la filosofía que está detrás del articulado, el no asesoramiento de la Comisión de Economía en cuestiones como las apuntadas convierte a este proyecto en una cosa parecida a un mamarracho y —con bastante seguridad— en otra aventura que no se sabe cómo terminará, como ha sucedido con la ley de solidaridad previsional y otras leyes.

Hay una cuestión perversa en la forma que tiene el Poder Ejecutivo de titular las leyes y de definir sus objetivos. Se la titulado "de solidaridad previsional" a la ley que termina con toda solidaridad en el sistema. Se habla de leyes para el empleo con respecto a normas que van a marcar los récords históricos de desempleo en la Argentina. Esta ley no peca tanto: se llama ley de riesgos del trabajo. Creo que una pequeña tautología nos ubicaría en su realidad. Es la ley de los riesgos que van a contribuir a los riesgos del trabajo si se sanciona como está prevista. Pero también peca de voluntarismo cuando todas las consideraciones tienden evidentemente a objetivos que nadie puede dejar de aceptar.

Así se habla del acento en la prevención, cuando la prevención en esta ley no es nada más que una mera declaración. Se habla de la reducción de los costos laborales. Me pregunto cuántas leyes llevamos sancionadas en este Congreso con particular empeño y poca convicción por parte del bloque oficialista, que hablan de que vamos a reducir los costos laborales, de que vamos a flexibilizar. ¿Qué se ha obtenido? ¿Cuáles son los resultados palpables que la gente ve en esto?

No puedo dejar de pensar en esta época de carencia de utopías en aquello que decía Ortega y Gasset sobre las ilusiones. Decía que las ilusiones hay que tenerlas pero no hacérselas, porque hacerse ilusiones conduce a la pedagogía de Onán; y me parece que en esta materia normativa el gobierno se hace ilusiones o, lo que es peor, hace entrar en ilusiones a la gente cuando después la realidad de esta normativa en nada condice con la realidad.

Desde este perfil yo no puedo dejar de reconocer que algunas críticas que se han formulado desde el sector asegurador son importantes. Se trata de un sector que, como todos los de la República Argentina, tiene sus luces y sus

sombras, pero a esta altura del avance de factores externos debería merecernos alguna preocupación la incorporación de los capitales nacionales en un negocio de particular relevancia como es el de los seguros.

Veo realmente que aquí no sólo no se ha escuchado la opinión de la gente que conoce del tema sino que ni siquiera se ha recurrido a las bases actuariales y de información empírica necesarias para que un proyecto de ley pueda defenderse seriamente. Así, se ha hablado de que es una aspiración de este proyecto que la cuota promedio de su costo esté por debajo del 3 por ciento del costo de la nómina salarial; y esto no tiene ninguna fundamentación seria, es una ilusión, como es toda una ilusión esta iniciativa que aparentemente está impregnada de modernismo pero que carece en este aspecto de otra solvencia que no sea la de generar, como se ha dicho por parte de otros oradores en esta sesión, un nuevo fondo de capitales con la esperanza de que el ahorro interno argentino venga a cubrir un poco con su sacrificio los efectos "tequila", o como se los quiera llamar, cuando cualquier avispado de la Argentina hubiera advertido hace más de un año que el aumento de la tasa de interés internacional iba necesariamente a derivar en esto. Esta necesidad de crear a través del sacrificio de los argentinos fuentes de capital, era lo que realmente debió plantearse como objetivo de esta norma, y no hacer ilusionar a la gente en que va a tener mejores coberturas en los riesgos del trabajo que las que hasta ahora se han dado.

Hay un doble sistema de control. Se crea otra superestructura con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y para colmo se le acopla la natural competencia de la Superintendencia de Seguros. Si analizamos la historia de los controles en la Argentina veremos que, cuando hay dos controles con competencias bastante confundidas, los controles chocan entre sí y se crea un nuevo conflicto de competencias o pasa algo más sencillo y fácil: ninguno de los dos organismos de control cumple con su misión y se cae en el más absoluto descontrol, que es lo que va a pasar con esta ley.

Se ha dicho que esta ley va a corregir la sobrecarga de tareas que pesa sobre el fuero del trabajo. Creo que realmente el que conozca los resultados de la ley que ahora se deroga, la 24.028, deberá reconocer —más allá del juicio que nos merezca esta legislación— que precisamente esta normativa es la que ha atenuado en gran forma y en última instancia los problemas de agobio que sufre el fuero laboral,

que son consecuencia de otras leyes que precedieron en su vigencia a la que hoy se pretende reemplazar.

En definitiva, no quiero resaltar más aspectos que estas cuestiones que, en mi concepto, devienen en que este sistema, más allá de las proclamaciones del ministro responsable que lo ha impulsado y de lo que se pretende dibujar frente a la sociedad, carece de bases técnicas serias y no va a mejorar la situación actual.

Desde el punto de vista de la irregularidad planteada de no dar cabida en el debate a la comisión específica, correspondería votar aquí la vuelta a comisión. De no procederse así, y de manera coherente con los extensos y sólidos argumentos vertidos por los señores diputados de la oposición en esta crónica parlamentaria, adhiero al rechazo en general de este proyecto.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Digón. — Señor presidente: estamos ante una modificación sustancial que se propone introducir al sistema establecido por la ley 24.028.

La vigente es una ley tarifada en la que el trabajador percibe una suma de dinero compensatoria de la incapacidad sobreviniente en caso de accidente o enfermedad, con el grave perjuicio de que si bien se establece el pago inmediato, de hecho ni las empresas reconocen los accidentes o enfermedades ni las compañías de seguro los liquidan rápidamente, quedando el trabajador expuesto a los resultados de un largo juicio para poder percibir el pago.

La idea de crear un sistema integrado de reparación como el que se propone es loable, ya que se habla de que sea universal, integral e integrado, pero tal como está regulado adolece —para quien habla— de algunos defectos.

En primer lugar, al permitir el autoseguro en el caso de determinadas empresas, según su solvencia y con las limitaciones de la reglamentación, se conforma un sistema que debería ser obligatorio. En realidad es obligatorio para los trabajadores y voluntario para los empleadores, lo cual lo torna inequitativo.

En segundo lugar, para ser un régimen integral que excluye el reclamo judicial limitándolo al cuestionamiento del grado de incapacidad exclusivamente, tiene prestaciones muy bajas.

En tercer lugar, se limita el reclamo de los trabajadores de la reparación integral del daño por la vía de la llamada acción civil, haciendo desaparecer la responsabilidad objetiva del empleador y dejando sólo la acción para el supues-

to de delito civil. De esta forma, además impide al trabajador el ejercicio de la legítima defensa de sus intereses, lo cual es inconstitucional, ya que prohíbe hacer a una categoría de personas —en este caso los trabajadores— lo que permite a todos.

Si un trabajador sufre un accidente de tránsito podrá reclamar una reparación integral, pero si ese accidente ocurre en el lugar de trabajo ve limitado en extremo el ejercicio de su derecho. Esto es totalmente injusto.

En cuarto término, y en cuanto a su financiamiento, se limitan las prestaciones en beneficio del trabajador con el único propósito de mantener como techo un porcentaje del 3 por ciento de la masa salarial en concepto de pago a cargo del empleador, sin que existan estadísticas —y esto para mí es muy grave como creo que lo es para todos— que indiquen el porcentaje de incapacidades conforme con las características de cada actividad de referencia.

En quinto lugar, cuando la ley trata de unificar las prestaciones con las correspondientes a la seguridad social, en algunos casos supuestos quedan paralelamente absorbidas por otras.

El capital complementario que debe integrar la administradora de riesgo del trabajo sólo tiene cierta lógica cuando hablamos del sistema de capitalización con cuentas nominadas, pero no beneficia al trabajador ni a sus herederos si éste continúa en el sistema solidario o de reparto.

Estas son algunas objeciones al proyecto que si bien puede estar bien intencionado, adolece de deficiencias de tal nivel que no justifican arriesgar la vida y la salud de los trabajadores para un cambio que parece signado por el fracaso.

Los trabajadores tenemos pérdida del poder adquisitivo del salario; tenemos pérdidas de empleo y ahora también pérdida de la salud. Lo que plantea muchas veces el señor ministro de Economía —la baja en los costos laborales— es nada más que a expensas del trabajador. Parece que no se tienen en cuenta los servicios, los fletes ni el dinero caro. Por lo tanto, dejo constancia de mi voto negativo respecto de este proyecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Di Tulio. — Señor presidente: en primer lugar, quiero plantear una cuestión que si bien no se vincula con el tema que estamos considerando se relaciona sin dudas con la vida de esta Cámara de Diputados.

Estoy convencido de que ninguno de los aquí presentes es suicida; por lo tanto, no deberían la cuenta. No podemos seguir debatiendo nor-

mas tan trascendentes como ésta sin la presencia de los legisladores en el recinto, imprescindible para tratarlas. Tampoco podemos darnos el lujo de tener los palcos vacíos. Voy a cumplir cuatro años en esta Cámara y debo decir que no es la primera vez que hago este planteo. Esto nos hace mal y permite que hombres autoritarios como el ministro Cavallo sigan avanzando sobre la tarea que realizamos los representantes del pueblo.

Sería bueno que estuvieran presentes también los sectores interesados en este tema como ocurrió en otras oportunidades en que brindaron su apoyo a los diputados que defendían los intereses de los trabajadores o de aquel sector al que se vinculaba la norma en estudio.

Creo que no podemos darnos el lujo de seguir sesionando en esta Cámara vallada y protegida por la policía como lo estuyo en días pasados y con la presencia únicamente de los legisladores, sin que nadie pueda ver quiénes son los que trabajan y quiénes no. No tolero que los comunicadores sociales injustos, obscenales con el gobierno y "chupamedias" permanentemente utilicen los medios de comunicación para agraviar a los diputados y al cuerpo.

Ahora sí voy a entrar al tema en cuestión. La norma como la de flexibilización laboral pretende disminuir el costo laboral. A juicio de los hombres de la Unión Cívica Radical la iniciativa que estamos considerando viene a poner de rodillas a los trabajadores como muchas de las leyes que se han sancionado en este Congreso, mientras el Poder Ejecutivo propone normas laborales que borran los derechos de los trabajadores.

Nos damos el gusto en la República Argentina de tener ejecutivos ranqueados en el segundo lugar en el mundo, entre los que más cobran. Primeros están los mexicanos, segundos los argentinos, terceros los patrones que eligió este gobierno, los norteamericanos, cuartos están los brasileños y después aparecen los de Singapur, Honduras, Venezuela, Alemania, Italia, España, Canadá, Australia, Suiza, el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Japón y Suecia.

¡Los empresarios argentinos, segundos! ¿Cuándo, compañeros del bloque oficialista, compañeros peronistas, podremos tener la grata alegría de decir que podemos exhibir ante el mundo que tenemos los trabajadores que más ganan, como ha sido en otras épocas, y no claudicar como claudican?

Se nos ha dicho que para resolver los problemas de la desocupación de nuestros trabajadores teníamos que privatizar las empresas

más importantes que tenía la Argentina, como YPF, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas y muchas más. Se decía que con lo recaudado se iba a pagar la deuda externa; sin embargo, la deuda externa aumentó y el ministro Cavallo sigue atropellando y diciendo a la gente que vamos bien, cuando en realidad la deuda externa se incrementó en 40 mil millones de dólares a partir de las privatizaciones que se llevaron adelante. Tenemos más deuda externa y mayor desocupación en la Argentina y encima este Parlamento se da el gusto de sancionar leyes contra los sectores más desprotegidos.

Aquí se ha dicho que para el estudio de este proyecto de ley que estamos considerando se ha logrado la participación de los sectores involucrados; también se dijo que eso no es cierto y en realidad no lo es porque no se permitió a los sectores involucrados dar su opinión al respecto.

¿Saben cuál es el grave problema que tenemos en la Argentina? En esto quiero agradecer a mi compañero de bancada, el doctor Rodolfo Terragno, por poder decir que el problema que tenemos es la deuda externa, que hoy muchos compañeros no quieren reconocer.

En junio hay que pagar 519 millones de dólares. ¿Qué se vendió? SEGBA, Central Puerto, Central Costanera, Central Dock Sud, Central Pedro de Mendoza, EDENOR, EDESUR. El total de la recaudación es de 506 millones de dólares, o sea, saldo en contra de la Nación Argentina. Entonces, los que tienen que pagar son los que menos tienen.

En julio hay que pagar 461 millones de dólares, 261 de capital y 200 de intereses. ¿Qué se vendió? Agua y Energía, Central Alto Valle, Central Corrientes, Central Sorrento, Central San Nicolás, Central del Noroeste, Central Patagonia, Central del Litoral. ¿Qué suma se logra? 204 millones de pesos; pierde de nuevo el Estado 237 millones de dólares y tienen que pagar los que menos tienen, es decir los trabajadores.

En agosto, la Argentina debe pagar 340 millones de dólares, de los cuales 199 son de capital y 141 de intereses. Se entregó Metrogás y otra vez pierde la República Argentina.

En septiembre deben pagarse 898 millones de dólares, 349 de capital y 549 de intereses. ¿Qué se entregó? Hidronor, Piedra del Aguila, El Chocón, Alicurá, Cerro Colorado. Total de lo recaudado por esta entrega: 746.600.000 dólares, pérdida para la Nación Argentina.

En octubre, noviembre y diciembre hay que pagar 3.299 millones de dólares, y con la entrega del patrimonio nacional se recaudan 3.040

millones de dólares. Esta es la realidad, la única, aunque a muchos compañeros no les guste, pero yo, que me he solidarizado con los 26 puntos de la CGT cuando éramos gobierno, tengo autoridad moral para plantear esto y recordar con sumo respeto que en ese documento, bajo el título "Propuesta nacional. Deuda externa", se dice: "Establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa en razón de necesidades vitales, para aplicar todos los recursos nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional".

¿Por qué no planteamos eso, compañeros? ¿Por qué no tenemos en cuenta esto, que ha permitido que el sector del trabajo fuese solidario en todos los reclamos que permanentemente han formulado? No es posible que pretendamos sancionar una ley, como seguramente sucederá, a raíz de la cual los familiares del trabajador que pierda su vida van a cobrar 56 mil pesos.

Tenemos el gusto de decir que en el ranking mundial de ingresos, nuestros empresarios figuran en el segundo lugar; seguramente ese nivel de ingresos está dado en gran parte por lo que no pagan a los trabajadores.

No es posible que mientras los familiares de aquella persona que muere al ser atropellada por un auto cobran un millón de dólares, por la muerte de una persona que trabaja con los equipos de perforación o de terminación, en el socavón de Sierra Grande o de Río Turbio sacando carbón —donde existen accidentes en forma permanente—, sus familiares cobren nada más que 56 mil pesos.

¿Cómo es posible que a aquellos compañeros que se les comprueba una disminución física se les aplique una reducción salarial en función de esa disminución? No es posible que alguien crea que esto es justo para los trabajadores. Sabemos que a los 40 años de edad el hombre que ha trabajado en perforación, en terminación, en el piso de enganche o en la boca del pozo, tiene una columna vertebral semejante a la de una persona de 70 años. Esto está demostrado, no es una ocurrencia de Héctor Di Tulio.

Compañeros: ¿cómo es posible que para justificar la desocupación tengamos que tratar leyes como ésta? ¿Dónde están, compañeros del justicialismo, ustedes que tanto enarbolan...

**Sr. Presidente** (Durañona y Vedía). — Señor diputado: sírvase dirigirse a la Presidencia.

**Sr. Di Tulio.** — Disculpeme, señor compañero presidente. (Risas.)

¿Cómo es posible que no tengan presente lo que dijo el general Perón, y que yo recordara

en otra sesión! Decía Perón: "La economía libre de mercado sólo son afirmaciones para el consumo de los tontos o de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre; o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste".

Seguramente, señor presidente, usted no comparte esto; pero supongo que los compañeros del bloque justicialista sí lo comparten. Yo lo sigo defendiendo. La Declaración de la CGT en el Plenario de Secretarios Generales y Delegaciones Regionales, en oportunidad de considerarse los 26 puntos para la reivindicación del sector del trabajo, dice: "La democracia comienza en el derecho de todos los argentinos a trabajar".

¿Cómo es posible que nos olvidemos de esto? ¿Cómo es posible que nos engrepanos, que pretendamos hacer creer a la gente y a los medios de comunicación que esto es lo más justo? Entiendo que no debe ser así. En torno de esto hay especulaciones, y por eso mis compañeros oficialistas no están aquí para dar batalla en el tratamiento en general de este proyecto de ley, que entrega al sector más desprotegido. Perdóneseme si utilizo alguna expresión que no corresponde, pero llegará el momento en que dirán al trabajador: "Ponete en cuatro patas y bajate los pantalones que vas a cobrar". A esto vamos a llegar. No lo digo en forma peyorativa sino porque realmente creo que vamos hacia eso, pues veo que se eludica permanentemente.

Desde sectores del oficialismo todavía nos dicen: nos han ratificado con el 50 por ciento. Esto es soberbia. Deberían ser más humildes para que en lugar del 50 por ciento fuese el 80 por ciento de la población el que acompañe al gobierno en defensa de los trabajadores. Pero aquí lo único que se hace es defender los intereses de los que más tienen. Por eso no es casual esta publicación del día de hoy, del *ranking* de la plata que cobran los empresarios argentinos, en desmedro de los trabajadores.

En la consideración en particular, seguramente los compañeros de mi bancada podrán discutir cada uno de los puntos de este proyecto. Espero que los compañeros del justicialismo estén presentes en ese momento.

Para terminar quiero decir algo que tiene que ver con las privatizaciones de las empresas del Estado, que muchos justicialistas decían que había que privatizar porque eran deficitarias. Muchas de ellas, siendo del Estado, tenían el mismo presidente corrupto: antes daban pérdida, y luego de las privatizaciones, impresio-

nantes ganancias. Esto no nos tiene que pasar nunca más. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso. — Señor presidente: deseo referirme específicamente a las cuestiones penales que están insertas dentro del despacho, habida cuenta que, como ya lo señaló el señor diputado D'Ambrosio, la Comisión de Legislación Penal no ha tenido intervención en el despacho de este dictamen, a pesar de que en un capítulo especial se prevén sanciones que van de los dos a los seis años de prisión.

De todas formas, sea cual fuere el monto de la pena, estamos hablando de la tipificación de delitos. En consecuencia, lo menos que podemos esperar es la intervención de la comisión específica en esta materia: la de Legislación Penal.

Hay dos normas que se refieren a cuestiones penales; una es el artículo 32, y otra es la disposición adicional tercera incluida en el artículo 49 del dictamen en consideración. En términos generales, y sin perjuicio de las consideraciones que haremos en el tratamiento en particular, lo que ahora debemos señalar es que no se describe adecuadamente la conducta penal sancionable. La norma se refiere genéricamente al incumplimiento de las prestaciones establecidas en esta ley. Algunas de esas obligaciones —suponemos— son las que resultan del artículo 20 del despacho. Me pregunto si realmente es sancionable con una pena de dos a seis años de prisión, por ejemplo, no proveer una prótesis, que es una de las obligaciones que tiene la ART. Se me ocurre que en términos comparativos estaría cometiéndose un exceso realmente desproporcionado.

Citando algunas normas comparativas, recuerdo que estamos frente a una pena similar, en términos generales, a las previstas como severas en la ley penal tributaria y previsional. Además, se asemeja a las penas previstas en los artículos 172 y 173 del Código Penal para la defraudación; lo mismo ocurre respecto de las penas para el homicidio en estado de emoción violenta, para el abandono de personas, para el estupro o para los delitos contra la seguridad pública, como es el caso de incendio y estragos —artículo 188 del Código Penal— o sedición, artículo 229 del mismo código.

Realmente estamos hablando de delitos graves y de conductas penalmente sancionadas con penas muy severas equiparables a esta especie de incumplimiento de obligaciones como puede ser el caso de no proveer el servicio fúnebre.



No pensamos en las cuestiones de tipo penal que esta desproporción nos va a acarrear, pero quiero señalar algunos aspectos más que en términos generales nos merecen observaciones. La ley no define, como es aconsejable, quién es el obligado en materia penal. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona jurídica quiero recordar a los señores diputados que la ley penal tributaria en su artículo 12 define con precisión de qué modo podemos o debemos sancionar las conductas incurridas en caso de que las infracciones provengan de las personas jurídicas. Aquí no se dice absolutamente nada de eso.

Por otra parte, no se establece fehacientemente, desde el punto de vista penal, cuáles son los deberes que deben cumplirse para dar origen a las acciones penales que prevé la ley. En términos genéricos se hace mención al incumplimiento de las obligaciones, pero dentro de esas obligaciones están algunas como las que señalé y puede haber otras a las que no me voy a referir todavía.

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1.º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

**Sr. Fragoso.** — A manera de síntesis quiero señalar que, como decía Soler, la forma más insidiosa de derogar el principio constitucional de que no hay crimen sin ley consiste en definir delitos no definidos como tipos de acción o trazados como tipos penales abiertos. Me parece que es una síntesis adecuada de la falencia esencial de la norma penal que se propone, que seguramente hubiera sido corregida si hubiera tenido intervención la Comisión de Legislación Penal.

Para concluir voy a leer textualmente —por que seguramente va a provocar en algunos casos una reacción graciosa y en mí una profunda preocupación— la forma en que ha sido redactado el inciso 2 del artículo 32 y el inciso 3 del mismo artículo.

Del inciso 2: “Si el incumplimiento del empleador consistiera en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, será sancionado conforme lo prescrito por la ley 23.771...” —ley penal tributaria provisional— “...por el Código Penal y por la ley 11.693”. O sea que para esta conducta penal se hace referencia a tres normas.

El inciso 3 dice lo siguiente: “El incumplimiento de las ART en el pago de las prestaciones a su cargo o en el pago de los aportes a los fondos creados por esta ley, será sancionado conforme con lo prescrito por la ley 23.771, del

Código Penal, y por la disposición adicional tercera de esta ley”.

Me pregunto si estamos en presencia de un concurso de delitos o intentando meter cualquier cosa residual que pudiera haber en materia de infracción o de incumplimiento de esta ley.

Estas son reflexiones de naturaleza general, sin perjuicio de que en el tratamiento en particular propondremos las soluciones que corresponden a este tema.

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

**Sr. Nieva.** — Señor presidente: seré breve toda vez que el señor diputado Alcides López y otros integrantes de mi bancada han hecho precisas objeciones que apoyan la postura de la Unión Cívica Radical con relación a este proyecto de ley.

Cuando estamos viviendo en un marco de crisis económica y hasta se admite por el gobierno que el último índice de desocupación rondará el 14 por ciento, porcentaje que indicaría que la desocupación llegaría a una cifra cercana a los dos millones de personas; cuando en el marco de un proceso de recesión de la economía argentina aparece como dato de la realidad éste de la desocupación en aumento, el gobierno insiste en esta política que según se dice es para combatir la desocupación por medio de un proyecto de ley que integra lo que se ha denominado el paquete laboral.

El proyecto de ley sobre riesgos del trabajo que estamos considerando viene a modificar una legislación muy antigua. Hace ochenta años se sancionaba en la República Argentina aquella famosa ley 9.698 que con sucesivas modificaciones vino a cubrir este aspecto de la legislación, que es la que atiende la reparación de los infortunios laborales.

La última modificación a esa legislación que se inspiraba en la responsabilidad objetiva del empleador para cubrir aquellos infortunios laborales es la ley 24.028 que tratara esta Cámara hace poco más de tres años.

Se han expresado por algunos legisladores como Estévez Boero y Alcides López las razones sustanciales en virtud de las cuales consideramos que esta iniciativa es gravosa para los trabajadores. Por ese motivo desde la Unión Cívica Radical venimos a oponernos a la sanción de este proyecto.

Analizaré las razones que se exhiben desde el justicialismo para impulsar este proyecto de ley, porque cabe decir que frente al problema de la desocupación desde hace mucho tiempo estamos escuchando el mismo “verso”. El gobierno sostiene que si bien la economía argen-

Una ha estado creciendo, no ha sido capaz de generar nuevos puestos de trabajo para cubrir las necesidades de los jóvenes que ingresan a la población económicamente activa, debido a que hay rigideces en la legislación laboral que impiden la creación de nuevos puestos de trabajo.

El señor diputado Borda ha dicho que esta iniciativa es producto de un acuerdo denominado pomposamente Acuerdo Marco para la Producción, el Crecimiento y la Equidad Social, logrado el 25 de julio de 1994. En aquella oportunidad y para fundarlo el señor ministro de Trabajo sostenía que este paquete de leyes laborales era producto del consenso del sector del trabajo, la Unión Industrial Argentina y el gobierno para reducir los costos laborales, y agregaba: "...para eliminar aquellas rémoras de la legislación que habían quedado anquilosadas en el tiempo y que impedían la creación de nuevos puestos de trabajo".

En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña a este proyecto de ley se abunda en las mismas consideraciones. Se hace una crítica al sistema actual y se afirma que la legislación laboral ha tenido un impacto negativo sobre el mercado de trabajo, especialmente en la incapacidad para generar nuevos empleos. Se recurre a esta idea de la flexibilidad laboral como el camino imprescindible para revertir la tendencia de la desocupación creciente.

Incluso, en el acuerdo-marco se citan experiencias internacionales en la materia. ¿Qué ha pasado en otros países con leyes como las que estamos considerando en esta Cámara? La flexibilidad laboral ha fracasado en Europa en su intento por reducir el desempleo. En España, por ejemplo, la flexibilidad laboral no ha generado nuevos puestos de trabajo. En ese país —lo han reconocido los propios actores sociales— ha cambiado la condición jurídica de los contratos laborales que se celebran. En la actualidad, un 80 por ciento son contratos precarios, que no han generado nuevos puestos de trabajo.

Todos saben que para aumentar el empleo la economía debe crecer. Incluso, en los últimos tres años la economía argentina vivió un proceso de crecimiento —a partir del aprovechamiento de condiciones favorables internas, como la estabilidad, y también internacionales—, pero aumentó la desocupación. Las políticas que tienden a la flexibilización han fracasado para generar empleo.

Nadie cree seriamente que la economía argentina pueda aumentar el empleo en estas condiciones. Sin embargo, estas leyes laborales han sido enviadas al Congreso y están siendo aprobadas con el apoyo de la bancada oficialista. Con ellas se trata de reducir los costos laborales

de las empresas, a fin de evitar disminuir el efecto de otras variables de la economía, como el tipo de cambio o el costo de los servicios.

Con las leyes de flexibilidad laboral —como admirablemente lo ha dicho el señor diputado Digón—, la variable de ajuste son los derechos de los trabajadores. El argumento que se explica para defender estas iniciativas es el siguiente: "Vamos a disminuir los derechos de los trabajadores. Hagamos más fácil el despido y menos costosa la indemnización por accidentes laborales. Así los empresarios crearán más fuentes de trabajo". Esto no es así y no lo cree nadie.

Lamentablemente, el proyecto es coherente con el modelo económico que se impulsa desde el gobierno. Corresponde a la política de concentración económica y al modelo de distribución del poder y de la riqueza en la Argentina. Sirve al modelo social que está en organización, pero no es compatible con el combate de la desocupación ni con los derechos de los trabajadores.

Desde hace mucho tiempo este gobierno viene impulsando sus políticas a partir de plantearlas como opciones de hierro, en el sentido de que no hay otro camino. Frente a la crisis de la economía, la única salida que teníamos eran las privatizaciones. El problema fiscal del Estado se solucionaba con la venta y la enajenación de su patrimonio. Así nos fue y así nos va. En este aspecto recién hemos escuchado los datos del señor diputado Di Tulio.

En el tema laboral se nos dice que éste es el único camino posible, lo que no es verdad. La globalización de la economía y la modernización de las relaciones laborales no pasan por la reducción de los derechos de los trabajadores o por su precarización. Es cierto que éste es un modelo coherente y que estas leyes son coherentes con el modelo político y económico que lleva adelante el gobierno. Pero lo que exigimos es que los diputados de la bancada justicialista asuman frente a la sociedad los intereses que realmente están defendiendo en este caso, y que no son los intereses de los trabajadores. Estas leyes protegen determinados intereses y castigan otros. Hay beneficiarios y castigados. Nadie puede negar, a la luz de esta norma que estamos estudiando, que los que se perjudican son los trabajadores. Por lo menos seamos claros frente a la sociedad y digamos que se ha apostado desde el gobierno a un modelo social y económico que está excluyendo a los trabajadores. Nosotros afirmamos esto y no creemos que haya argumentos para que nos nieguen que este régimen es gravoso para los trabajadores.

Como se ha dicho, el proyecto elimina la reparación de los daños emergentes de las en-

fermedades y los accidentes de trabajo, salvo los que produzcan una incapacidad inferior al 20 por ciento. ¿Por qué decimos que hay una merma en la compensación a los trabajadores, sin entrar a considerar el artículo 16 que habilita al trabajador incapacitado a negociar salarios inferiores? ¿Quién puede negar que esta ley es gravosa para los trabajadores si de acuerdo con el sistema vigente se indemniza todo tipo de incapacidad y según este proyecto las incapacidades más serias, superiores al 20 por ciento, son sólo compensadas con un pago mensual que no repara la pérdida de salario del trabajador incapacitado? ¿Quién puede negar que esta ley es gravosa para los trabajadores si frente a la incapacidad total o la muerte el trabajador sólo tiene derecho a una jubilación o sus causahabientes derecho a una pensión, mientras que por el sistema vigente tiene derecho a una indemnización, tarifada es cierto y hasta 55 mil dólares, pero con la posibilidad además de gestionar la jubilación o sus causahabientes la pensión correspondiente?

¿Quién puede negar que estamos frente a una ley que grava los derechos de los trabajadores cuando desaparece la posibilidad de reclamar por la vía ordinaria la reparación integral del daño? Este es un tema central. El señor diputado Alcides López ha expresado bien que frente a un hecho ocurrido en una empresa en el que sufre un daño un trabajador y sufre un daño una persona desvinculada, ésta puede ocurrir por la vía del derecho civil y obtener una indemnización mucho mayor mientras que el pobre trabajador simplemente obtendrá una prestación de pago mensual, en proporción al porcentaje de la incapacidad y al ingreso base, que en ningún caso compensará la pérdida de su salario mensual.

El tema de las enfermedades es otra prueba evidente de que estamos frente a una norma que desprotege al trabajador. Mientras hoy no existen limitaciones, ahora se pretende que para que una enfermedad sea reconocida se encuentre comprendida en un listado. Todos sabemos que la realidad supera lo que puede compendiarse en un listado de enfermedades. Conocemos el flagelo de las nuevas enfermedades; sin embargo, este proyecto limita la protección por enfermedades a aquellas que enumere la autoridad de aplicación.

En cuanto a las comisiones médicas, no sólo decidirán sobre las incapacidades sino sobre el carácter o naturaleza laboral del accidente. Además, y ésta es una cuestión que afecta a los hombres del interior de la República, esas

resoluciones son recurribles frente a la Cámara Federal de la Seguridad Social. ¿Qué pasa con el trabajador del interior de la República? Va a ver mermada su capacidad de seguir pleytando para obtener el reconocimiento de sus derechos.

Hay muchas cuestiones para mencionar; yo hice una enumeración global porque los señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra han sido muy precisos. Simplemente quise ejemplificar y mostrar que no hay duda de que esta iniciativa tiene beneficiarios y perjudicados, y realmente los perjudicados son los trabajadores. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: hemos desarrollado una larga jornada analizando este complejo y al mismo tiempo trágico tema, dadas las consecuencias que va a tener. Se han dicho muchas cosas; se han expresado pensamientos dirigidos a analizar minuciosamente los aspectos técnicos del proyecto en cuestión. Aquí se han hecho análisis políticos profundos, análisis económico-financieros, y se ha estudiado la factibilidad de la aplicación de esta norma.

Lamentablemente todas las exposiciones se han hecho con el recinto casi vacío. Cuando nosotros planteamos una discusión profunda y pormenorizada en comisión de este proyecto de ley lo que queríamos era profundizar en el tema, que se nos escuchara, que se oyeran nuestros puntos de vista para tratar a través del disenso y la discusión de encontrar denominadores comunes, a efectos de acercarnos a algo que tuviera algún sentido práctico y que no afectara los intereses de la gente.

Es por esta razón que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar en contra del despacho, y también es por esta razón que este bloque no tiene un dictamen; ni siquiera hemos firmado en disidencia parcial o total. Como hoy lo decía el señor diputado López nos retiramos de la comisión porque no fuimos correspondidos en el pedido de ser escuchados y de llevar adelante la ronda de consultas con los actores sociales que se ven involucrados en este tema tan complejo y que nos pueden aportar elementos de juicio que son fundamentales para poder acercarnos a la verdad y al perfeccionamiento en la aplicación de la norma.

Era muy importante escuchar a los sectores sindicales, sectores empresarios, abogados laborales, compañías y cámaras del seguro; hoy estamos recibiendo opiniones totalmente descontradadas porque no han hallado en el acuerdo marco firmado entre el gobierno, la CGT y los

empresarios un consenso que permitiera compatibilizar los distintos intereses. En caso de ser sancionada, esta norma se verá con serias dificultades en su aplicación.

Por ese motivo nos retiramos de la comisión, pero hoy hemos venido en la inteligencia de vertir nuestras opiniones y buscar la forma de llegar a un consenso para ser escuchados en algunas reflexiones que consideramos fundamentales. Estamos a tiempo de ser escuchados; todavía no es demasiado tarde.

Una vez que se ponga en marcha la soberbia de los números con el voto afirmativo y se deje cerrado este capítulo aparecerán las consecuencias perniciosas para los trabajadores y también para algunos sectores empresarios que no alcanzan a comprender que los únicos beneficiarios de este proyecto serán las aseguradoras que, tal como hicieron las administradoras de jubilaciones privadas, vendrán al país y se instalarán de la mano de un proyecto económico para acceder a un interesante mercado de capitales sin importar en qué situación quedan los argentinos, ni qué ocurre con la seguridad y la previsión social, lo cual se relaciona indudablemente con el sistema de organización de nuestra República ya que se vincula con roles que el Estado jamás debió delegar.

No apoyamos esta norma porque no compartimos su filosofía, porque se aparta de la política de la solidaridad social; se emplea la filosofía del mercado y a partir de aquí son las reglas del mercado las que comienzan a regir. El mercado es el centro más importante de la discusión y el hombre desaparece o queda en un segundo plano en el que prácticamente se lo considera como a un objeto.

Además, hacemos un cuestionamiento desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, debemos señalar que esta norma es violatoria del artículo 14 bis de nuestra Constitución, que otorga al Estado el deber fundamental de velar y mantener la seguridad social en el país.

Por otra parte es violatoria del artículo 16 porque rompe el principio de la igualdad ante la ley porque considera distintas categorías de ciudadanos. Quien sufre un accidente en su lugar de trabajo es tratado de una manera totalmente diferente de aquél que sufre el mismo accidente en ese lugar pero sin estar en relación de dependencia. En este último caso, el individuo será atendido en otro fuero, según las prescripciones del derecho civil.

Este proyecto comienza diciendo que es aplicable a todos los funcionarios y empleados de la administración pública nacional, provincial y

municipal y de esta manera incurre en una violación del principio fundamental de la base de organización de nuestra Nación, que es el sistema federal. En lugar de haberse dirigido a los estados provinciales en forma imperativa obligándolos a acatar sus normas, se debió haber invitado a esas jurisdicciones a adherir a esta propuesta mediante el correspondiente tratamiento y aprobación de sus respectivas Legislaturas. Esto era fundamental para no romper el equilibrio y el sentido federal de nuestra Constitución.

Tenemos que hacer algunas observaciones desde el punto de vista técnico. Creo que fueron ya profundamente analizadas y no voy a abundar en demasiadas consideraciones porque considero que el señor diputado Alcides López fue lo suficientemente claro cuando hizo el bosquejo sobre el sentido y el espíritu del proyecto, y cuáles eran las discrepancias de esta bancada.

Salvo el señor miembro informante, la mayoría de los legisladores coincidieron en estos puntos de vista que reflejan a las claras que esta iniciativa adolece de algunas fallas fundamentales, dado que hasta el momento no he escuchado coincidencia con respecto a la norma que se está proponiendo. Todos entendemos que en el análisis aritmético de cada uno de los estados de incapacidades, invalidez, muerte, accidente o enfermedad hay una baja en la retribución del resarcimiento; hay un tratamiento injusto para el damnificado que no es retribuido por el daño físico y moral que ha recibido dado que va a percibir una renta total inferior. Además se ha sacado su competencia del fuero civil, salvo el caso del dolo del empleador, pues se ha abandonado el principio de la responsabilidad objetiva de éste. Esto significa que no es más cabeza de responsabilidad y ella se vuelca a las aseguradoras de riesgo del trabajo.

Por otra parte las enfermedades no son analizadas con criterios médicos puntuales en cada caso, en cada reclamo o en cada instancia que se analice. Esto se va a manejar por medio de un decreto que aún no ha sido redactado por el Poder Ejecutivo y que tiene carácter imperativo y taxativo en lugar de ser enunciativo, punto referencial para tomar algunos casos y no cerrar el listado.

Con esta sanción se pasaría a una situación injusta porque infinidad de enfermedades provocadas por el trabajo y por las condiciones de salubridad o higiene en las que se desenvuelven los trabajadores no serán reconocidas.

Por lo dicho, solicitamos al señor miembro informante de la mayoría que revea este artículo, que es fundamental; o se hace este

listado en forma enunciativa o directamente se saca del cuerpo de la ley, porque esto va a generar infinidad de conflictos y una situación sumamente injusta ya que se van a cerrar las posibilidades de resarcir y hacer justicia con el damnificado o el trabajador que ha sufrido un gran perjuicio en su salud.

Este es un sistema demasiado engorroso y caro porque establece un procedimiento complicado. Inclusive notamos que hay vacíos legislativos, incoherencias y contradicciones. Sabemos cómo termina el análisis de estos temas: con un decreto reglamentario que finalmente no interpreta las cosas que dijo el legislador en el recinto ni refleja el espíritu de la ley sino el pensamiento del ministro de Economía.

Debemos tener cuidado y no dejar cables sueltos ni artículos redactados en forma ambigua porque después vamos a tener una ley mucho más perjudicial que la que hoy estamos analizando. Como ya se dijo en reiteradas oportunidades resulta realmente asombroso el mecanismo a utilizar; un mecanismo donde se tienen que resolver y decidir los grados de incapacidad e inclusive las cuestiones laborales y todo lo que hace al resarcimiento, a la indemnización o a la declaración de los grados de incapacidad, por estas juntas médicas que están formadas desde que se aprobaron las AFJP; y todos sabemos que las AFJP son primas hermanas de las ART.

Estas juntas médicas están al servicio de aquellos que en este momento están recaudando el dinero para hacer el negocio de los seguros. Y sin lugar a dudas estas comisiones médicas son parciales y dictaminarán en favor del interés de las propias aseguradoras. Nadie garantiza lo que puedan hacer estos equipos médicos, que incluso dictaminarán sobre cuestiones de salud pero también sobre cuestiones jurídicas.

Aparece aquí la novedad de que por primera vez se les otorga por ley atribuciones jurídicas a los profesionales médicos. Estos médicos y estas comisiones médicas no pueden ser juez y parte; los conflictos siempre deben ser dirimidos y definidos por terceros imparciales, que no estén comprometidos con la situación.

Cuando digo que el sistema es engorroso, quiero recordar que estas juntas médicas permiten una apelación a una junta médica central, que está en Buenos Aires, muy lejos de los trabajadores del interior. La instancia judicial no aparece y, cuando lo hace, todavía el trabajador tiene que pasar por una instancia obligatoria de conciliación. A pesar de que la

Comisión de Legislación del Trabajo modificó el proyecto del Poder Ejecutivo mejorándolo, todavía no me conforma porque aún siguen esas instancias administrativas que van demostrando la solución del conflicto. Por otra parte, nadie asegura ni garantiza que en el decreto reglamentario no se vuelva al espíritu y a la letra original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pues estas cuestiones no han quedado claras en la redacción del despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo.

Por último, la instancia judicial es algo novedosa, porque traslada los diferendos a las cámaras de la seguridad social, que tienen que definir sobre las cuestiones sociales y de la seguridad social y sobre asuntos laborales que están fuera de su conocimiento y competencia, que son temas para ser ventilados exclusivamente en la justicia laboral.

Hay una mezcla de competencias, pero además se elevan estos conflictos, para su análisis, a estructuras que no están preparadas. De acuerdo con una ley que no se podrá aplicar, las cuestiones van a ser derivadas a los juzgados federales para que ellos encarnen en todas las provincias la responsabilidad de estas cámaras de la seguridad social. Pero carecen de personal, no tienen las estructuras ni los elementos, no pueden recibir la cantidad de conflictos que van a aparecer cuando surjan las discusiones en materia de accidentes de trabajo.

Por eso tenemos que ser cuidadosos. Esto tiene un sentido; no es casual, no se trata de un error de redacción; se lo ha hecho complicando para que el damnificado nunca llegue a esta última instancia, para que se acobarde en los primeros pasos y acepte lo que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo le den, aunque sean monedas que no representan para nada su grado de incapacidad.

Por otra parte, el sistema para la asignación de las alícuotas puede llegar a significar una injusticia para los empresarios. Nadie asegura la equidad, a pesar de que la SRT es la que va a asignar estas alícuotas. Este es el planteo que incluso están formulando algunos sectores empresarios temerosos de que aquellos que tienen un bajo índice de siniestralidad paguen los costos de quienes generan demasiados conflictos en materia de accidentes y de enfermedades.

Ello puede dar lugar a situaciones engorrosas e injustas, en donde haya hijos y entenados. Quizá las pequeñas y medianas empresas se vean tremendamente perjudicadas por cuatro o cinco entidades que manejen un mercado especial de

ramos que generan muchos siniestros, como consecuencia de tener que absorber ese alto costo.

Podríamos enumerar muchos temas más, como por ejemplo el autoseguro. Al respecto, nadie nos garantiza el grado de solvencia futuro que tendrán las propias empresas que se van a autoasegurar. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene un rol de policía para el control y cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; pero ¿quién va a creer que estas compañías autoaseguradas ejerzan el poder de policía y controlen los niveles de seguridad e higiene en las empresas?

Allí vemos el abandono del Estado en su rol fundamental, porque estas sindicaturas de riesgos del trabajo reemplazan a la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. El Estado nacional nunca debió abandonar ese rol, porque se trata de una función indelegable, como lo dije anteriormente. El Estado nuevamente está abandonando uno de sus roles, como lo ha hecho en otras áreas de la economía, la salud, la educación y la previsión social. Hoy corona su abandono con la seguridad social en lo que se refiere a los riesgos del trabajo.

Proponemos que este tema sea analizado con seriedad. En tal sentido deberíamos determinar un período de transición, pues si no nos ponemos de acuerdo preferimos que continúe vigente la actual ley de accidentes del trabajo, y si es posible la ley 9.658, que era la mejor, la más equitativa y la que contemplaba más adecuadamente las necesidades y dificultades sociales.

Pero tampoco nos vamos a quedar en el pasado. Podríamos haber conversado en torno de la búsqueda de alternativas de solución para mejorar la legislación y este sistema. Para ello es importante entrar en períodos de transición, porque en caso de que este proyecto de ley llegue a ser sancionado, no será posible aplicarlo dado que existirán problemas de financiación y de instrumentación; no hallará las estructuras para poder desarrollarse, y los conflictos se multiplicarán a raíz de que la norma no será aplicada en forma inmediata.

Se han mencionado esta noche legislaciones comparadas. Se habló de la seguridad social existente en otros países del mundo. Me tomé el trabajo de chequear esa legislación comparada en materia de seguridad social, sobre todo en los países de Europa. He concurrido a seminarios y no he encontrado algo parecido a esto que estamos por sancionar, que es terriblemente claudicante, porque en los países en que funciona un sistema privado existe un régimen integral de salud y se contemplan todos los ries-

gos del trabajo y todo aquello que hace a la seguridad social; todos tienen un trato equitativo.

Cuando analizamos los temas de la seguridad social, el primer objetivo debe ser el de la salud del trabajador. El hombre debe ser el protagonista fundamental; debe ser la prioridad. Por supuesto que en este proyecto está totalmente al margen.

Cualquier ley que se vote tiene efectos inmediatos, pero esta no los tendrá. Queremos más presencia del Estado, que él sea planificador y director de la política de salud; que arbitre los medios, que ejerza el poder de policía y que legisle adecuadamente para que haya normas de seguridad e higiene en materia laboral, con lo que el trabajador podrá sentirse garantizado en ese marco donde desenvuelve sus tareas. Digo esto, porque una aseguradora de riesgo de trabajo no me ofrece ninguna garantía en el ejercicio de este poder de policía. Si el empleador hoy no tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y la higiene, o de invertir para mejorar las condiciones de trabajo, ¿qué podemos esperar ahora que la responsabilidad pasa por otra institución y el empleador ya no tiene más la responsabilidad objetiva del derecho civil?

Queremos una mayor participación sindical a través de las paritarias en lo que se refiere a los comités de seguridad e higiene. Es muy importante que exista una legislación adecuada que atienda el tema de la seguridad y la rehabilitación laboral.

Hoy han aumentado los accidentes y la siniestralidad a raíz de la gran precariedad que existe en todas las relaciones de trabajo, porque esta flexibilidad que venimos soportando de hecho, la polivalencia funcional, la necesidad de trabajar más de ocho horas diarias sin descanso semanal, y esta nueva modalidad de los contratos temporarios, donde se van reemplazando los trabajadores sin ninguna capacitación ni adaptación, constituyen las causas de la gran cantidad de siniestros y accidentes que se producen en las grandes industrias.

Hay que hacer hincapié en la modificación de una serie de leyes para que haya una mayor participación del trabajador en todos los cambios y transformaciones.

El tiempo no me alcanza para explayarme en demasía, pero no faltará oportunidad de que en este recinto hablemos de estas cuestiones. Aquí se trata de legislaciones a la baja, con pérdida de derechos por parte de los trabajadores y sin que se tenga en cuenta una normativa en la que el trabajador logre participación,

ya que es fundamental que sea protagonista y parte de todos los cambios tecnológicos y de la defensa de sus propios intereses y de su salud.

Tenemos que reglamentar sobre convenciones colectivas, comités de empresas, derecho a información y consulta, para dictar una legislación que permita una participación real y efectiva de los trabajadores, porque vienen tiempos difíciles. Aquí se ha dicho que lamentablemente —aunque no lo ha reconocido el señor ministro de Economía— estamos entrando en un período de crisis tremenda.

Hemos sancionado leyes de flexibilización laboral y sin embargo la desocupación ha aumentado en dos o tres puntos. Incluso los propios funcionarios reconocen que esa desocupación podría llegar en diciembre al 20 por ciento.

Finalmente, hago un llamado para que no sigamos legislando con un sentido de soberbia, donde la razón está de un lado y la mentira del otro. Tenemos que allanarnos a discutir en las comisiones y en el recinto, sin hacer oídos sordos en el momento en que se formulan propuestas. Tenemos que escucharnos y evaluar las consideraciones que se hagan para que exista una legislación adecuada que salve a la República y al pueblo argentino. *(Aplausos.)*

**Sr. Presidente (Romero, C. A.).** — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

**Sr. Gazia.** — Señor presidente: tal como ha dicho el señor diputado Novau, se han escuchado muchas cosas que prueban una vez más las diferentes maneras de analizar un mismo tema y llegar a conclusiones diferentes.

Sin reservas mentales, sin eufemismos y con tranquilidad de conciencia queremos manifestar que venimos a apoyar fervientemente este proyecto de ley para la regulación de la prevención de los riesgos y reparación de los daños derivados del trabajo.

Si bien la actual legislación en la materia —la ley 24.028— tiene sólo tres años de vigencia, es evidente que ha resultado insatisfactoria. Sin embargo, un cambio tan importante de sistema como el que se propone, en el que se da preferencia a las prestaciones reparadoras dinerarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual en lugar de sumas indemnizatorias globales, obliga a analizar profundamente la cuestión, atendiendo principalmente a los intereses de los trabajadores en general y, en especial, al de los trabajadores damnificados por un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Además, es necesario atender los intereses de los empleadores, en especial las PYMES, tanto en su carácter general de costeadores del sistema, como en el caso particular de afectados por un infortunio laboral.

En base a estas premisas expongo a continuación las razones por las que encuentro positivo el proyecto de ley que hoy nos está ocupando.

El primer interés de la comunidad laboral es, sin lugar a dudas, que los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sean los menos posibles. Para conseguir este objetivo considero que la prevención es el instrumento más eficaz, y el proyecto de ley que nos ocupa introduce normas que promueven e incentivan la prevención.

En efecto, el financiamiento de las aseguradoras de riesgos de trabajo está basado en la contribución patronal con alícuota no homogénea en función de los riesgos generados, de tal manera que será conveniente para los empleadores invertir en seguridad toda vez que a mayor seguridad será menor la alícuota de contribución al sistema.

También se instituye el denominado Plan de Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad, que deberá formar parte del contrato entre las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empleadores. A su vez, el Estado, a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, regulará las pautas y condiciones de estos planes, los plazos de cumplimiento y el régimen de sanciones. De esta manera, si se produce un accidente de trabajo o enfermedad profesional como consecuencia de un incumplimiento del plan de mejoramiento, el empleador deberá pagar una multa al Fondo de Garantía de hasta 30 mil pesos.

Otra de las razones que fundan este proyecto de ley es que además de las prestaciones dinerarias, de las que nos ocuparemos más adelante, el proyecto de ley mejora la cantidad y la calidad de las prestaciones en especie, toda vez que las aseguradoras de riesgo del trabajo deberán otorgar a los trabajadores damnificados las siguientes prestaciones: asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario.

En cuanto a la rehabilitación cabe destacar que el proyecto de ley distingue tres etapas en el proceso de incapacidad de los trabajadores damnificados: incapacidad laboral temporaria, de una duración máxima de un año; incapacidad permanente provisoria, de una duración de

36 meses, con posibilidad de ampliar este plazo en 24 meses más; e incapacidad permanente definitiva.

El proceso así estructurado implica un período de espera antes del dictamen definitivo, lo que incentiva la inversión en rehabilitación, ya que permite ajustar la evaluación de la incapacidad en función de la maduración de los tratamientos que recibe el trabajador.

En cuanto a la recalificación profesional, corresponde efectuar el mismo análisis, toda vez que las comisiones médicas determinarán el grado de incapacidad en base a la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales que elaborará el Poder Ejecutivo nacional y ponderará, entre otros factores, las posibilidades de reubicación laboral.

A su vez, el artículo 16 del proyecto regula el retorno al trabajo por parte del trabajador damnificado en el mismo o en distintos puestos de trabajo. Se podrá pactar un salario inferior, pero respetando las escalas salariales especiales para trabajadores damnificados, que se fijarán por negociación colectiva.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reimundo Pierri.

**St. Gazia.** — En ningún caso la suma de la remuneración salarial más la renta a percibir en concepto de incapacidad podrá ser inferior a la remuneración que corresponde a un trabajador no incapacitado en igual puesto de trabajo.

Por último, el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para reducir los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social en los supuestos de retorno al trabajo de trabajadores con incapacidad laboral permanente.

En cuanto a prestaciones dinerarias, se mantiene el criterio de indemnizaciones globales tarifadas a tanto alzado, solamente para incapacidades permanentes parciales cuando el grado de incapacidad sea igual o menor al 20 por ciento. En cambio, para las incapacidades de mayor grado se adopta el criterio de prestaciones dinerarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual, lo que a mi criterio genera una protección mayor para el trabajador damnificado y su familia, cubriendo sus necesidades de un modo permanente.

Cabe destacar que para el caso de incapacidad permanente total con un grado de incapacidad igual o superior al 66 por ciento o muerte, la renta a favor del damnificado o sus derechohabientes será equivalente al ciento por ciento de su ingreso base, lo que supone un importante avance protectorio sobre la legislación actual y

sobre el proyecto originariamente enviado por el Poder Ejecutivo, donde esta prestación ascendía al 70 por ciento del ingreso base.

Consideramos como otro argumento fundamental la automaticidad en el acceso a las prestaciones. El criterio sustentado por el proyecto de pago periódico mensual automático desde la primera manifestación del infortunio laboral y sin ninguna brecha durante el proceso de incapacidad, supone un avance muy significativo respecto de la situación actual, en la que la indemnización reparadora llega generalmente como consecuencia de un procedimiento judicial, después de un prolongado diferimiento, durante el cual el trabajador puede quedar sin posibilidad de trabajar y sin ningún pago periódico que permita su sustento.

En algunas observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda respecto de este proyecto de ley, nos ilustra una estadística obtenida de la Prosecretaría General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que revela la dificultad de cobrar las reparaciones en juicios ganados por los trabajadores. Desde la aplicación de la ley actual, la 24.028, prácticamente se duplicaron los juicios ganados por el trabajador, pero no puede cobrar sin ejecución, y en un 30 por ciento de los casos no cobra a pesar de la ejecución.

Como tema importante, el proyecto en análisis promueve la negociación colectiva, dejando materias disponibles a la autonomía de la voluntad colectiva, ya sea para definir medidas de prevención de los riesgos derivados del trabajo y del mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene, o para fijar escalas salariales especiales para trabajadores damnificados que retornen al trabajo.

Asimismo, en el marco de la negociación colectiva se podrán crear Aseguradoras de Riesgo del Trabajo sin fines de lucro, pero preservando el derecho de libre afiliación de los empleados comprendidos en el ámbito del convenio colectivo.

Por otra parte, se crea un órgano tripartito de participación denominado Comité Consultivo Permanente, presidido por el ministro de Trabajo e integrado por tres representantes del gobierno, tres de la CGT y tres de las organizaciones de empleadores. La autoridad de aplicación está obligada a consultar al Comité en diversos temas referidos al desarrollo del sistema, teniendo el dictamen del Comité carácter vinculante en las siguientes materias: listado de enfermedades profesionales; tablas de evaluación de incapacidades laborales; determinación del alcance de las



prestaciones en especie, e indicadores determinantes de la solvencia económica y financiera de las empresas que pretendan autoasegurarse.

En cuanto a la conflictibilidad laboral, el proyecto que nos ocupa regula un procedimiento que impone, como vía obligatoria, dictámenes de carácter administrativo por parte de comisiones médicas, reservando la alternativa judicial sólo para casos de excepción. De esta manera, además de reducir costos y mejorar la calidad técnica, el sistema coherentiza los criterios y agiliza la gestión.

Por otra parte, la tabla de evaluación de incapacidades ya referida constituye un instrumento de apoyo a la tarea de las comisiones médicas que permitirá obtener un criterio común de cuantificación del daño, con una definición precisa y objetiva de los presupuestos de hecho, eliminando interpretaciones subjetivas.

El proyecto en tratamiento consagra un sistema de seguro obligatorio para todos los empleadores que contraten trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación. La única excepción es la posibilidad del autoseguro, habilitado solamente para el Estado nacional, provincial o municipal y para aquellas empresas que acrediten solvencia económico-financiera y los servicios necesarios para garantizar las prestaciones dinerarias y las prestaciones en especie previstas en la ley.

Hubiera sido nuestra aspiración que no existieran excepciones al seguro obligatorio. No obstante, significa un importante avance la eliminación del no seguro que actualmente genera bolsones de desprotección.

Como instrumentos de tutela de los créditos de los trabajadores afectados se crean un fondo de garantía para financiar las prestaciones en los supuestos de insuficiencia patrimonial de los empleadores clandestinos y un fondo de reserva para financiar las prestaciones en el caso de insuficiencia patrimonial de una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART). Ambas fondos contarán con el control de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT).

En mi opinión, esta herramienta legislativa crea un marco favorable para la generación de nuevos puestos de trabajo, toda vez que el costo para los empleadores es fijo y previsible. Mediante la afiliación a una ART se logra una cobertura total ante cualquier accidente de trabajo o enfermedad profesional, sin que un siniestro laboral pueda tener un impacto negativo sobre la viabilidad de la empresa.

He votado con disidencias las leyes de flexibilización laboral por entender que no son la herramienta más eficaz para la creación de

empleo. En cambio, esta ley supone eliminar un impacto negativo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y habilitará a las empresas, muy especialmente a las PYMES, para generar nuevos empleos.

Por las razones enunciadas, estoy convencido de que la aprobación de esta ley beneficia a los trabajadores. Es un avance, un paso más, seguramente no el último. Una vez sancionada y promulgada, corresponderá al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación y será de su responsabilidad la implementación de este instrumento legal con celeridad, eficacia, justicia y equidad, más allá de las visiones nostálgicas, generalizaciones, preconcepciones, denuncias veladas y enfoques apocalípticos que han contenido muchas de las opiniones que se han vertido para descalificar el proyecto. Como decíamos al principio, sin reservas mentales, con absoluta tranquilidad de conciencia, creo que si hoy sancionamos esta ley estaremos dotando al Estado de una herramienta importante para solucionar los problemas que aparecen en el campo laboral. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Pierri).** — Corresponde votar en general.

**Sr. Galván.** — Solicito que la votación se efectúe en forma nominal.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado por La Rioja está suficientemente apoyado.

— Resulta suficientemente apoyado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar nominalmente.

— Se practica la votación nominal.

**Sra. Secretaria (Pérez Pardo).** — Sobre 160 señores diputados presentes en el recinto, han votado 96 por la afirmativa y 62 por la negativa, registrándose además una abstención.

— Votan por la afirmativa los señores diputados Abarto, Abilbagge, Albanonte, Alcalá, Alsogaray, Alvarez Echagüe, Araujo, Argiello, Arias, Arceche, Ayala, Badestrini (M. A.), Barberá, Barrionuevo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Bianchi Silvestre, Borli, Bracchi, Branda, Breser, Bullrich, Callaba, Cámara, Canóro, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Crostelli, D'Alessandro, Daud, De Hopiane, Díaz Martínez, Donni, Drisaldi, Duranona y Vedia, Funes, García Moreno, Gálvez, Giménez (D. A.), Giménez (R. E.), Giza, Golpe (C. H.), González, González Caballeros, Gramados, Hardy, Harreche, Iturre, Kachler, Kannerath, Kessler, Lafalla, Lahuoz,

Lamberto, Larraburn, Leguizamón, López (J. A.), López Arias, Macedo, Maqueda, Martínez (S. V.), Martínez Carbino, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Michitte, Migliozi, Miralles do Romero, Müller, Muniaurria, Nacul, Parada, Pepe, Pérez, Perrini, Pesce, Pichetto, Ró, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Saínido, Roggero, Rojo, Romero (C. A.), Salino, Sebastiani, Smith, Soria, Sucaria, Sueiro, Togni de Vely, Toto, Valcarcel, Varela Cid y Zicarelli.

—Votan por la negativa los señores diputados Algaba, Alvarez (C. A.), Alvarez García, Amendáriz, Ayetz, Balestra, Berhongaray, Bravo, Cabirón, Carea, Closs, D'Elia, Del Fabbro, Di Tulio, Digón, Dumaón, Estévez Boero, Fabrisini, Felgueras, Fernández Meijide, Figueroa, Fragoso, Gallo, Galván, Gama, Jaurriena, Kelly, Keth, Leconte, López (A. H.), Maidana, Marcos, Mathov, Mendoza (M.), Merender, Merendo Luna, Molardo, Molinas, Montiel, Moreau, Morello, Neder, Negri, Novati, Olivera, Orquín, Pascual, Pellin, Pernasetti, Pollino, Rico, Roig, Ruiz Palacios, Santín, Spinosa, Teodosio, Terragno, Trettel Meyer, Vázquez (S. B.), Viechi, Viglione y Zuccardi.

—Se abstiene de votar el señor diputado Brunelli.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Queda aprobado en general.

En consideración en particular el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 3º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Señor presidente: de acuerdo con las finalidades enunciadas en el artículo 1º, este proyecto tiende a prevenir y reparar los riesgos del trabajo.

Esta es una norma basada en algunos antecedentes extranjeros, aunque ya en este primer capítulo se aparta de dichos antecedentes, sobre todo los más modernos. En Europa claramente se tiende a separar lo que es la política de prevención de accidentes de lo que significa la reparación de los infortunios laborales. Además, el cumplimiento de la normativa laboral, particularmente en lo referido a higiene y seguridad, es controlado por las autoridades locales; y esta finalidad no ha sido delegada en entidades privadas, tal como se hace en el proyecto bajo análisis.

En algunos países el sistema de reparación está delegado en administradoras privadas, pero no así el de prevención de accidentes. En este proyecto se mezclan —incorrectamente, a nuestro criterio— los dos aspectos.

De esa manera se acuerdan funciones de prevención a aseguradoras y hasta a una superin-

tendencia de aseguradoras, olvidando que en materia de prevención rige en nuestro país la ley 19.587 y su decreto reglamentario 351/79, normas que en el texto en tratamiento no aparecen derogadas. Por ese motivo objetamos la redacción del inciso 1º del artículo 1º, en el que se señala que la prevención de los riesgos y la reparación de los daños se regirán por estas normas.

La ley de higiene y seguridad tiene por objetivo prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. De esta manera se plantea una dualidad: ¿cuál de las dos leyes será la vigente en materia de prevención? ¿La nueva ley o la anteriormente señalada de higiene y seguridad del trabajo?

Esta es una consulta que formulo a la comisión antes de proponer cualquier modificación. Deseo que nos aclare si entiende que la ley de seguridad e higiene y la autoridad de aplicación que en ella se plantea quedan abrogadas por esta nueva norma. Si no es así, proponemos que se aclare que en materia de prevención rigen la ley 19.587 y las disposiciones de la ley de riesgo del trabajo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Borda.** — Señor presidente: lo planteado por el señor diputado que acaba de hacer uso de la palabra me permite formular algunas aclaraciones.

Esta es una norma que ha sido discutida por los sectores involucrados, y los acuerdos logrados obligan a que lo estipulado en ella no sea modificable. Por tal motivo la comisión ratifica el texto original.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Quiero formular algunas observaciones a los artículos que conforman el capítulo I.

En relación con el inciso a) del artículo 2º el proyecto señala que están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la ley sobre riesgos del trabajo los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como se expresó cuando se trataba el proyecto en general, entendemos que existen impedimentos constitucionales para incluir dentro del ámbito de aplicación de la ley sobre riesgos del trabajo a los empleados de las provincias y municipios que se rigen por normas de empleo público propias y facultativas de las autoridades locales. Nos parece más razonable la redacción del proyecto originario

del Poder Ejecutivo, que posibilitaba la incorporación de los trabajadores de las provincias previa adhesión de éstas al sistema de la ley. No entendemos por qué la comisión se ha apartado del proyecto del Poder Ejecutivo en este sentido e incluye directamente a los trabajadores del Estado provincial y de los municipios. En consecuencia proponemos que se tome en cuenta el texto original, que posibilita la incorporación de dichos trabajadores previa adhesión a la ley.

En cuanto al artículo 3º, que se refiere al seguro obligatorio y autoseguro, cuestionamos la redacción de la norma por su ambigüedad en lo relativo a las condiciones para autoasegurarse, ya que los términos que utiliza —solvencia económica-financiera y que garanticen los servicios necesarios— son de muy difícil prueba y sumamente aleatorios.

Además nos queda otra duda que debe ser aclarada por la comisión para beneficio de todos los legisladores. Cuando existe autoseguro, ¿quién asume las obligaciones de control que la ley les acuerda a las compañías de seguro de riesgos del trabajo, por ejemplo en materia de control de las normas de higiene y seguridad o de los planes de mejoramiento de las condiciones de trabajo? Si hay autoseguro, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo no tiene competencia. Entonces, ¿quién constatará la gravedad del incumplimiento de las obligaciones del empleador, según lo estipulado en el inciso 2º del artículo 5º, que de acuerdo con esta norma corresponde a dicho organismo?

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino. — Señor presidente: propongo que se agregue como inciso d) del artículo 2º: "Los trabajadores domésticos que estén al servicio exclusivo del patrón y/o de sus familias". El fundamento de esta sugerencia es que estos trabajadores son los más desprotegidos en el ámbito del trabajo dependiente y deben contar con protección ante el accidente de trabajo, más aún cuando, como en la actualidad, manejan enseres electrodomésticos o artefactos a gas que pueden generar algún tipo de riesgo.

En caso de que la comisión no acepte la propuesta, sería conveniente que explique las razones por las que excluye a este sector de la protección de los riesgos establecidos en esta ley.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. Zuccardi. — Señor presidente: teniendo en cuenta lo señalado durante la consideración

en general, deseo sugerir una modificación en el artículo 3º, con la eliminación del autoseguro, quedando solamente lo de seguro obligatorio. Esto implica que todas las empresas deberán participar por el sistema del seguro obligatorio para generar universalidad y solidaridad en el sistema.

Aclaro que de esta manera funciona el sistema en Chile y seguramente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se ha inspirado en el sistema chileno. De lo contrario, de mantenerse este texto se podría correr el riesgo de que empleadores con mayor poder económico tengan menor costo laboral, y empleadores con menor poder económico cuenten con costos laborales mayores.

La sugerencia ha de permitir garantizar la efectiva solidaridad del sistema, respetando la universalidad del principio.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. López (A. H.). — Señor presidente: el punto 2 del artículo 2º dice que el Poder Ejecutivo podrá incluir en el ámbito de la LRT a los trabajadores domésticos, los trabajadores autónomos, los trabajadores vinculados por relaciones no laborales y los hombres voluntarios. Se trata de una nueva delegación de facultades al Poder Ejecutivo que me parece incorrecta. Puedo afirmar que todas las incorporaciones hechas con anterioridad a la Ley de Accidentes de Trabajo se realizaron por ley.

Así es como tenemos los siguientes casos: la inclusión de los alumnos de las escuelas técnicas por la ley 12.921, la de los bomberos voluntarios por la ley 19.052, la de los trabajadores incorporados por el decreto ley 412/58, la de los enfermos de lepra por la ley 19.584, la de los trabajadores a domicilio por la ley 12.703.

Por lo tanto, el texto de este artículo tendría que decir que el Poder Ejecutivo deberá incluir en el ámbito de la ley sobre riesgos del trabajo, a partir de su reglamentación, a los trabajadores domésticos, los autónomos, los vinculados por relaciones no laborales y los bomberos voluntarios.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión aclarará que lo planteado por el señor diputado Polino está contemplado en el punto 2 del artículo 2º, pero a los efectos de aclarar la cuestión, en lugar de decir "El Poder Ejecutivo podrá incluir..." proponemos que se exprese: "El Poder Ejecutivo deberá incluir...". Por lo

tanto, la comisión acepta la propuesta del señor diputado Polino.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Chaco.

**Sr. Ruiz Palacios.** — Señor presidente: en el artículo 2º, punto 1 se dice que están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Quisiera preguntar al señor presidente de la comisión si están incluidos o excluidos los miembros de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales. Si es así, convendría aclararlo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Borda.** — Señor presidente: el punto 2 se refiere a una cuestión posterior al planteo del señor diputado por el Chaco. El señor diputado Ruiz Palacios alude al inciso a) del punto 1 del artículo 2º, cuando menciona a los funcionarios y empleados del sector público nacional, provincial, municipal y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta del señor diputado por la Capital se refiere al punto 2 del artículo 2º, respecto de lo cual la comisión ha aceptado que se diga: "El Poder Ejecutivo deberá incluir...".

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

**Sr. Ruiz Palacios.** — Señor presidente: solicito que se aclare si no se incluye en esta norma al personal de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, porque será objeto de otra disposición.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

**Sr. Molinas.** — Señor presidente: entiendo que no es conveniente este tipo de redacción por la que se establece que el Poder Ejecutivo deberá incluir a determinado sector, pues ello implica imponerle la obligación de que en un caso lo haga y en otro no.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Borda.** — Señor presidente: aclaro que están incluidos los sectores a los que se ha referido el señor diputado Ruiz Palacios.

**Sr. Ruiz Palacios.** — Si me permite, señor presidente, interpreto que la cuestión no ha sido aclarada pues, de acuerdo con algunas interpretaciones, los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad no son considerados empleados públicos. A los efectos de una mayor

claridad del texto, propongo que, de estar incluidos, se lo establezca específicamente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Señor diputado Borda: el señor diputado Ruiz Palacios sugiere a la comisión que se incluya a ese sector, si es ésa la intención.

**Sr. Borda.** — Vamos a incluirlo, de manera que quede específicamente determinado.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

**Sr. Fragoso.** — Señor presidente: en rigor, el señor diputado Ruiz Palacios solicita que expresamente se aclare que las fuerzas armadas quedan excluidas; no que se las incluya.

**Sr. Borda.** — Están incluidas, señor presidente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Así lo ha interpretado la Presidencia: las fuerzas de seguridad están incluidas.

**Sr. Fragoso.** — Pero el señor diputado Ruiz Palacios pide que queden excluidas.

**Sr. Ruiz Palacios.** — Si me permite, señor presidente, lo que propongo es que quede taxativamente establecido en la ley si están incluidas o excluidas, a efectos de que esta cuestión no sea objeto de interpretaciones.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor miembro informante.

**Sr. Borda.** — Señor presidente: ratificamos el texto del artículo 2º, según el cual están obligatoriamente incluidas...

**Sr. Presidente (Pierri).** — En consecuencia, la Presidencia entiende que no hay dudas al respecto.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Cauna.** — Señor presidente: no es una discusión bizantina la que estamos teniendo. En la terminología de la legislación argentina, hablar de funcionarios y empleados públicos jamás involucró a las fuerzas armadas. Incluso, la ley de procedimientos administrativos que se les aplica a estos funcionarios y empleados, excluye expresamente a las fuerzas armadas por que tienen un régimen especial y específico.

Entonces, no sé cuál es la voluntad del legislador por boca del señor diputado Borda; pero por más que él considere que simplemente con esta mención se incluye a las fuerzas armadas, me parece que estamos frente a un dislate jurídico.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia entiende que es oportuna su aclaración.

Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

**Sr. Calván.** — Señor presidente: esto tiene que quedar debidamente aclarado.

Cuando en 1904 el doctor Joaquín V. González informa su Código de Trabajo, realiza la génesis en nuestro derecho positivo del origen y proyección de este nuevo derecho, y lo tipifica claramente como un derecho de tipo civil.

El mismo sentido común nos advierte que no es lo mismo el riesgo y el infortunio de un hombre de armas cumpliendo su servicio, que el de un obrero que está bajo las órdenes de un patrón de una fábrica.

Por otro lado, la ley, como la de la Policía Federal Argentina y aquellas que informan la disciplina de las fuerzas armadas, claramente establecen el tipo de riesgos en tiempos de paz y en tiempos de guerra.

Por lo tanto, la comisión debe aclarar que esta legislación se refiere exclusivamente al campo civil y laboral.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: ni en la ley 9.688 ni en la actualmente vigente en materia de accidentes de trabajo se incluye el personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Pretender incluirlo es una sinrazón.

Sr. Borda. — Con la redacción del artículo queda expresamente aclarado que están excluidos.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — Habiéndose hecho la aclaración pertinente se va a votar el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 3º.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el capítulo II, que incluye los artículos 4º y 5º.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: el artículo 4º habla de las obligaciones de las partes. Establece como obligación común para empleadores, trabajadores y aseguradores de riesgo, cumplir con las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.

Proponemos la supresión de la palabra "eficazmente" porque, si existe una norma legal que establece determinadas condiciones de higiene y seguridad, debe cumplirse tal como está, sin considerar la eficacia o no de la norma, porque ella tiene vigencia con independencia de la valoración que puedan hacer las partes.

Lo que nos parece absurdo y fuera de toda técnica legislativa es la reducción del segundo

párrafo del inciso 1 del artículo 4º, que obliga a las partes a asumir compromisos concretos para cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, compromisos que pueden ser unilaterales, formar parte de la negociación colectiva o incluirse dentro de los contratos de seguro.

Sabemos que las leyes laborales son de orden público, tienen vigencia y deben ser aplicadas con independencia de la voluntad de las partes. La ley es obligatoria a partir de su publicación, y su eficacia y cumplimiento no pueden estar sujetos a compromisos contractuales o unilaterales.

La ley de higiene y seguridad establece requisitos mínimos que deben cumplir las empresas y no está sujeta a la vigencia de ningún acuerdo. Por ello debe suprimirse el segundo párrafo del inciso 1 del artículo 4º.

En cuanto al inciso 2, puedo decir que han hecho mención de él algunos señores diputados cuando en el debate en general hablaron del plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento no puede ser sino el cumplimiento de las obligaciones mínimas que establece la ley de seguridad e higiene. No puede ser objeto de negociación y tiene que cumplirse lo que la ley prescribe, sin estar sujeto a un plan de mejoramiento, porque la obligación del empleador consiste en cumplir con la ley vigente.

Por otro lado, pedimos la supresión del inciso 4 que delega el control de las normas de higiene y seguridad en entidades privadas, como son las aseguradoras de riesgos de trabajo.

El poder de policía es de la Nación y es concurrente con las provincias y con las municipalidades. No puede delegarse ese poder de policía de control de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, en entidades privadas. Además, volvemos al tema del autoseguro, que se mantiene de acuerdo a lo que aprobó la mayoría de la Cámara. ¿Qué pasa si hay autoseguro? ¿Quién controla al empleador? Esto demuestra lo absurdo de la redacción que se pretende aprobar.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: hay que dejar en claro algunas situaciones. En primer lugar, la ley que obliga a un régimen de seguridad e higiene no será derogada por la sanción de este proyecto de ley. La futura norma lo que va a hacer es buscar la forma de que los trabajadores y empresarios establezcan normas de prevención, porque no venimos a sancionar un proyecto para pagar incapacidades a la gente que se accidenta. Lo que buscamos es que exis-

ta prevención para que no sucedan los accidentes. Entonces no veo por qué algunos señores diputados se preocupan si los trabajadores y los empresarios van a seguir buscando la forma de prevenir accidentes.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Señor presidente: voy a plantear objeciones con respecto al artículo 5º, que se refiere a recargos por incumplimiento. Allí se dice que si el accidentado sufre un daño producido como consecuencia de incumplimientos por parte del empleador a la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía una suma de dinero cuya cuantía se graduará en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil pesos.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá determinar la gravedad de los incumplimientos y fijar el monto del recargo, además de gestionar su cobro. En este caso, no se contempla el interés del trabajador.

El dictamen modifica la redacción original del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que establecía que de ese recargo o multa el 50 por ciento sería destinado al Fondo de Garantía, pero el otro 50 por ciento quedaría para el trabajador afectado o sus derechohabientes.

Además, no existe un agravamiento del incumplimiento. Tal como en los casos anteriores, no nos han respondido satisfactoriamente. Nos preguntamos qué pasa en el caso del autoseguro y qué sucede con quien va a graduar el incumplimiento del empleador para establecer la multa. Eso no está previsto en la iniciativa y, tal como está redactada, va a generar todo lo contrario a lo que se quiere prevenir, que es la mayor litigiosidad.

Por eso proponemos, para el caso del artículo 5º, que se mantenga la redacción original del proyecto del Poder Ejecutivo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — ¿Acepta la comisión?

**Sr. Borda.** — La comisión no acepta.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a llamar para votar.

— Se llama para votar.

— Mientras se llama para votar:

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a pasar lista. En caso de no alcanzarse el quórum, se pasará a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

— Se continúa llamando para votar.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Se va a votar el capítulo II, que comprende los artículos 4º y 5º.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Aunque se ha alcanzado el quórum, igualmente se va a pasar lista.

— Se pasa lista, registrándose la presencia de 132 señores diputados.

— Al pase de lista, se encuentran presentes los señores diputados: Abasto, Abilagge, Albamonte, Alcalá, Álvarez Echagüe, Aranda, Argüello, Arias, Armandariz, Arcechea, Ayala, Balestrini (M. A.), Barbón, Barriomeyo, Baum, Becerra (N. E.), Benzi, Berhongaray, Bianchi Silvestre, Borda, Bracchi, Branda, Bresser, Brunelli, Bullrich, Callabá, Cúmará, Camaró, Carca, Casari de Alarcía, Castillo (J. L.), Castro, Crostelli, D'Alessandro, D'Elia, Dand, Del Pabro, Dellepiane, Domi, Drisaldi, Durafina y Vedia, Durrion, Fabrisin, Polgueras, Fragozo, Funes, García Moreno, Gama, Gazia, Giménez (D. A.), Giménez (R. F.), Gioja, Golpe (C. H.), González, González Cabafias, Granados, Hardy, Ibarache, Iturre, Jaunarena, Kachler, Kammerrath, Kelly, Kessler, Lafalla, Laniberto, Larrauri, Leconte, Leguizamón, López (A. H.), López (J. A.), López Arias, Macedo, Maqueda, Marcos, Martínez (S. J.), Martínez Garbino, Mathov, Matzkin, Mendoza (C. R.), Menem, Mercader, Mercado Luna, Michitte, Migliozi, Miralles de Romero, Molardo, Molinas, Moreau, Müller, Muniagurria, Nacul, Neder, Novau, Olivera, Orquín, Parada, Pasenal, Pepe, Pérez, Pernasetti, Perrini, Pesce, Pierri, Polino, Ré, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Sañudo, Roggero, Roig, Rojo, Romero (C. A.), Ruiz Palacios, Salino, Sebastiani, Smith, Sobrino, Soria, Suecra, Sueiro, Tevez, Terragno, Togni de Velly, Toto, Trettel Meyer, Valearcel, Varela Cid, Vázquez (S. B.), Vicchi, Viglione, Zicavelli y Zuccardi.

**Sr. Presidente (Pierri).** — La Presidencia no quiere estar solicitando permanentemente a los diputados que ingresen al recinto. Si los señores diputados no tienen vocación para considerar el articulado, se va a pasar a cuarto intermedio.

En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 6º a 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Señor presidente: evidentemente, tenemos vocación para tratar este proyecto de ley, aunque sea frustrante efectuar propuestas y consultas que tienden a mejorarlo y recibir siempre la negativa de la comisión.

A veces, ni siquiera obtenemos respuestas a los interrogantes que planteamos, los que no sólo son nuestros sino que también serán de la sociedad cuando sea la iniciativa aprobada.

Sr. Presidente (Pierri). — Para que no queden dudas, la Presidencia anuncia que luego de la próxima votación se va a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las hora 15.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: sería interesante que el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra en esta Cámara, se hiciera presente en el recinto, ya que tenemos algunas dudas que quisiéramos que él nos respondiese. Me refiero, sobre todo, al artículo 6º, que estamos analizando y se vincula con las contingencias que cubre la norma, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Define accidente de trabajo como: "Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo". Nosotros entendemos que esta definición ha omitido un detalle esencial que es la referencia a la existencia de daño o de una lesión. Estamos diciendo que un accidente es un hecho súbito y violento que ocurre en ocasión del trabajo, pero no aludimos a las consecuencias, y lo que se indemniza en nuestra legislación son las consecuencias del accidente, o sea las lesiones que ese hecho produce al trabajador.

En el derecho comparado la definición de accidente siempre hace referencia a una lesión. "Toda lesión orgánica o funcional que en forma violenta o repentina sufran los trabajadores", dice el código de los Países Bajos. El artículo 2º de la ley actual establece la responsabilidad del empleador por los daños psicofísicos sufridos por los trabajadores. Es decir que el concepto de accidente está centrado en la existencia de una lesión corporal o funcional que se produce como corolario de un evento súbito y repentino. Pero el artículo en consideración no hace referencia a las consecuencias del accidente y por eso entendemos que corresponde su modificación estableciendo que un accidente importa la lesión o daño psicofísico producido por un acontecimiento súbito. Esta es una propuesta concreta que hacemos a la comisión.

Con relación a las enfermedades profesionales, la ley considera como tales a las causadas

por las tareas cumplidas por el trabajador o por las condiciones medioambientales del trabajo siempre y cuando estén incluidas en el listado de enfermedades profesionales que confeccionará y revisará anualmente el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pierri). — La comisión tiene una propuesta que hacer y quizás ahorraremos tiempo si le concedemos una interrupción.

Sr. Borda. — Señor presidente: la comisión propone reemplazar el apartado 2 del artículo 6º por el siguiente: "Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles".

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Aun con la redacción que propone la comisión se mantiene la objeción que formulamos porque, si no entendí mal, las enfermedades no incluidas en el listado, así como sus consecuencias, en ningún caso serán consideradas resarcibles.

La existencia de listados de enfermedades no es nueva. Se originó en la ley 9.688. La responsabilidad del empleador dependía de la calificación que como enfermedad profesional efectuaba el Poder Ejecutivo. Pero la reforma al artículo 22 de la ley 9.688 producida por la ley 18.913 suprimió la denominación de enfermedad profesional y la necesidad de la declaración expresa y de la inclusión en el listado por parte del Poder Ejecutivo. Si la enfermedad había sido motivada por el trabajo no era necesaria la inclusión en el listado debido a que la jurisprudencia había elaborado el concepto de enfermedad accidente, casualmente para suplir ese listado cerrado que traía la ley 9.688.

La definición que trae el proyecto, con el agregado que plantea el señor diputado Borda, responde a los antecedentes de la legislación comparada, pero lo que no nos parece correcto es la limitación del último párrafo, que como dije se mantiene en la propuesta que nos acaba de plantear el señor diputado Borda. Entendemos que no debe existir esa limitación. Es pre-

terrible que se mantenga la posibilidad de que, aun no estando en el listado, si el trabajador prueba una relación directa entre sus tareas o el medio con la enfermedad, pueda ésta ser considerada enfermedad del trabajo.

Si bien el sistema de lista cerrada puede ser más simple y da seguridad pues crea una presunción de imputabilidad al trabajo, hay que reconocer que los cambios que se producen en las condiciones de trabajo, en la técnica y en las mismas condiciones de la sociedad pueden hacer aparecer enfermedades que hoy no conocemos o de las cuales desconocemos las causas. Por lo tanto, tiene que existir la posibilidad de que el trabajador pueda plantear la incidencia de su actividad en la nueva dolencia que puede aparecer.

Por eso planteamos la modificación o supresión del último párrafo de este artículo.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Polino.** — Señor presidente: voy a proponer un agregado al punto 1 del artículo 6º, que se refiere al trayecto del trabajador desde su domicilio al lugar de trabajo. La iniciativa dice que si el trabajador cambia el itinerario queda desprotegido, es decir, que no queda cubierto el riesgo o el accidente que pueda ocurrirle.

Yo propongo el siguiente agregado, que creo que la comisión va a aceptar: "El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las 48 horas ante el asegurador, que el *itinerario* se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres días hábiles de requerido".

Creo que de esta manera protegemos al trabajador frente a esas circunstancias, pero con la acreditación correspondiente que él se obliga a presentar.

**Sr. Presidente (Pierri).** — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

**Sr. Sueiro.** — En relación con la petición del señor diputado Polino quiero señalar que la actual ley de accidentes de trabajo tampoco contempla esta situación. Es más, cuando en su artículo 3º se refiere a accidentes *in itinere* es aún más restrictiva que la redacción propuesta en el artículo en consideración.

En consecuencia, al ser esta redacción más abarcativa que el artículo 3º de la ley de accidentes de trabajo, referido al accidente *in itinere*,

quedaría comprendida cualquier situación que pudiera presentarse, incluidos los supuestos señalados por el señor diputado Polino.

Por otra parte, siempre es un derecho del trabajador producir una comunicación de esta naturaleza sin que para ello sea necesario que el caso esté previsto específicamente en la ley.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

**Sr. Pernasetti.** — Señor presidente: en el apartado 3 del artículo 6º, referido a las exclusiones, se establece que están excluidos de esta ley los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo. Sin embargo, la redacción del inciso b) del artículo 7º de la ley actual es mejor, ya que cuando se refiere a fuerza mayor aclara qué se entiende por tal y señala que se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la contingencia que habría producido el daño al trabajador con independencia del trabajo.

Ese es un agregado sabio que puede evitar la proliferación de litigios ya que, tal como se propone, el inciso a) del punto 3 del artículo 6º no hace ninguna aclaración al referirse a fuerza mayor extraña al trabajo. El agregado que propongo permite tal aclaración y tiene un antecedente en la ley vigente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

**Sr. Borda.** — Señor presidente: la comisión aceptaría la propuesta del señor diputado Polino si accediera a que la comunicación de cambio de itinerario se realizara con 72 horas de anticipación.

**Sr. Polino.** — Acepto la ampliación del plazo de 48 a 72 horas, señor presidente.

**Sr. Presidente (Pierri).** — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el capítulo III, que comprende los artículos 6º a 10.

— Resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Pierri).** — En uso de las facultades que confiere a esta Presidencia el artículo 157 del reglamento, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15.

— Es a las 15 hora 0 y 27 del día 15.

FELIPE F. RAMOS  
Director del Cuerpo de Traductores.